

MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA  
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN  
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN  
Vigésima Quinta Reunión del Comité de Expertos  
Del 16 al 20 de marzo de 2015  
Washington, DC

OEA/Ser.L.  
SG/MESICIC/doc.431/14 rev. 4  
20 marzo 2015  
Original: inglés

LAS BAHAMAS

INFORME FINAL

(Aprobado en la sesión plenaria del 20 de marzo de 2015)

## SUMARIO

El presente informe contiene el análisis integral de la implementación en Las Bahamas del artículo III, Párrafo 9, de la Convención Interamericana contra la Corrupción, correspondiente a “órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas”, que fue seleccionada por el Comité de Expertos del MESICIC para la Cuarta Ronda; las buenas prácticas informadas por dichos órganos; y el seguimiento de la implementación de las recomendaciones que se le formularon a Las Bahamas en la Primera Ronda.

El análisis se efectuó dentro del marco de la Convención, el Documento de Buenos Aires, el Reglamento del Comité, y las metodologías adoptadas por el mismo para la realización de las visitas in situ y para la Cuarta Ronda, incluidos los criterios allí establecidos para orientar el análisis sobre tratamiento igualitario para todos los Estados parte, equivalencia funcional, y el propósito tanto de la Convención como del MESICIC de promover, facilitar y fortalecer la cooperación entre los Estados Parte en la prevención, detección, sanción y erradicación de la corrupción.

Para llevar a cabo el análisis se contó con la respuesta de Las Bahamas al cuestionario; y con una nueva e importante fuente de información, como lo fue la visita in situ realizada entre el 23 y el 25 de septiembre de 2014 por Costa Rica, como miembro del subgrupo de análisis de Las Bahamas, con el apoyo de la Secretaría Técnica, con ocasión de la cual se pudo precisar, aclarar y complementar la información suministrada por Las Bahamas y escuchar opiniones de organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, asociaciones profesionales, académicos e investigadores sobre temas útiles para el análisis, lo cual contribuyó a que el Comité contara con información objetiva y completa sobre dichos temas, facilitó la obtención de información sobre buenas prácticas.

El análisis de los órganos de control superior se orientó, de acuerdo con lo previsto en la metodología para la Cuarta Ronda, a determinar si los mismos cuentan con un marco jurídico, si éste es adecuado, para los propósitos de la Convención, y si existen resultados objetivos; y teniendo en cuenta lo observado se formularon las recomendaciones pertinentes al Estado analizado.

Los órganos de control superior de Las Bahamas analizados en este informe son: la Oficina de la Procuraduría General; la Comisión de Difusión Pública; el Departamento del Auditor Público; la Unidad de Inteligencia Financiera; y la Comisión de Cumplimiento.

Algunas de las recomendaciones formuladas a Las Bahamas para su consideración en relación con los anteriores órganos apuntan a propósitos tales como, los que se destacan a continuación:

Con respecto a los órganos de control en general, proveer con los recursos para el cabal desarrollo de sus funciones.

En cuanto a la Oficina de la Procuraduría General, establecer un servicio de fiscalía independiente con sujeción a la Constitución y a los principios fundamentales de sistema jurídico interno; incluir en el Manual de la Fiscalía Pública una reseña de prácticas y políticas pertinentes para el procesamiento por actos de corrupción, incluidas las de soborno transnacional; e implementar mecanismos que garanticen una adecuada coordinación entre los fiscales policiales y la Fiscalía, y la supervisión por ésta de los fiscales policiales, para el caso de que se asigne a estos últimos la función de promover procesamientos por actos de corrupción.

Con respecto a la Comisión de Difusión Pública, considerar la posibilidad de establecer disposiciones que estipulen que la Comisión es independiente en el ejercicio de las funciones que le encomienda la Ley de Difusión Pública; establecer y mantener actualizado un sitio web para la Comisión de Difusión Pública; implementar medios electrónicos para completar la declaración así como para entregarlas a la Comisión, por quienes estén obligados por la Ley de Difusión Pública; y considerar la posibilidad de establecer los requisitos para la publicación de informes anuales por parte de la Comisión de Difusión Pública sobre las actividades por ella realizadas durante un año.

En lo atinente al Departamento del Auditor Público, considerar cumplir con la Ley de Administración Financiera y Auditoría de 2010, al promulgar el Reglamento Financiero; proporcionar al Departamento del Auditor General una mayor autonomía para la preparación y presentación de su presupuesto; cumplir con el plazo establecido por ley para la presentación de un informe anual por el Departamento del Auditor General; y considerar la posibilidad de proporcionar al Auditor General la base legal para denunciar una irregularidad, tal como una actividad fraudulenta, a autoridades competentes, tales como la Real Fuerza Policial de Las Bahamas y la Oficina del Procurador General.

En lo relativo a la Unidad de Inteligencia Financiera, coordinar con otros órganos de control para proporcionar capacitación a instituciones gubernamentales y privadas, instituciones financieras, y al público en general para detectar actos de corrupción en cuanto esté relacionada con la labor de la Unidad de Inteligencia Financiera; buscar oportunidades de capacitación proporcionada por asociados y organismos internacionales, para el personal de la Unidad de Inteligencia Financiera en materia de lucha contra la corrupción en cuanto esté relacionada con su labor; y tomar medidas encaminadas a asegurar que todas las instituciones financieras establezcan adecuados sistemas de gestión de riesgos para determinar si un cliente es una persona políticamente expuesta.

En cuanto a la Comisión de Cumplimiento, permitir a la Comisión la atención de sus necesidades de recursos humanos a través de procesos de reclutamiento externo realizados por la Comisión del Servicio Público; preparar y publicar un informe anual de las actividades de la Comisión, que contenga información sobre temas tales como número de exámenes y actividades de capacitación realizadas en un año, estadísticas sobre su labor, así como otra información importante, tal como su plan de trabajo y sus gastos presupuestarios; y publicar en línea los materiales de capacitación que utiliza la Comisión de Cumplimiento para orientar a las instituciones financieras sobre la implementación de normas anti lavado de dinero

Las buenas prácticas sobre las que Las Bahamas suministró información se refiere a la Iniciativa de Justicia SWIFT.

Con respecto al seguimiento de las recomendaciones formuladas a Las Bahamas en la Primera Ronda, sobre las que el Comité estimó que requerían atención adicional en los informes de la Segunda y Tercera Rondas, con base en la metodología de la Cuarta Ronda y teniendo en cuenta la información suministrada por Las Bahamas en su respuesta al cuestionario y en la visita in situ, se definieron cuáles de dichas recomendaciones habían sido implementadas satisfactoriamente; cuáles requerían atención adicional; y cuáles precisaban ser reformuladas, y se hizo un recuento de las que quedan vigentes, el cual se incluye como anexo I del informe.

Entre los avances relativos a la implementación de tales recomendaciones se destaca: la introducción del proyecto de Ley sobre Organizaciones de la Sociedad Civil, de 2014 y la aplicación de un mecanismo de canalización de solicitudes de cooperación sobre asistencia judicial mutua, según lo previsto en la Convención.

Algunas de las recomendaciones formuladas a Las Bahamas en la Primera Ronda que quedan vigentes o que fueron reformuladas, apuntan a propósitos tales como: establecer o adaptar y luego implementar normas de conducta a las oficinas que actualmente no están sujetas a control alguno, en cuyo contexto deberían establecerse sanciones disuasivas por violaciones de esas normas; establecer medidas y sistemas que exijan informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública para aquellos funcionarios y empleados públicos que actualmente no se encuentran obligados a hacerlo; sancionar una Ley de Libertad de Información que regule y facilite el acceso del público a información con fines de control de las instituciones públicas; y notificar formalmente a la Secretaría General de la OEA la designación de la autoridad central, conforme a las formalidades preceptivas.

# **COMITÉ DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN**

## **INFORME RELATIVO A LA IMPLEMENTACIÓN EN LAS BAHAMAS DE LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA CUARTA RONDA, Y SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS A DICHO PAÍS EN LA PRIMERA RONDA<sup>1</sup>**

### **INTRODUCCIÓN**

#### **1. Contenido del Informe**

[1] El presente informe se referirá, en primer lugar, al análisis integral de la implementación en Las Bahamas de la disposición de la Convención Interamericana contra la Corrupción que fue seleccionada por el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la misma (MESICIC) para la Cuarta Ronda de Análisis. Dicha disposición es la prevista en el artículo III, párrafo 9, de la Convención, correspondiente a “órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas”.

[2] En segundo lugar, aludirá a las buenas prácticas que en relación con los órganos de control superior objeto de análisis en el presente informe, el Estado analizado ha deseado voluntariamente compartir.

[3] En tercer lugar, de conformidad con lo acordado por el Comité de Expertos del MESICIC en su Decimoctava Reunión, en cumplimiento de la recomendación 9, a), de la Tercera Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC, versará sobre el seguimiento de la implementación de las recomendaciones que le fueron formuladas a Las Bahamas por el Comité de Expertos del MESICIC en el informe que adoptó para este país en la Primera Ronda, y que ha estimado que requieren atención adicional en los informes que adoptó para el mismo en la Segunda y Tercera Rondas, los cuales se encuentran publicados en: [www.oas.org/juridico/spanish/bhs.htm](http://www.oas.org/juridico/spanish/bhs.htm)

#### **2. Ratificación de la Convención y vinculación al Mecanismo**

[4] De acuerdo con el registro oficial de la Secretaría General de la OEA, Las Bahamas depositó el instrumento de ratificación de la Convención Interamericana contra la Corrupción el día 14 de marzo de 2000.

[5] Asimismo, Las Bahamas suscribió la Declaración sobre el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, el día 4 de junio de 2001.

### **I. SUMARIO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA**

#### **1. Respuesta de Las Bahamas**

---

<sup>1</sup> El presente informe fue aprobado por el Comité, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3 g) y 25 del Reglamento y Normas de Procedimiento, en la sesión plenaria celebrada el día 20 de marzo de 2012, en el marco de su Vigésima Quinta Reunión, la cual tuvo lugar en la sede de la OEA, del 16 al 20 de marzo de 2015.

[6] El Comité desea dejar constancia de la colaboración recibida de Las Bahamas en todo el proceso de análisis y, en especial, de la Oficina de la Procuraduría General, la cual se hizo evidente, entre otros aspectos, en su respuesta al cuestionario y en la disponibilidad que siempre mostró para aclarar o completar el contenido de la misma, al igual que en el apoyo para la realización de la visita *in situ* a la que se hace referencia en el párrafo siguiente del presente informe. Las Bahamas envió junto con su respuesta las disposiciones y documentos que estimó pertinentes. Dicha respuesta y tales disposiciones y documentos pueden consultarse en: [www.oas.org/juridico/english/mesicic4\\_bhs.htm](http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4_bhs.htm)

[7] Asimismo, el Comité deja constancia que el Estado analizado otorgó su anuencia para la práctica de la visita *in situ* de conformidad con lo previsto en la disposición 5 de la *Metodología para la Realización de las Visitas In situ*,<sup>2</sup> la cual se realizó durante los días 23 al 25 de septiembre de 2014, por parte de la representante de Costa Rica, en su calidad de integrante del subgrupo de análisis, contando para ello con el apoyo de la Secretaría Técnica del MESICIC. La información obtenida en dicha visita se incluye en los apartados correspondientes del presente informe y su agenda se anexa al mismo, de conformidad con lo previsto en la disposición 34 de la *Metodología para la Realización de las Visitas In situ*.

[8] El Comité tuvo en cuenta para su análisis la información suministrada por Las Bahamas hasta el día 25 de septiembre de 2014, fecha de culminación de la visita antes aludida y la que fue aportada y le fue solicitada por la Secretaría y por los integrantes del subgrupo de análisis para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con el *Reglamento y Normas de Procedimiento del Comité; la Metodología para el Análisis de la Implementación de la disposición de la Convención Interamericana contra la Corrupción Seleccionada en la Cuarta Ronda; y la Metodología para la Realización de las Visitas In situ*.

## **2. Documentos y opiniones recibidos de organizaciones de la sociedad civil y /o, entre otros, de organizaciones del sector privado; asociaciones profesionales; académicos e investigadores**

[9] El Comité no recibió, dentro del plazo fijado en el Calendario para la Cuarta Ronda, documentos de organizaciones de la sociedad civil de conformidad con lo previsto en el artículo 34, inciso b), del Reglamento del Comité.

[10] No obstante, con ocasión de la práctica de la visita *in situ* realizada al Estado analizado, se recabó información de organizaciones de la sociedad civil y del sector privado que fueron invitadas a participar en reuniones con tal fin, de conformidad con lo previsto en la disposición 27 de la *Metodología para la Realización de las Visitas in Situ*, cuyo listado se incluye en la agenda de dicha visita *in situ* que se anexa al presente informe. Esta información se refleja en los apartados correspondientes del mismo, en lo que resulta pertinente para sus propósitos.

## **II. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN POR EL ESTADO PARTE DE LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA LA CUARTA RONDA:**

---

<sup>2</sup> La Metodología para la Realización de las Visitas *In situ* (documento SG/MESICIC/doc.276/11 rev. 2) está disponible en: [www.oas.org/juridico/spanish/met\\_insitu.pdf](http://www.oas.org/juridico/spanish/met_insitu.pdf)

## **ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR, CON EL FIN DE DESARROLLAR MECANISMOS MODERNOS PARA PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR Y ERRADICAR LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 9 DE LA CONVENCIÓN)**

[11] Las Bahamas cuenta con un conjunto de órganos de control superior con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar prácticas corruptas, entre los que se destacan la Oficina de la Procuraduría General, la Comisión de Difusión Pública, el Departamento del Auditor Público, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión de Cumplimiento y la Real Fuerza Policial de Las Bahamas.

[12] A continuación se hace una breve descripción de los propósitos y funciones de los cinco órganos seleccionados por Las Bahamas que serán analizados en el presente informe:

[13] La Oficina de la Procuraduría General, que en general es responsable de promover el procesamiento por delitos penales, incluidos los relacionados con corrupción, tiene como cometido principal proporcionar oportuno asesoramiento jurídico al Gobierno y a organismos de creación legal, brindando al Gobierno la representación legal más eficiente y eficaz posible en asuntos nacionales e internacionales; redactando textos legales y promoviendo el acceso a la justicia para todos y la transparencia en el sistema jurídico.

[14] La Comisión de Difusión Pública, cuyo cometido consiste en examinar las declaraciones patrimoniales anuales de miembros de la Cámara Baja, Senadores, altos funcionarios públicos y personas designadas para cargos públicos conforme a las disposiciones de la Ley de Difusión Pública de 1976.

[15] El Departamento del Auditor Público, que es la institución de auditoría de mayor jerarquía del Estado; es responsable de las auditorías financieras de todos los departamentos e instituciones gubernamentales.

[16] La Unidad de Inteligencia Financiera, que se encarga de recibir, analizar, obtener y distribuir informes sobre transacciones sospechosas.

[17] La Comisión de Cumplimiento, que supervisa a las instituciones financieras en relación con la realización de transacciones financieras y para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Información sobre Transacciones Financieras.

### **1. OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL**

#### **1.1. Existencia de un marco jurídico y/o de otras medidas**

[18] La Oficina de la Procuraduría General cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[19] Con respecto a sus objetivos y funciones, el Artículo 78(1) de la Constitución de Las Bahamas establece que el Procurador General tiene la potestad de instituir y llevar a cabo procedimientos penales contra cualquier persona ante cualquier corte de justicia y en relación con cualquier delito previsto en la legislación de Las Bahamas; asumir competencia en cualquier procedimiento penal de ese género que pueda haber sido instituido por cualquier otra persona o autoridad, llevarlo adelante e interrumpirlo en cualquier etapa anterior al dictado de sentencia, cualquiera de tales procedimientos

penales instituidos o llevados a cabo por el Procurador General o por cualquier otra persona o autoridad.<sup>3</sup>

[20] El Artículo 78(4) de la Constitución establece además que en el ejercicio de esas potestades el Procurador General no está sujeto a la dirección o control de ninguna otra persona o autoridad. Además, el Artículo 78(2) establece que esas potestades pueden ser ejercidas por el Procurador General o por éste a través de otras personas que actúen bajo la autoridad y conforme a instrucciones generales o específicas del Procurador General. A ese respecto la Oficina de la Procuraduría General tiene un Departamento de Fiscalía que ha sido autorizado por el Procurador General a ejercer la potestad constitucional y legal de iniciar y poner fin a procedimientos penales en Las Bahamas.<sup>4</sup> Ese departamento es el encargado de promover procesamientos en todos los asuntos penales tramitados ante la Corte Suprema, y de realizar la supervisión general de los procesamientos dispuestos por cortes de la magistratura.<sup>5</sup> Además se ha establecido en ese Departamento un grupo de práctica sobre corrupción, y durante la visita *in situ* se señaló que está formado por 4 abogados y se ocupa principalmente de delitos financieros.<sup>6</sup>

[21] El Procurador General es designado por el Gobernador General con asesoramiento del Primer Ministro, y es miembro del Gabinete. Su designación puede ser propuesta por un miembro de la Cámara Baja o del Senado.<sup>7</sup> A ese respecto, el Procurador General debe dejar el cargo cuando se designa o reelige a alguien como Primer Ministro; si por cualquier razón distinta de disolución del Parlamento el Procurador General deja de integrar la Cámara Baja de entre cuyos miembros haya sido designado, o si la designación es revocada por el Gobernador General actuando de conformidad con el Primer Ministro.<sup>8</sup> Además, quien sea designado como Procurador General debe dejar de ejercer ese cargo si siendo miembro de la Cámara Baja o del Senado se ha dictado contra él una sentencia de muerte o prisión, ha sido declarado mentalmente incapaz, declarado en quiebra o declarado culpable o convicto de una práctica corrupta o ilegal en elecciones.<sup>9</sup> Además, como el Procurador General es designado entre los miembros de la Cámara Baja o el Senado, está inhabilitado para ser elegido o designado para esos cargos legislativos.<sup>10</sup>

[22] El Fiscal General es designado por el Gobernador General, con asesoramiento de la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos.<sup>11</sup> Por esa razón está sujeto al reglamento de dicha comisión y a las disposiciones sobre designación, terminación de empleo y disciplina contenidas en esas normas.<sup>12</sup> Además, está sujeto a las Órdenes Generales<sup>13</sup> de la Comisión del Servicio Público, que contienen normas de conducta y políticas que rigen a quienes forman parte de la Comisión de Servicios Judiciales y

<sup>3</sup> Constitución del Commonwealth of Bahamas, [https://www.oas.org/juridico/mla/en/bhs/en\\_bhs-int-text-const.pdf](https://www.oas.org/juridico/mla/en/bhs/en_bhs-int-text-const.pdf)

<sup>4</sup> Respuesta de Bahamas al Cuestionario de la Cuarta Ronda de Revisión, pág. 6, [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_bhs\\_reply.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_bhs_reply.pdf)

<sup>5</sup> *Ídem*

<sup>6</sup> Véase el Informe del Procurador General correspondiente a 2011, pág. 12, [http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4\\_bhs.htm](http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4_bhs.htm)

<sup>7</sup> Artículos 72(2) y 73 de la Constitución, *supra* nota 3.

<sup>8</sup> Artículo 74(3) de la Constitución, *ídem*.

<sup>9</sup> Artículos 43(3) y 49(2) de la Constitución, *ídem*.

<sup>10</sup> Artículos 42 y 48 de la Constitución, *ídem*.

<sup>11</sup> Artículo 116 de la Constitución, *ídem*. Véase también la Ley de Servicios Judiciales y Jurídicos (Oficinas Públicas Preceptivas).

<sup>12</sup> Reglamento de la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos,

<sup>13</sup> Órdenes

Generales,

<http://www.bahamas.gov.bs/bahamasweb2/home.nsf/vContentW/11DFF3FEDD3F549B06256ED3005CEB38>.



Jurídicos.<sup>14</sup> A ese respecto, esas Órdenes incluyen las de prevención de la corrupción, conflictos de intereses y limitación de la participación políticas aplicables a ciertos altos funcionarios públicos.<sup>15</sup>

[23] Análogamente, los funcionarios de asuntos jurídicos que trabajan en la Oficina de la Procuraduría General también son designados por el Gobernador General, con asesoramiento de la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos. Esos funcionarios están sujetos a las disposiciones de la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos, que establecen el procedimiento de su designación y cese y contienen un régimen disciplinario. Además, en su respuesta al cuestionario el Estado analizado señala que los requisitos formales para ejercer la abogacía incluyen la admisión al Colegio de Abogados de Las Bahamas, que consta en la Ley de la Profesión Jurídica de 1992; tales funcionarios son seleccionados por concurso de méritos y están sujetos al visto bueno de la Sección de Seguridad e Inteligencia de la Real Fuerza Policial de Las Bahamas.<sup>16</sup> Además están sujetos a las Órdenes Generales del Servicio Público. El total de abogados que trabajan en la Oficina de la Procuraduría General, a la fecha de la visita *in situ*, es de 71.<sup>17</sup>

[24] Con respecto a manuales y otros documentos que describen las funciones de su personal, en su respuesta al cuestionario el Estado analizado señala que tiene un Manual del Ministerio Público y de lo Contencioso Civil, en que se describen los procedimientos judiciales en las respectivas secciones, así como las políticas de la Oficina de la Procuraduría General a ese respecto.<sup>18</sup> Además, durante la visita *in situ* los representantes de la Oficina manifestaron que existe también un manual de personal para ese órgano de control.

[25] Con respecto a capacitación, en su respuesta al cuestionario el Estado analizado manifiesta que esa labor se realiza *in situ* y a distancia en diversos departamentos y con respecto a diversas especialidades jurídicas,<sup>19</sup> tales como las de redacción de textos, elaboración de políticas y promoción de procesamientos.<sup>20</sup> Como ya se señaló durante la visita *in situ*, ese tipo de capacitación se realiza con carácter *ad hoc*. El Estado analizado señala también que la capacitación es interna y externa, y abarca talleres y seminarios especializados, existiendo también programas de intercambio, principalmente en colaboración con la Oficina Federal de Investigaciones y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. También proporcionan capacitación la CARICOM, las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos.<sup>21</sup>

[26] Con respecto a medidas de mejoramiento de la calidad, el Estado analizado señala que un Informe Confidencial Anual (ACR o Registro de Evaluación del Desempeño de los Empleados) es una evaluación, diseñada por el Departamento del Servicio Público, en que se registra, califica y analiza el

<sup>14</sup> Las Órdenes Generales establecen, en la sección sobre Definiciones, que por “Comisión del Servicio Público” o “Comisión” debe entenderse, en los lugares que corresponda, la Comisión del Servicio Policial o la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos, Orden General 100(6).

<sup>15</sup> Las Órdenes Generales definen ese término como sigue:

“(a) una persona que ocupe un cargo pensionable en el sentido dado por cualquier Ley relativa a las pensiones o bonificaciones pagaderas a personas empleadas en el servicio público;  
(b) una persona que esté empleada en el servicio público cuyo empleo no sea ocasional y que preste servicios en régimen de dedicación exclusiva en el servicio público.”

<sup>16</sup> Respuesta al Cuestionario, pág. 8, *supra* nota 4.

<sup>17</sup> Véase Presentación *in situ* de la Oficina de la Procuraduría General, pág. 8, [http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4\\_bhs.htm](http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4_bhs.htm)

<sup>18</sup> Respuesta al Cuestionario, pág. 8, *supra* nota 4.

<sup>19</sup> *Idem*.

<sup>20</sup> Véase Presentación *in situ* de la Oficina de la Procuraduría General, pág. 16, *supra* nota 17.

<sup>21</sup> *Idem*.

desempeño de todos los funcionarios públicos, incluidos los funcionarios de asuntos jurídicos de la Oficina de la Procuraduría General. Se prevé que esa evaluación sea completada anualmente por supervisores, y forma parte del legajo de personal del funcionario, y ulteriormente se utiliza para determinar si un funcionario ha de ser o no promovido o recibir o no una bonificación al final de su desempeño en el servicio público.<sup>22</sup>

[27] Con respecto a la manera en que se proporciona al público en general información sobre sus objetivos y funciones, la Oficina de la Procuraduría General cuenta con el sitio en Internet <http://www.bahamas.gov.bs/attorneygeneral>, que proporciona una visión general del Ministerio de Asuntos Jurídicos y de la Oficina de la Procuraduría General, así como información de contacto y una página web para proporcionar retroinformación. Además contiene una sección sobre “preguntas frecuentes”, así como una sección titulada “sobre nosotros”, que ayuda a informar al público sobre los objetivos y funciones de la Oficina.

[28] Con respecto a los mecanismos para tramitar reclamos, quejas o denuncias relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño de su personal, el Estado analizado, durante la visita *in situ*, señaló que las quejas relacionadas con el desempeño de los funcionarios de asuntos jurídicos se presentan al Director o Subdirector de cada sección de la Oficina de la Procuraduría General y pueden luego ser derivadas a la Comisión de Asuntos Judiciales y Jurídicos de la Administración Superior en relaciones semanales y tratándose de asuntos de grave inconducta se derivan luego a la Comisión de Asuntos Judiciales y Jurídicos para su examen.<sup>23</sup> También se hizo mención al brazo disciplinario del Colegio de Abogados de Las Bahamas, que también investiga y recomienda medidas disciplinarias cuando se formulan denuncias contra funcionarios de asuntos jurídicos.

[29] Con respecto a los recursos presupuestarios necesarios para sus operaciones, durante la visita *in situ* los representantes del órgano de control señalaron que ordinariamente, en marzo/abril de cada año, gerentes superiores se reúnen para determinar las necesidades de recursos presupuestarios y humanos necesarios para los diversos departamentos.<sup>24</sup> El ejercicio financiero se cierra el 30 de junio, y el nuevo período presupuestario se inicia el 1 de julio. El presupuesto gastado para procesamiento penales en los últimos 5 años es el siguiente:<sup>25</sup>

<b>Presupuesto para procesamiento<sup>26</sup></b>					
	<b>2009/2010</b>	<b>2010/2011</b>	<b>2011/2012</b>	<b>2012/2013</b>	<b>2013/2014</b>
<b>Salario y beneficios – Procesamiento</b>	800 282,88	893 215,35	1 342 722,25	1 429 394,31	1 507 153,89
<b>Transporte para testigos</b>	58 363,38	76 696,07	69 723,20	65 33,10	101 851,72
<b>Alojamiento y comidas - Testigos</b>	103 772,62	112 500,36	164 111,70	102 621,22	176 871,27
<b>Alojamiento y</b>	14 607,35	21 480,14	12 187,68	14 543,24	18 835,58

<sup>22</sup> *Ídem.*, pág. 15

<sup>23</sup> *Ídem.*, pág. 14.

<sup>24</sup> *Ídem.*, pág. 9.

<sup>25</sup> *Ídem.*, págs. 10 – 12.

<sup>26</sup> 1 dólar de Bahamas = 1 dólar estadounidense.

<b>comidas - Fiscales</b>					
<b>Total gastado para procesamientos</b>	977 026,23	1 103 891,92	1 588 744,83	1 612 191,87	1 804 712,46
<b>Porcentaje del presupuesto global</b>	10%	11%	13%	13%	15%

[30] Con respecto a mecanismos de coordinación para armonizar sus funciones, los representantes de la Oficina de la Procuraduría General señalaron que ésta recibe de la Comisión de Difusión Pública una lista de personas que estén en infracción de la Ley de Difusión Pública. Además la Oficina recibe de la Real Fuerza Policial de Las Bahamas un expediente policial para la consideración de imputaciones apropiadas, después de la investigación de un informe sobre transacciones sospechosas elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera. Además se ha establecido una Fuerza de Trabajo Nacional, consistente en la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión de Cumplimiento, la Comisión de Seguros, la Comisión de Valores, el Banco Central, la Junta de Juegos de Azar, el Departamento de Cooperativas, la Real Fuerza Policial de Las Bahamas, la Unidad de Aplicación de Normas sobre Drogas, el Fiscal General y la Unidad de Cooperación Judicial Internacional de la Oficina de la Procuraduría General. Ese grupo de trabajo es un equipo de reguladores con diversas responsabilidades, encargado, entre otras cosas, de facilitar normas para prevenir y detectar actos de corrupción en el Sector de los Servicios Financieros.<sup>27</sup>

[31] Con respecto a mecanismos de responsabilidad aplicables al desempeño de sus cometidos, el Estado analizado, señala en su respuesta al cuestionario que se publica un informe anual en copia impresa y en línea.<sup>28</sup> Además, durante la visita *in situ* los representantes de ese órgano de control señalaron que las declaraciones públicas del Procurador General se publican en el sitio *web* de la Oficina de la Procuraduría General, y que al abrirse el año judicial de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones, el Presidente de la Corte Suprema, el Presidente de la Corte de Apelaciones, el Procurador General y el Presidente del Colegio de Abogados, respectivamente, proporcionan al público reseñas generales de la labor del Poder Judicial, la Oficina de la Procuraduría General y el Colegio de Abogados de Las Bahamas.<sup>29</sup>

## 1.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[32] La Oficina de la Procuraduría General cuenta con un conjunto de disposiciones y de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 1.1 anterior de este informe. No obstante, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas.

[33] Primero, el Comité señala que conforme a la Constitución, el Procurador General es miembro del Gobierno y cumple dos funciones separadas en el Estado analizado. En primer lugar, una función de gobierno dada su posición como miembro del Gabinete, que es responsable de la orientación general y el control del Gobierno, y es designado al igual que otros Ministros de Gobierno.<sup>30</sup> Además, la persona que

<sup>27</sup> Véase Presentación *in situ* de la Oficina de la Procuraduría General, pág. 13, *supra* nota 17.

<sup>28</sup> Respuesta al Cuestionario, pág. 8, *supra* nota 4.

<sup>29</sup> Véase Presentación *in situ* de la Oficina de la Procuraduría General, págs. 14 y 16, *supra* nota 17.

<sup>30</sup> Véase, por ejemplo, el Artículo 72(1) de la Constitución, *supra* nota 3.

haya de ser designada para esa posición debe ser elegida de entre los miembros de la Cámara Baja o del Senado. El Procurador General, no obstante, tiene la obligación constitucional de promover, interrumpir o asumir competencia en procedimientos penales, y conforme a ese papel, la Constitución establece que en el ejercicio de sus cometidos debe estar exento de la orientación y el control de cualquier otra persona o autoridad. La Procuradora General mencionó en sus manifestaciones a una Comisión Constitucional en junio de 2013 *“sus dobles cometidos como miembro del Poder Ejecutivo (ministra del Gabinete) – los papeles dobles (y en algunos casos contrapuestos) encomendados al Procurador General en el sistema de Westminster como guardián de la Constitución y Ministro de Justicia de la Corona.”*<sup>31</sup>

[34] La Constitución establece además que el Procurador General puede también delegar la potestad de iniciar procedimientos, lo que ha hecho en la Fiscalía. El Comité observa, empero, que el Procurador General es, en definitiva, constitucionalmente responsable de los procedimientos penales en Las Bahamas, pese a esa delegación de autoridad. La Fiscalía, aunque cumpla esa función, depende directamente del Procurador General para todos los asuntos y está sujeto a su dirección y control. Además el Comité observa que la Constitución también establece que el Procurador General tiene la potestad exclusiva de incoar o dejar sin efecto un procedimiento.

[35] El Comité toma nota de que el Código de Procedimiento Penal de Las Bahamas también hace hincapié en que el control de la conducción de todos los procedimientos recae en definitiva en el Procurador General, aún y cuando se haya delegado a otra persona el instituir o llevar a cabo el procedimiento, según expresa su sección 56:<sup>32</sup>

[36] *[C]ualquiera de tales personas estará sujeta en todo momento a las directrices del Procurador General, quien en todo caso podrá instituir o realizar por sí mismo cualquier procedimiento penal o asumir competencia y continuar o indicar a cualquier funcionario de asuntos judiciales subordinado a él que se haga cargo y continúe, conforme a sus instrucciones, cualesquiera procedimientos penales instituidos o llevados a cabo por esa persona.”*

[37] Además el Procurador General, y no el Fiscal General, tiene la potestad discrecional de decidir si ha de realizarse un procedimiento por violación de dos importantes leyes anticorrupción vigentes en Las Bahamas: La Ley de Prevención del Soborno y la Ley de Difusión Pública.<sup>33</sup>

[38] Este tema del papel del Procurador General como miembro político del Gobierno al mismo tiempo que ejerce las funciones de fiscal del Estado ha sido considerada en el pasado por el Estado analizado. En 2002, por ejemplo, se presentó y fue sancionado en ambas Cámaras un compendio de proyectos de reforma constitucional, pero esas disposiciones no entraron en vigor porque no obtuvieron la mayoría requerida en el referéndum subsiguiente.<sup>34</sup> Uno de esos proyectos, el de la Ley (de Enmienda) de la Constitución de Las Bahamas (No. 3), 2002 (No. 12 de 2002), estaba destinado a transferir al Fiscal

<sup>31</sup> 2013 Informe del Procurador General, pág. 20, [http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4\\_bhs.htm](http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4_bhs.htm)

<sup>32</sup> Código de Procedimiento Penal de Bahamas, sección 56, [http://laws.bahamas.gov.bs/cms/images/LEGISLATION/PRINCIPAL/1968/1968-0038/CriminalProcedureCodeAct\\_1.pdf](http://laws.bahamas.gov.bs/cms/images/LEGISLATION/PRINCIPAL/1968/1968-0038/CriminalProcedureCodeAct_1.pdf)

<sup>33</sup> Véase la sección 23 de la Ley de Prevención del Soborno, [http://laws.bahamas.gov.bs/cms36/images/LEGISLATION/PRINCIPAL/1976/1976-0009/PreventionofBriberyAct\\_1.pdf](http://laws.bahamas.gov.bs/cms36/images/LEGISLATION/PRINCIPAL/1976/1976-0009/PreventionofBriberyAct_1.pdf) y la sección 14 de la Ley de Difusión Pública, [http://laws.bahamas.gov.bs/cms36/images/LEGISLATION/PRINCIPAL/1976/1976-0012/PublicDisclosureAct\\_1.pdf](http://laws.bahamas.gov.bs/cms36/images/LEGISLATION/PRINCIPAL/1976/1976-0012/PublicDisclosureAct_1.pdf)

<sup>34</sup> Informe de la Comisión Constitucional sobre Revisión de la Constitución de Bahamas, julio de 2013, pág. 61, [http://www.bahamas.gov.bs/wps/wcm/connect/7c2fe440-cb66-4327-9bf3-432131510cc4/Constitución+Comisión+Report+2013\\_8JULY2013.pdf?MOD=AJPERES](http://www.bahamas.gov.bs/wps/wcm/connect/7c2fe440-cb66-4327-9bf3-432131510cc4/Constitución+Comisión+Report+2013_8JULY2013.pdf?MOD=AJPERES)

General la potestad del Procurador General relativa a procedimientos penales.<sup>35</sup> Además, una comisión designada en 2012 por el Primer Ministro de Las Bahamas para realizar una revisión general de la Constitución y recomendar reformas recomendó en su informe, entre otras cosas, la eliminación de “*la responsabilidad en materia de procesamiento penales que tiene un Procurador General político y transferirla a un Fiscal General con autonomía e independencia constitucionales.*”<sup>36</sup> La Comisión señaló también:

[39] *La posición de un Procurador General político como la persona responsable en definitiva de procesamiento penales es un anacronismo en un sistema democrático y una contradicción de la doctrina de separación de poderes. El intento de la Constitución de hacer que el Procurador General “no está sujeto a la orientación y control de ninguna otra persona o autoridad” en el ejercicio de sus funciones cuasijudiciales no es algo que probablemente haya de generar confianza pública en la independencia e imparcialidad del Procurador General, por escrupuloso y bienintencionado que sea el titular de ese cargo.*”<sup>37</sup>

[40] Antes de que se pronunciara esa Comisión, el actual Procurador General respaldaba la transferencia de las funciones penales a un Fiscal General independiente, lo que también se señaló en el Informe del Procurador General correspondiente a 2013.<sup>38</sup>

[41] Con respecto a este tema, los representantes de la Oficina de la Procuraduría General, durante la visita *in situ* señalaron que dicha entidad estaba participando en mecanismos de consultoría con la Secretaría de la *Commonwealth* para proporcionar asesoramiento sobre la estructura y la administración de un cargo de Fiscal General independiente, que cumpla normas internacionales.<sup>39</sup>

[42] El Comité cree que el Estado analizado debería establecer medidas que ayuden a establecer firmemente un servicio de fiscalía independiente, no sometido a la orientación o control de un Procurador General y sujeto a su Constitución y a los principios fundamentales de su sistema jurídico. Esas medidas deberían incluir también aspectos que no requieran actos constitucionales, tales como establecer directrices que salvaguarden la percepción de la independencia de los fiscales, como el establecimiento de parámetros acerca del momento en que haya de consultarse al Procurador General sobre cuestiones importantes de interés general, los cuales deberían publicarse en línea y en el Diario Oficial de Las Bahamas, para promover la transparencia en el proceso, y si el Procurador General, efectivamente, interviene, puede hacerlo pero a través de directrices escritas impartidas al Fiscal General.

[43] Esas medidas podrían ser consideradas por el Estado analizado, en especial porque se requiere el consentimiento del Procurador General para promover procesamiento que tengan que ver con soborno y otros casos de corrupción o con omisión de los miembros de la Cámara Baja o del Senado de efectuar una declaración conforme a la ley, o de formular una declaración falsa, ya que no es probable que la percepción de posible interferencia política en una decisión de ese tipo, como lo establece la Comisión sobre la Constitución de Las Bahamas, “*no es algo que probablemente haya de generar confianza pública en la independencia e imparcialidad del Procurador General, por escrupuloso y*

<sup>35</sup> *Ibid*, pág. 62. Además, el Estado analizado señala que la Ley (de Enmienda) de la Constitución de las Bahamas (No. 3), de 2002 tuvo el efecto y la finalidad de modificar la Constitución. A través de la Ley No. 12, de 2002, se procuró definir las funciones del Fiscal General y por la Ley No. 13, de 2002, estableció la Fiscalía Pública y procuró definir sus potestades. Esas leyes fueron sancionadas pero no han entrado en vigor.

<sup>36</sup> *Ibid*, pág. 183.

<sup>37</sup> *Idem.*, pág. 179.

<sup>38</sup> *Ibid*, págs. 180 e Informe del Procurador General correspondiente a 2013, pág. 21, *supra* nota 31.

<sup>39</sup> Véase Presentación *in situ* de la Oficina de la Procuraduría General, pág. 24, *supra* nota 17.

*bienintencionado que sea el titular de ese cargo*”. El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 1.4.1 en la sección 1.4 del capítulo II del presente informe).

[44] Segundo, el Comité toma nota de que durante la visita *in situ* los representantes mencionaron los pasos que se estaban dando para hacer frente al problema del atraso en la tramitación de expedientes de asuntos penales graves e ineficiencias en la Corte Suprema debido a la insuficiencia de recursos de dicha corte.<sup>40</sup> Por ejemplo, se hizo mención al hecho de que el número de tribunales de lo penal existentes aumentaría de 6 a 10, y que la legislación incrementaría –de 14 a 20– el número de jueces. Se señaló también que se sancionarían leyes de reforma del proceso penal por las cuales se permitirían las videoconferencias y el uso de tecnología. Se señaló que esos cambios requerirían personal adicional en la Oficina de la Procuraduría General para atender la carga de trabajo adicional. A ese respecto, los representantes señalaron que se habían asignado \$800,000 de fondos adicionales a la Oficina de la Procuraduría General para contratar más personal.

[45] No obstante, durante la visita también se señaló que una de las dificultades que enfrenta la Oficina de la Procuraduría General consiste en la insuficiencia de recursos de la Fiscalía General, y se mencionaron otros problemas de recursos dentro de la Oficina, tales como la necesidad de usar personal de la Comisión de Reforma Legal para que colabore en la redacción de leyes, pues el número de redactores es insuficiente.<sup>41</sup> El Comité señala que hay 71 abogados en ese órgano de control, o sea 12 menos que en 2011.<sup>42</sup> Aunque ha habido un sostenido incremento de recursos presupuestarios proporcionados por el Departamento, el Comité cree que el Estado analizado debería considerar la posibilidad de hacer que la Oficina de la Procuraduría General, –en especial el Departamento de Fiscales Públicos—disponga de recursos de personal y materiales suficientes para cumplir sus funciones, dadas especialmente las necesidades contrapuestas de recursos, como las que se sobrevendrán cuando se establezca el plan de expansión del uso de tecnología, por ejemplo de videoconferencias. El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 1.4.2 en la sección 1.4 del capítulo II del presente informe).

[46] Análogamente, el Comité toma nota de que una de las dificultades que se presentaron durante la visita *in situ* fue la necesidad de personal adicional para Gestión de casos, Justicia integrada, Elaboración de calendarios y Manejo de expedientes.<sup>43</sup> A ese respecto, en 2011 se introdujo en el departamento una unidad de Gestión de casos penales, formada por 5 funcionarios de asuntos jurídicos entre cuyos cometidos figura el de examinar casos para determinar si están en condiciones en pasar a juicio. Además la Oficina creó también una división cuyo único cometido es la administración de casos penales.<sup>44</sup> Esas iniciativas se han adoptado para atender el problema del atraso en la tramitación de casos dentro de la Fiscalía. La mencionada división realizó una auditoría y concluyó lo siguiente:<sup>45</sup>

[47] “*Su auditoría sobre asuntos en la OMP [Oficina de la Procuraduría General] entre 2002 y la actualidad revela que el número de casos pendientes en tal que si doce jueces de la Corte Suprema se ocuparan exclusivamente de casos penales en la totalidad de 2013 el atraso de casos recién se terminaría al final de 2013. Esa auditoría no incluye asuntos anteriores a 2002.*”

---

<sup>40</sup> *Ídem.*, pág. 20.

<sup>41</sup> *Ídem.*

<sup>42</sup> *Ídem.*, pág. 8 y véase Informe del Procurador General correspondiente a 2011, pág. 8, [http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4\\_bhs.htm](http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4_bhs.htm)

<sup>43</sup> Véase Presentación *in situ* de la Oficina de la Procuraduría General, pág. 20, *supra* nota 17.

<sup>44</sup> 2013 Informe del Procurador General, pág. 5, *supra* nota 31.

<sup>45</sup> *Ídem.*

[48] El Comité cree que el Estado analizado debería proporcionar los recursos necesarios para hacer frente al problema del atraso de casos. A ese respecto deberían proporcionarse recursos para reforzar la unidad y la división responsable de gestión de casos dentro de la Fiscalía General. El atraso no puede menos que ir en detrimento de la eficacia de la labor de la Fiscalía encaminada a promover procesamientos.<sup>46</sup> El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 1.4.2 en la sección 1.4 del capítulo II del presente informe).

[49] Tercero, el Comité observa que en la respuesta al cuestionario, el Estado analizado señaló que existe un Manual de la Fiscalía Pública, en que se describen los procedimientos judiciales en las secciones y políticas respectivas de la Oficina de la Procuraduría General.<sup>47</sup> También se informó al Comité, durante la visita *in situ*, que ese manual ha perdido actualidad, dificultad expuesta también en la presentación realizada por ese órgano de control durante la visita, y que está siendo revisado y actualizado.<sup>48</sup> que se había sancionado recientemente una enmienda a la Ley de Prevención del Soborno. Dicha enmienda, que entró en vigencia el 1 de mayo de 2012, penaliza el soborno transnacional en Las Bahamas.<sup>49</sup> Se espera que cuando se actualice el manual, esas enmiendas se tengan en cuenta, y que se incluya una reseña de la práctica y las políticas pertinentes para promover procesamientos por actos de corrupción, tales como los previstos en la Ley de Prevención del Soborno. En virtud de lo que antecede el Comité considera que la Oficina de la Procuraduría General debería actualizar sus guías y Manual, lo que debería incluir actualizaciones pertinentes sobre legislación, prácticas y políticas anticorrupción.<sup>50</sup> El Comité formulará recomendaciones. (Véanse las recomendaciones 1.4.3 y 1.4.4 en la sección 1.4 del capítulo II del presente informe).

[50] Cuarto, el Comité observa que en la respuesta al cuestionario el Estado analizado señala que la Oficina de la Procuraduría General se encarga principalmente de promover el procesamiento por delitos graves y que ha delegado el cometido de promover el procesamiento por delitos menores a la Real Fuerza Policial de Las Bahamas.<sup>51</sup> Sin embargo, el Comité señala asimismo que la Ley de Prevención del Soborno establece que una persona puede ser declarada culpable de delitos menores por incurrir en los actos de corrupción previstos en la ley, incluido el de soborno transnacional.<sup>52</sup>

[51] Conforme a lo que antecede, el Comité observa que cabe concebir que los fiscales policiales se ocupen de promover procesamientos no sólo por delitos menores, sino también por delitos graves que impliquen corrupción de funcionarios públicos. Dada la importancia de que se promueva adecuadamente el procesamiento por delitos de corrupción el Comité considera importante que el Estado analizado implemente mecanismos que garanticen una adecuada coordinación de la labor de los fiscales policiales con la Fiscalía, y la supervisión de ésta, en caso de que fiscales policiales sean

<sup>46</sup> El Estado analizado señala que en el presupuesto correspondiente a junio de 2015 se considerará plenamente el incremento global del personal. Se invitará al Fiscal General y al Director de Asuntos Jurídicos a presentar una recomendación general sobre las necesidades de personal de sus dependencias específicas, teniendo en cuenta la recomendación de la MESICIC.

<sup>47</sup> Respuesta al Cuestionario, pág. 8, *supra* nota 4.

<sup>48</sup> Véase Presentación *in situ* de la Oficina de la Procuraduría General, pág. 20, *supra* nota 17.

<sup>49</sup> Enmienda de la Ley de Prevención del Soborno, 2014, <http://laws.bahamas.gov.bs/cms36/images/LEGISLATION/AMENDING/2014/2014-0003/PreventionofBriberyAmendmentAct2014.pdf>

<sup>50</sup> El Estado analizado señala que el Manual de la Fiscalía Pública está siendo actualizado; en ese contexto se realizará actualizaciones pertinentes sobre soborno transnacional, procesamiento penal por actos de corrupción, y la legislación anticorrupción de la Convención de Palermo (Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Transnacional Organizado, 2002), recientemente actualizada.

<sup>51</sup> Respuesta al Cuestionario, pág. 5, *supra* nota 4.

<sup>52</sup> Sección 10 de la Ley de Prevención del Soborno, *supra* nota 33.



llamados a promover procesamientos por delitos de corrupción, contribuyendo así a evitar un desnivel de aptitudes entre abogados defensores en lo penal altamente capacitados y fiscales policiales sin formación judicial, un punto de vista compartido por los representantes de la Oficina de la Procuraduría General durante la visita *in situ*.<sup>53</sup> El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 1.4.5 en la sección 1.4 del capítulo II del presente informe).

[52] A ese respecto, el Comité toma nota de que en el antes mencionado Informe de 2013 de la Comisión Constitucional sobre Revisión de la Constitución de Las Bahamas se observaba que si bien muchos Estados del Caribe han recurrido a fiscales policiales para promover procesamientos por delitos menores a fin de contrarrestar la escasez de fiscales públicos, la Comisión opina que ese sistema debería ir siendo suprimido, entre otras cosas para que todos los procesamientos ante cortes de la magistratura sean promovidos por la Fiscalía.<sup>54</sup>

[53] Quinto, el Comité observa que el sitio *web* de la Oficina de la Procuraduría General se estableció el 1 de diciembre de 2010, siendo ese el primer sitio que haya tenido ese órgano de control.<sup>55</sup> Se estableció “*en cumplimiento de un compromiso de servir mejor al público mediante el suministro de información.*”<sup>56</sup> El Comité toma nota, sin embargo, de que no es posible obtener acceso en línea a información importante, consistente en los informes sobre actividades emitidos por el Procurador General, aunque durante la visita *in situ* se proporcionaron copias físicas de esos informes para los años 2010, 2011 y 2013. En lugar de proporcionar esos informes en forma ágil y accesible en la página principal de la Oficina, por ejemplo como vínculo para obtener acceso a publicaciones, aparecen en una página que contiene una descripción sumaria de ese órgano de control.<sup>57</sup> Esos informes son un paso importante para dar transparencia a la labor realizada por ese órgano de control de manera de que el público pueda enterarse de las actividades llevadas a cabo por la Oficina de la Procuraduría General. El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 1.4.6 en la sección 1.4 del capítulo II del presente informe).

[54] Sexto, el Comité observa también que no se cuenta con normas legales que dispongan la publicación de un informe anual de las actividades de la Oficina de la Procuraduría General. Sin embargo, en 2010 el Procurador General de entonces publicó por primera vez el Informe del Procurador General y del Ministro de Asuntos Judiciales para ese año, en cumplimiento del compromiso del Procurador General de proceder en forma transparente y responsable en el cumplimiento de sus funciones.<sup>58</sup> El Comité felicita al Estado analizado por esta importante iniciativa, pero toma nota de que la publicación de ese informe no se ha realizado anualmente desde 2010. Si bien se han proporcionado informes para 2011 y 2013, no parece haberse hecho lo propio para 2012. Además, el Comité toma nota de que el contenido de ese informe ha cambiado con respecto al que se incluyó en 2010 y 2011 y en 2013. En tanto que en las versiones anteriores se incluía información sobre las actividades realizadas por Departamento, sobre recursos humanos y

<sup>53</sup> El Estado analizado señala que el Procurador General ha invitado al Fiscal General a coordinar la labor y supervisar a los fiscales policiales. Además, el Procurador General y el Ministro de Seguridad Nacional serán invitados a considerar el establecimiento de un equipo de asesoría conjunta policial/fiscal dedicado a erradicar actos de corrupción.

<sup>54</sup> Informe de la Comisión Constitucional sobre una Revisión de la Constitución de Bahamas, pág. 188, *supra* nota 34.

<sup>55</sup> Informe del Procurador General y del Ministro de Asuntos Judiciales correspondiente a 2010, pág. 8, [http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4\\_bhs.htm](http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4_bhs.htm)

<sup>56</sup> *Idem*

<sup>57</sup> [Reseña del Ministro de Asuntos Judiciales y del Procurador General, Revisión de la Ley](#). El Estado analizado señala que se instituirá el proyecto piloto del Departamento de Tecnología de Información de la Oficina de la Procuraduría General/Proyecto Piloto con el cometido de cargar en línea el Informe Anual del Procurador General en formato de fácil utilización por el usuaria.

<sup>58</sup> Informe del Procurador General correspondiente a 2010, pág. 3, *supra* nota 55.



sobre presupuesto, y se incluían aspectos destacados sobre medidas adoptadas por Departamento, incluido un organigrama de la Oficina, en la más reciente versión no se proporciona esa información. El Comité insta al Estado analizado a considerar la posibilidad de proporcionar ese tipo de información en el futuro, y de fortalecer su contenido estableciendo criterios y parámetros uniformes para el contenido básico de los informes anuales de la Oficina y destacando otros aspectos que puedan incluirse en futuros informes, por ejemplo un presupuesto desglosado como el que se presentó durante la visita *in situ* y al que se hace referencia en la sección 1.1 del presente Informe; estadísticas sobre su labor, por ejemplo número de procesamiento promovidos durante el año, por delito, así como cifras de los que estén pendientes, y actividades de capacitación llevadas a cabo por su personal.<sup>59</sup> El Comité formulará recomendaciones. (Véanse las recomendaciones 1.4.7 y 1.4.8 en la sección 1.4 del capítulo II del presente informe).

[55] Séptimo, el Comité señala además que durante la visita *in situ* un representante de la Real Fuerza Policial de Las Bahamas efectuó una presentación sobre la labor de ese organismo gubernamental en su lucha contra la corrupción. En especial se mencionó que la Ley de la Fuerza Policial, de 2009, establece una Sección de Denuncias y Corrupción encargada de recibir denuncias del público sobre conducta policial.<sup>60</sup> En cambio no existe una unidad especializada para recibir e investigar todos los informes y denuncias de corrupción contra autoridades gubernamentales y funcionarios públicos. El establecimiento de una unidad dedicada a investigar actos de corrupción cometidos por autoridades gubernamentales contribuiría a cumplir el mandato de la Oficina de la Procuraduría General de promover el procesamiento por esos delitos, especialmente el grupo de práctica sobre corrupción establecido en la Fiscalía.<sup>61</sup> El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 1.4.9 en la sección 1.4 del capítulo II del presente informe).

[56] Octavo, el Comité toma nota que la sección 35 de la Ley de Administración Financiera y Auditoría, de 2010 establece una unidad de auditoría interna en el Ministerio de Finanzas, y que el Secretario Financiero podrá también establecer estas unidades dentro de los ministerios y departamentos del Estado.<sup>62</sup> El cometido de las unidades es mejorar la eficiencia, la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión de los recursos del Gobierno. El Comité cree que una unidad de este tipo también debería establecerse dentro de la Oficina de la Procuraduría General, ya que no parece haber una unidad de auditoría interna o tan siquiera una unidad de contabilidad establecido en la Oficina.<sup>63</sup> El Comité formulará una recomendación a ese respecto. (Véase la recomendación 1.4.10 en la sección 1.4 del capítulo II del presente informe).

[57] Noveno, durante la visita *in situ* los representantes de la Oficina de la Procuraduría General manifestaron que el Gobierno está trabajando en un plan de acción anticorrupción que se basará en

---

<sup>59</sup> El Estado analizado señala que el Gobierno se compromete a proporcionar un Informe Anual detallado sobre dichas actividades y que el Procurador General dispondrá la publicación anual de informes de la Procuraduría General que contengan estadísticas pertinentes, en que se dé a conocer debidamente al público la labor de la Procuraduría, las actividades de capacitación y, cuando corresponda, los gastos financieros en que se incurra.

<sup>60</sup> Ley de la Fuerza de Policía, 2009, sección 81, [http://www.royalbahamaspolice.org/aboutus/police\\_act\\_2009.pdf](http://www.royalbahamaspolice.org/aboutus/police_act_2009.pdf)

<sup>61</sup> El Estado analizado señala que se invitará al Ministro de Seguridad Nacional a crear una Unidad Anticorrupción dentro de la Real Fuerza Policial de las Bahamas.

<sup>62</sup> Véase el Memorandum de Entendimiento entre el Departamento del Auditor General y la Sección de Auditoría Interna del Ministerio de Finanzas, [http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4\\_bhs.htm](http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4_bhs.htm) y la Ley de Administración Financiera y Auditoría, 2010, [http://laws.bahamas.gov.bs/cms36/images/LEGISLATION/PRINCIPAL/2010/2010-0026/FinancialAdministrationandAuditAct2010\\_1.pdf](http://laws.bahamas.gov.bs/cms36/images/LEGISLATION/PRINCIPAL/2010/2010-0026/FinancialAdministrationandAuditAct2010_1.pdf)

<sup>63</sup> El Estado analizado señala que como cuestión de políticas se está considerando la posibilidad de establecer una unidad de auditoría interna dentro de la Procuraduría General y/o de otros ministerios de Gobierno. Se invitará al personal del Departamento del Auditor General a colaborar en la realización de una auditoría externa.

iniciativas existentes e incluirá, entre otros pilares clave, una revisión del marco legislativo, para modernizarlo y para que esté a la altura de las nuevas disposiciones y normas internacionales; la introducción de nuevas normas legales anticorrupción que establezcan un órgano anticorrupción; el fortalecimiento de la capacidad institucional en todas las ramas e instituciones gubernamentales, especialmente mediante la el mejoramiento del procedimiento judicial de lucha contra la corrupción; el mejoramiento de los sistemas de gestión pública y rendición de cuentas, centrando la atención en el fortalecimiento del sistema de adquisiciones públicas, el Departamento del Auditor Público, y la aplicación de un Código de Conducta y Ética para todos los niveles del Servicio Público y de la Administración Pública, y el establecimiento de un Comité Interministerial para el seguimiento de la aplicación de ese Plan.<sup>64</sup> A ese respecto, dado que el Estado analizado está redactando ese plan, el Comité considera que sería útil considerar la posibilidad de adoptar un cronograma que establezca prioridades, medidas que hayan de tomarse, plazos para su ejecución y objetivos anuales que hayan de alcanzarse para ese plan, y publicar ese cronograma para que el público pueda valorar los esfuerzos realizados por el Estado analizado para llevar a cabo su aplicación.<sup>65</sup> El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 1.4.11 en la sección 1.4 del capítulo II del presente informe).

[58] Décimo, el Comité toma nota, como se estableció en la Sección 1.1, de que las denuncias relacionadas con el desempeño de funcionarios de asuntos judiciales se presentan al Director o Subdirector de cada sección de la Oficina de la Procuraduría General, que puede entonces llamar la atención sobre las mismas a la Administración Superior, en reseñas semanales, y que los casos de graves irregularidades son luego derivados a la Comisión de Asuntos Judiciales y Jurídicos para su examen. Sin embargo, el Comité observa que la página *web* de la Oficina de la Procuraduría General no contiene una sección para la presentación de quejas por el público. El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 1.4.12 en la sección 1.4 del capítulo II del presente informe).

[59] Undécimo, durante la visita *in situ* se hizo mención a la colaboración mutua con otros organismos gubernamentales; por ejemplo la recepción, por la Comisión de Difusión Pública, de una lista de personas en situación de incumplimiento de la Ley de Difusión Pública, y de informes de la Real Fuerza Policial de Las Bahamas sobre asuntos merecedores de consideración, sobre la base de un Informe sobre Transacciones Sospechosas remitido por la Unidad de Inteligencia Financiera.<sup>66</sup> Sin embargo, no resulta claro el que la Oficina de la Procuraduría General comunique a esos organismos gubernamentales el resultado de los expedientes derivados o investigaciones; por ejemplo si dieron lugar a procesamientos. El Estado analizado debería considerar la posibilidad de establecer para la Oficina de la Procuraduría General un mecanismo o sistema que le permita coordinar y proporcionar retroinformación sobre el resultado de los informes proporcionados a esa Oficina por tales organismos.<sup>67</sup> El Comité formulará una recomendación a ese respecto. (Véase la recomendación 1.4.13 en la sección 1.4 del capítulo II del presente informe).

---

<sup>64</sup> Véase Presentación *in situ* de la Oficina de la Procuraduría General, pág. 25, *supra* nota 17.

<sup>65</sup> El Estado analizado señala que se dará prioridad al Plan de Acción Nacional Anticorrupción del Gobierno, y el Director del Departamento Jurídico preparará un cronograma para el futuro. Se informará al público en el sitio *web* de la Procuraduría General.

<sup>66</sup> *Ídem.*, pág. 13.

<sup>67</sup> El Estado analizado señala que la Procuraduría General considerará la posibilidad de proporcionar información a organismos públicos sobre los Informes sobre Transacciones Sospechosas remitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera y sobre el resultado de la lista de personas declaradas en situación de incumplimiento por la Comisión de Difusión Pública.

[60] Duodécimo, el Comité observa que durante la visita *in situ* los representantes de la Oficina de la Procuraduría General expresaron que existe frecuente intercomunicación entre los fiscales y la Policía sobre el tema de la prueba, y que se coordina la labor resultante de las pruebas provenientes de informes sobre transacciones sospechosas. Además, el Comité observa que en el Informe del Procurador General correspondiente a 2011 se señala que se han organizado equipos asesores de fiscales y policías para asesorar a la Policía en las etapas tempranas de una investigación sobre todos los casos graves y complejos, como los de fraude, lo que ha dado lugar a una labor de mayor calidad en la preparación de casos por la Policía.<sup>68</sup> Sin embargo, el Comité toma nota de que en la respuesta al cuestionario, una de las dificultades encontradas se refiere a la importancia de obtener pruebas sólidas para la detección de actos de corrupción.<sup>69</sup>

[61] Para hacer frente a esa dificultad el Comité cree que el Estado analizado puede también considerar la posibilidad de ampliar esos equipos asesores para mejorar la coordinación y preparación de casos referentes a otros actos de corrupción, como el soborno. Por ejemplo, las recientes enmiendas a la Ley de Prevención del Soborno tipifican como delito el soborno transnacional, lo que requerirá mayor colaboración con la Policía. Además, puede considerar la posibilidad de efectuar un análisis de las causas que podrían estar incidiendo para dificultar la obtención de pruebas sólidas requeridas para la detección de actos de corrupción, en orden a identificar retos e implementar medidas correctivas, en caso que corresponda. El Comité formulará recomendaciones a ese respecto. (véase las recomendaciones 1.4.14 y 1.4.15 en la sección 1.4 del capítulo II del presente informe).

### **1.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas**

[62] En su respuesta al cuestionario el Estado analizado informa que en el período comprendido entre enero y diciembre de 2013 hubo tres casos de fraude/hurto por razón/falsificación y delitos conexos. En dos de ellos los involucrados fueron declarados culpables, y en uno inocente.<sup>70</sup>

[63] El Comité observa que esos resultados no proporcionan una reseña general sobre la manera en que se está llevando adelante la tramitación de casos de corrupción, y que debería mantenerse información adicional, clasificada por rubros, para identificar dificultades y recomendar medidas correctivas: número total de casos investigados en estado de adopción de decisiones; número de decisiones adoptadas en relación con ellos; número de decisiones en que se hayan comprobado responsabilidades o impuesto penas; y número de decisiones en que no se hayan comprobado responsabilidades o se haya decretado el sobreseimiento sobre tipos de delitos de corrupción. Además, en esos resultados deberían distinguirse los casos en que se hayan dictado procesamientos en calidad de delitos graves de los referentes a delitos menores.<sup>71</sup> El Comité formulará recomendaciones a ese respecto. (Véanse las recomendaciones 1.4.16 y 1.4.17 en la sección 1.4 del capítulo II del presente informe).

[64] El Comité toma nota además de que conforme a la Ley de Administración Financiera y Auditoría la Oficina de la Procuraduría General es responsable de recaudar cargos impuestos a una persona empleada en el servicio del Gobierno que a) no haya cobrado alguna suma adeudada al Gobierno de cuyo cobro esa persona sea o haya sido, durante su empleo, responsable; b) sea o haya sido responsable

<sup>68</sup> Informe del Procurador General correspondiente a 2011, págs. 11 – 12, *supra* nota 42.

<sup>69</sup> Respuesta al Cuestionario, pág. 29, *supra* nota 4.

<sup>70</sup> *Ídem.*, pág. 26.

<sup>71</sup> El Estado analizado señala que desde 2013 la Procuraduría General ha venido manteniendo datos estadísticos sobre casos pertinentes, incluidos delitos graves. La Real Fuerza Policial de las Bahamas será invitada a proporcionar y mantener datos estadísticos en la nueva unidad anticorrupción sobre casos investigados, delitos leves y delitos graves, para que sean examinados sistemáticamente por el grupo de trabajo conjunto.

de cualquier pago impropio de dineros públicos o de cualquier pago de esos dineros que no estuviera adecuadamente justificado, o c) que sea o haya sido responsable de cualquier detrimento, pérdida o destrucción de dineros públicos, almacenes públicos u otros bienes del Gobierno. El Comité cree que el Estado analizado debería considerar también la posibilidad de mantener registros sobre los recargos recaudados por la Oficina de la Procuraduría General. Además deberían mantenerse registros de las multas impuestas por el tribunal por violación de la Ley de Prevención del Soborno y de la Ley de Difusión Pública, y del monto recaudado. El Comité formulará una recomendación a ese respecto. (Véanse las recomendaciones 1.4.18 y 1.4.19 en la sección 1.4 del capítulo II del presente informe).

#### **1.4. Conclusiones y recomendaciones**

[65] Con base en el análisis integral realizado con respecto a la Oficina de la Procuraduría General, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

**[66] Las Bahamas ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer la Oficina de la Procuraduría General como órgano de control, conforme a lo dicho en la Sección 1 del Capítulo II del presente Informe.**

[67] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere la siguientes recomendaciones:

- 1.4.1 Considerar establecer un servicio de fiscalía independiente con sujeción a la Constitución y a los principios fundamentales de sistema jurídico interno. (Véase la sección 1.2. del Capítulo II del presente Informe)
- 1.4.2 Dotar a la Fiscalía General con los recursos humanos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos. (Véase la sección 1.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 1.4.3 Actualizar el Manual de la Fiscalía Pública. (Véase la sección 1.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 1.4.4 Incluir en el Manual de la Fiscalía Pública una reseña de prácticas y políticas pertinentes para el procesamiento por actos de corrupción, incluidas las de soborno transnacional. (Véase la sección 1.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 1.4.5 Implementar mecanismos que garanticen una adecuada coordinación entre los fiscales policiales y la Fiscalía, y la supervisión por ésta de los fiscales policiales, para el caso de que se asigne a estos últimos la función de promover procesamientos por actos de corrupción. (Véase la Sección 1.2 del Capítulo II del presente Informe).
- 1.4.6 Facilitar el acceso en línea a los informes anuales de la Oficina de la Procuraduría General. (Véase la Sección 1.2 del Capítulo II del presente Informe)

- 1.4.7 Asegurar que se publique anualmente un informe sobre las actividades de la Oficina de la Procuraduría General. (Véase la Sección 1.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 1.4.8 Establecer criterios y parámetros uniformes para el contenido básico de los informes anuales de la Oficina de la Procuraduría General, que además aseguren que éstos contengan material pertinente que informe al público sobre la labor llevada a cabo por ese órgano de control tal como la asignación presupuestaria, gastos, capacitación proporcionada, así como estadísticas de su labor. (Véase la Sección 1.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 1.4.9 Establecer en la Real Fuerza Policial de Las Bahamas una Unidad Anticorrupción para investigar denuncias de corrupción formuladas contra altos funcionarios gubernamentales y funcionarios públicos. (Véase la Sección 1.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 1.4.10 Establecer una unidad de auditoría interna dentro de la Oficina de la Procuraduría General. (Véase la sección 1.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 1.4.11 Adoptar un cronograma para la aplicación del Plan de Acción Anticorrupción, en que se establezcan prioridades, medidas que hayan de realizarse, plazos para su ejecución y objetivos anuales que hayan de alcanzarse, y difundir ese programa para que el público pueda valorar los esfuerzos realizados por el Estado analizado para llevar a cabo su aplicación. (Véase la sección 1.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 1.4.12 Establecer en la página *web* de la Oficina de la Procuraduría General una sección para recibir quejas del público sobre la labor realizada por ese órgano de control. (Véase la sección 1.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 1.4.13 Implementar un mecanismo por el cual la Oficina de la Procuraduría General proporcione retroinformación a organismos gubernamentales referentes al resultado de las derivaciones de casos e investigaciones de casos recibidos por esa Oficina. (Véase la sección 1.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 1.4.14 Establecer un equipo asesor de fiscales y policías sobre actos de corrupción para mejorar la coordinación y preparación de casos relativos a esos delitos. (Véase la sección 1.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 1.4.15 Efectuar un análisis de las causas que podrían estar incidiendo para dificultar la obtención de pruebas sólidas requeridas para la detección de actos de corrupción, en orden a identificar retos e implementar medidas correctivas, en caso que corresponda. (Véase la sección 1.2 del Capítulo II del presente Informe)

- 1.4.16 Mantener resultados que indiquen el total de casos investigados en estado de adopción de decisiones en cada uno de los últimos años; el número de decisiones adoptadas en relación con los mismos; y el número de decisiones en que se hayan constatado responsabilidades o impuesto sanciones, para identificar dificultades y recomendar la adopción de medidas correctivas por la Oficina de la Procuraduría General. (Véase la sección 1.3 del Capítulo II del presente Informe)
- 1.4.17 Mantener resultados que distingan entre casos que hayan dado lugar a procesamientos por delitos graves y por delitos menores. (Véase la sección 1.3 del Capítulo II del presente Informe)
- 1.4.18 Mantener estadísticas sobre los recargos recaudados por la Oficina de la Procuraduría General como resultado de la violación de la Ley de Administración Financiera y Auditoría. (Véase la sección 1.3 del Capítulo II del presente Informe)
- 1.4.19 Mantener estadísticas sobre las multas recaudadas como resultado de violaciones de la Ley de Prevención del Soborno y de la Ley de Difusión Pública. (Véase la sección 1.3 del Capítulo II del presente Informe)

## 2. COMISIÓN DE DIFUSIÓN PÚBLICA

### 2.1. Existencia de un marco jurídico y/o de otras medidas

[68] La Comisión de Difusión Pública cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[69] Con respecto a sus objetivos y al alcance de sus funciones, la sección 6 de la Ley de Difusión Pública dispone que la Comisión de Difusión Pública debe examinar todas las declaraciones que le presenten Parlamentarios, Senadores y altos funcionarios públicos y titulares de cargos políticos.<sup>72</sup> También tiene la potestad de requerir a esos Parlamentarios, Senadores y altos funcionarios públicos y titulares de cargos políticos toda información o documentación adicional que pueda necesitar; hacer comparecer ante la Comisión a esas autoridades; efectuar indagatorias e investigaciones independientes con respecto a esas declaraciones, y citar testigos, ordenar la presentación de documentos, y hacer todo aquello que considere necesario o conveniente a los efectos del cumplimiento de sus funciones.<sup>73</sup>

<sup>72</sup> Sección 6 de la Ley de Difusión Pública, *supra* nota 33. Véase también la Ley de Difusión Pública (Petición a Titulares de Cargos Políticos y Altos Funcionarios Públicos), que impone la obligación de declarar a todos los Titulares de Cargos Políticos y Altos Funcionarios Públicos incluidos en el Anexo adjunto a la Ley, [http://laws.bahamas.gov.bs/cms36/images/LEGISLATION/SUBORDINATE/1980/1980-0020/PublicDisclosureActApplicationtoPublicAppointeesandPublicOfficersNotice\\_1.pdf](http://laws.bahamas.gov.bs/cms36/images/LEGISLATION/SUBORDINATE/1980/1980-0020/PublicDisclosureActApplicationtoPublicAppointeesandPublicOfficersNotice_1.pdf) La lista de Titulares de Cargos Políticos y Altos Funcionarios Públicos comprende al Secretario del Gabinete, el Secretario Financiero, el Presidente de la Comisión del Servicio Público, el Secretario Permanente, el Director de Asuntos Jurídicos, el Auditor General, el Director de Personal Público, el Comisionado de Policía, el Secretario de Ingreso Fiscal, el Subsecretario Permanente, el Subsecretario Financiero, el Subauditor General, el Subcomisionado de Policía, el Subdirector de Personal Público, el Jefe de Departamento, el Subjefe de Departamento, el Gerente General (sea cual fuere su denominación) de cualquier entidad establecida por Ley para cumplir funciones públicas, el Gobernador del Banco Central de Las Bahamas y el Subdirector del Banco Central de Las Bahamas.

<sup>73</sup> Sección 7 de la Ley de Difusión Pública, *idem*.

También puede recibir denuncias relacionadas con el resumen publicado de las declaraciones.<sup>74</sup> A ese respecto puede citar al denunciante, recibir su declaración y las declaraciones de los testigos que haya presentado el denunciante en respaldo de su denuncia.

[70] En la respuesta al cuestionario el Estado analizado señala que en el cumplimiento de sus funciones la Comisión es una entidad independiente, posee autonomía y no tiene por qué armonizar su labor con la de ningún otro organismo.<sup>75</sup> A ese respecto, durante la visita *in situ* los representantes señalaron que ella actúa con independencia en el examen de las declaraciones.<sup>76</sup>

[71] Con respecto a la manera en que se adopten decisiones, conforme a lo dispuesto en la sección 15 del Primer Anexo de la Ley de Difusión Pública las decisiones a las que llegue la Comisión deben ser adoptadas por mayoría de votos, de un *quórum* de no menos de dos de sus miembros. El Presidente, además de poseer un voto como miembro, tendrá también el voto decisorio en caso de empate. Como se señaló durante la visita *in situ* las decisiones de la Comisión pueden ser impugnadas y si el recurrente discrepa con una decisión de la Comisión, el asunto puede ser derivado a la Corte.<sup>77</sup>

[72] Con respecto a la selección de altos funcionarios, la Comisión está formada por tres miembros designados por el Gobernador General previa recomendación del Primer Ministro tras consultar al Jefe de la Oposición.<sup>78</sup> La Ley dispone además que si una declaración debe ser presentada por un miembro de la Comisión, ésta deberá estar formada por el Primer Ministro, el Jefe de la Oposición y un miembro de la Comisión que no sea el que formula la declaración, designado por el Gobernador General.

[73] Los miembros son designados para cumplir mandatos de no más de 5 años y pueden ser reelectos.<sup>79</sup> El Gobernador General designa a uno de ellos como Presidente de la Comisión.<sup>80</sup> El Gobernador General, previa recomendación del Primer Ministro formulada luego de consultar al Jefe de la Oposición, puede en cualquier momento revocar la calidad de miembro de cualquier miembro designado. El Gobernador General, al revocar un nombramiento, deberá tener en cuenta toda manifestación efectuada por un Senador o Parlamentario fundamentando las razones por las cuales una persona no deba seguir siendo miembro de la Comisión.<sup>81</sup>

[74] En relación con la manera en que se identifican los recursos humanos necesarios y selección de personal, la sección 13 del Primer Anexo de la Ley dispone que la Comisión debe designar a un Secretario y a todas las demás autoridades y empleados que considere necesarios para la adecuada realización de su labor. En la respuesta al cuestionario el Estado analizado señala que además de los tres comisionados, la Comisión está formada por tres funcionarios: un Secretario en régimen de dedicación parcial y dos administrativos que son funcionarios públicos.<sup>82</sup>

---

<sup>74</sup> Sección 7(b), *ídem*.

<sup>75</sup> Respuesta al Cuestionario, pág. 10, *supra* nota 4.

<sup>76</sup> Presentación *in situ* de la Comisión de Difusión Pública, pág. [http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4\\_bhs.htm](http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4_bhs.htm)

<sup>77</sup> *Ídem.*, pág. 10.

<sup>78</sup> Sección 1 del Primer Anexo de la Ley de Difusión Pública, *supra* nota 33.

<sup>79</sup> Sección 2 del Primer Anexo de la Ley de Difusión Pública, *ídem*.

<sup>80</sup> Sección 4 del Primer Anexo, *ídem*.

<sup>81</sup> Sección 7 del Primer Anexo, *ídem*.

<sup>82</sup> Respuesta al Cuestionario, pág. 9, *supra* nota 4 y véase Presentación *in situ* de la Comisión de Difusión Pública, pág. 8, *supra* nota 76.

[75] Además, en la respuesta al cuestionario el Estado analizado señala que la selección e identificación de recursos humanos se realiza en observancia de la Ley del Servicio Público y el Reglamento y las Órdenes Generales del Servicio Público, y que es la Comisión del Servicio Público la que supervisa el proceso de reclutamiento del personal de la Comisión.<sup>83</sup> En tal carácter, los dos funcionarios administrativos están sujetos a las disposiciones sobre designación, terminación de empleo y disciplina contenidos en el Reglamento, así como a las normas sobre prevención de la corrupción, conflictos de intereses y limitación de la participación política contenidas en las Órdenes Generales.

[76] Con respecto a manuales u otros documentos que describen las funciones de su personal, en la respuesta al cuestionario el Estado analizado señala que no se han creado manuales específicos, pero que se hace uso del Reglamento y de las Órdenes Generales del Servicio Público, así como de programas de capacitación laboral.<sup>84</sup> Durante la visita *in situ* los representantes de la Comisión manifestaron además que existen descripciones de cargos específicos para cada uno de los funcionarios, y que se proporciona capacitación a través del Servicio Público.<sup>85</sup> Además la capacitación se proporciona para asegurar que todos los funcionarios conozcan los procedimientos adecuados para el examen de una declaración. A ese respecto la Comisión ofrece orientación a sus funcionarios durante el procesamiento de una declaración por un miembro, si surgen circunstancias en que el funcionario requiera asistencia.<sup>86</sup>

[77] Con respecto a la manera que la Comisión atiende reclamos y quejas relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos, el Estado analizado, en su respuesta al cuestionario, señala que todas las quejas y reclamos son tramitadas por la Comisión conforme a lo previsto por la Ley de Difusión Pública.<sup>87</sup>

[78] Sobre la manera que se garantizan los recursos presupuestales, en su respuesta al cuestionario el Estado analizado señala que los fondos destinados a la Comisión consisten en sumas proporcionadas por el Parlamento y todo otro financiamiento que se le pueda proporcionar conforme a la ley.<sup>88</sup> Además, la Comisión debe poner a consideración del Primer Ministro, con miras a su aprobación, antes del 31 de diciembre de cada año, sus estimaciones de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio financiero del Gobierno, que se abre el 1 de julio de cada año.<sup>89</sup> Además, durante la visita *in situ* los representantes de la Comisión proporcionaron la siguiente información con respecto a su presupuesto correspondiente a los últimos cinco ejercicios fiscales; en ella no se tienen en cuenta los salarios del personal administrativo:<sup>90</sup>

<b>Ejercicio</b>	<b>Presupuesto (en dólares de Las Bahamas)</b>
2010/2011	40 000
2011/2012	40 000
2012/2013	40 000

<sup>83</sup> Respuesta al Cuestionario, pág. 9, *supra* nota 4.

<sup>84</sup> *Ídem*.

<sup>85</sup> Presentación *in situ* de la Comisión de Difusión Pública, pág. 16 *supra* nota 76.

<sup>86</sup> *Ídem*.

<sup>87</sup> Respuesta al Cuestionario, pág. 9, *supra* nota 4.

<sup>88</sup> *Ídem*. Véase también la sección 10 del Primer Anexo de la Ley de Difusión Pública, *supra* nota 33.

<sup>89</sup> Primer Anexo de la Ley de Difusión Pública, sección 12, *supra* nota 33. Véase también la Presentación *in situ* de la Comisión de Difusión Pública, pág. 19, *supra* nota 76.

<sup>90</sup> Presentación *in situ* de la Comisión de Difusión Pública, *ídem*.



2013/2014	40 000
2014/2015	40 000

[79] La sección 11 del Primer Anexo de la Ley dispone asimismo que la Comisión debe mantener una adecuada contabilidad de sus ingresos, pagos, activos y pasivos y que esas cuentas deben ser auditadas anualmente por un auditor designado cada año por la Comisión con la aprobación del Primer Ministro. En su respuesta al cuestionario y durante la visita *in situ* se señaló que esas cuentas son auditadas anualmente por el Auditor General y se incluyen en los Estados Financieros del Gobierno, que se presentan anualmente al Parlamento.<sup>91</sup>

[80] Con respecto a mecanismos de coordinación, la Ley dispone que cuando un Parlamentario falta a su obligación de presentar una declaración a la Comisión según lo previsto en la Ley, o cuando algún aspecto de una declaración no es considerado satisfactorio por la Comisión, ésta debe poner el asunto en conocimiento del Primer Ministro y del Jefe de la Oposición.<sup>92</sup> En el caso de altos funcionarios públicos y titulares de cargos políticos, esas comunicaciones se remiten al Primer Ministro y al Procurador General.

## 2.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[81] La Comisión de Difusión Pública cuenta con un conjunto de disposiciones y de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 2.1 anterior de este informe. No obstante, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas.

[82] Antes de comenzar a analizar lo referente a ese órgano de control el Comité señala que en el Informe de 2013 de la Comisión Constitucional de Revisión de la Constitución de Las Bahamas se señala en lo referente a la Comisión de Difusión Pública que:

[83] *“Es innegable la necesidad de un órgano que esté en condiciones de asegurar que los Ministros, Parlamentarios y otros altos funcionarios sean llamados a responsabilidad y actúen con probidad en el ejercicio de sus cometidos. Sin embargo, en los últimos tiempos, bajo sucesivos gobiernos, los dictámenes de la Comisión de Difusión Pública se ha convertido, esencialmente, en letra muerta.”*<sup>93</sup>

[84] El Comité señala además que la Ley misma data de 1976 y no ha sido enmendada ni actualizada desde entonces. Durante la visita *in situ* el Secretario de la Comisión señaló que sería ideal revisar ese texto legal, creado hace casi 40 años.<sup>94</sup> El Comité observa además que en la Convención se exhorta a los Estados Parte a establecer órganos de control para implementar mecanismos modernos de prevención, detección, sanción y erradicación de actos de corrupción. Como el referido cuerpo legal no ha sido revisado en más de 40 años, el marco establecido para recibir y examinar las declaraciones de Parlamentarios y altos funcionarios públicos es anticuado. A ese respecto la Comisión Constitucional ya mencionada recomienda sancionar algún tipo de Ley de Integridad en la Función Pública que establezca

<sup>91</sup> Respuesta al Cuestionario, pág. 10, *supra* nota 4 y Presentación *in situ* de la Comisión de Difusión Pública, pág. 18, *idem*.

<sup>92</sup> Sección 8(1) de la Ley de Difusión Pública, *supra* nota 33.

<sup>93</sup> Informe de la Comisión Constitucional, pág. 162, *supra* nota 34.

<sup>94</sup> Véase Presentación *in situ* de la Comisión de Difusión Pública, pág. 22 *supra* nota 76. El Estado analizado senala que la Comisión de Reforma y Revisión Legal de la Procuraduría General ha sido invitada a examinar la legislación pertinente en conjunción con la Comisión de Difusión Pública, para llevar a cabo las actualizaciones legislativas que puedan ser necesarias y que se invitará a la Comisión de Difusión Pública a recomendar el perfeccionamiento o la actualización del Formulario de Declaración.

un organismo de vigilancia para el cumplimiento de las normas legales aplicables.<sup>95</sup> Además se señala que de ese modo Las Bahamas quedarían en condiciones de transformar en legislación nacional las obligaciones previstas en la Convención y hacer ésta efectiva.<sup>96</sup>

[85] En virtud de lo que antecede el Comité señala que la Comisión, como se establece en la sección 1.1, manifestó que al revisar y examinar declaraciones dicho cuerpo trabaja en forma independiente y no armoniza sus actividades con los de ningún otro organismo. No obstante, el Comité señala que la legislación no establece expresamente que la Comisión no esté sujeta al control o la dirección de ninguna persona o autoridad. Además, durante la visita *in situ* se señaló que la Comisión es una unidad u oficina del Gabinete, y no un organismo independiente, presidido administrativamente por el Secretario del Gabinete, que pertenece a la Cartera Ministerial del Primer Ministro de Las Bahamas.<sup>97</sup> Por ese motivo, tanto la función presupuestaria como la de recursos humanos están a cargo de los altos funcionarios de la Oficina del Gabinete, y no de la Comisión. Como se señaló durante la visita *in situ*, con respecto a recursos humanos la Comisión no interviene en el reclutamiento de sus funcionarios, pues esa función está a cargo de la Sección de Recursos Humanos de la Oficina del Gabinete y la Comisión del Servicio Público. En consecuencia, los dos funcionarios administrativos son empleados públicos pertenecientes a la Oficina del Gabinete --no a la Comisión-- que prestan servicios en ese órgano de control. El Oficial Financiero de la Oficina del Gabinete tiene a su cargo las funciones de contabilidad de la Comisión y es esa Oficina la que mantiene los registros de las transacciones financieras de la Comisión, y no la Comisión misma, conforme a lo dispuesto en la sección 11 del Primer Anexo de la Ley. Un hecho importante es que el proyecto de presupuesto de la Comisión se remite anualmente al Primer Ministro con miras a su aprobación, por lo cual ese órgano de control carece de autonomía presupuestaria.

[86] Dado que la Comisión realiza una importante labor recibiendo y examinando declaraciones de Parlamentarios, incluidas las del Primer Ministro, es esencial que posea independencia para llevar a cabo sus funciones de revisión de las declaraciones que le presenten el Gabinete y el Primer Ministro. El Comité formulará recomendaciones. (Véanse las recomendaciones 2.4.1 y 2.4.2 en la sección 2.4 del capítulo II del presente informe).

[87] El Comité toma nota, además, de que la Comisión no sólo carece de independencia presupuestaria, sino que el presupuesto que recibe no es adecuado para el debido cumplimiento de sus funciones, y durante la visita *in situ* se señaló que la Comisión necesita fondos adicionales.<sup>98</sup> Como se expresó en la sección 2.1, el presupuesto de la Comisión se ha fijado en la suma de \$40 000 para los próximos cinco años, excluidos los salarios de su personal administrativo. Esa suma ha ido en detrimento de la manera en que la Comisión puede llevar a cabo su labor, ya que, por ejemplo, tiene dos funcionarios administrativos, pero ambos son empleados de la Oficina del Gabinete, y no puede contratar personal adicional si lo necesita; por ejemplo personal con formación en contabilidad, además de formación en tecnologías de la información.<sup>99</sup> Lo exiguo de esos recursos presupuestarios ha llevado también a la Comisión a carecer de materiales y herramientas básicos, pues carece de una página *web*, de acceso a

<sup>95</sup> Informe de la Comisión Constitucional, pág. 162, *supra* nota 34.

<sup>96</sup> *Ídem*.

<sup>97</sup> Presentación *in situ* de la Comisión de Difusión Pública, pág. 4, *supra* nota 76.

<sup>98</sup> *Ídem*, pag. 22.

<sup>99</sup> *Ídem*, pags. 12 y 22. El Estado analizado señala que se debería proporcionar a la Comisión un presupuesto y recursos humanos y de material adecuados para atender sus necesidades. El respaldo adicional de Información y tecnología requerido por el departamento ha sido identificado; se puso en conocimiento del Comité en la visita *in situ*, y se atenderá en el presupuesto de julio de 2015. Toda necesidad de financiamiento para personal adicional identificada sería atendida en ese momento.

internet o incluso de una dirección de correo electrónico. El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 2.4.3 en la sección 2.4 del capítulo II del presente informe).

[88] Como se señaló, pese a que cumple importantes funciones de lucha contra la corrupción en Las Bahamas, esa Comisión carece de un sitio *web* en que el público en general y quienes están sujetos a su régimen, o sea los Parlamentarios, puedan obtener acceso a la labor que ella realiza y formular consultas. El Comité observa que la Comisión no aparece entre los resultados de una búsqueda en el sitio *web* del Gobierno de Las Bahamas, lo que hace que ese órgano de control carezca de presencia en línea. Reconociendo las bondades que ofrece en la actualidad el Internet para mantener al público informado acerca del quehacer de las instituciones gubernamentales y facilitar la consulta y accesibilidad de información de interés público, el Comité formulará una recomendación al Estado analizado tendiente a considerar adoptar las medidas que estimen necesarias a modo de establecer y mantener actualizado un sitio *web*, que contenga información básica, tal como su mandato y composición, e información de contacto<sup>100</sup>. También debería contener estadísticas sobre su labor, así como proporcionar información a los Parlamentarios y a quienes estén sujetos a la Ley en relación con sus obligaciones de proporcionar declaraciones legalmente preceptivas, e instrucciones sobre la manera de llenar los formularios. (Véase la recomendación 2.4.4 en la sección 2.4 del capítulo II del presente informe).

[89] En relación con las recomendaciones que anteceden, el Comité observa que la Comisión es responsable de recibir reclamaciones escritas con respecto a resúmenes de declaraciones que hayan sido publicadas en el Diario Oficial. Sin embargo, no se trata sólo de que la Comisión carece de un sitio *web*, sino además de que el Comité no pudo hallar en el sitio *web* del Gobierno de Las Bahamas ninguna información de contacto en ese órgano de control. Por lo tanto al Comité no le resulta claro en qué medida ese órgano cumple eficazmente sus funciones de recibir e investigar denuncias contra Parlamentarios o personas sujetas a la Ley de Difusión Pública. El Comité cree que el Estado analizado debería considerar la posibilidad de establecer e implementar un programa de extensión para informar a las personas sobre la manera en que pueden presentar denuncias a la Comisión sobre las declaraciones resumidas de Parlamentarios y altos funcionarios públicos y titulares de cargos políticos, y para saber a qué dependencia puede presentarse una denuncia. El Comité formulará recomendaciones. (Véanse las Recomendaciones 2.4.5 y 2.4.6 en la Sección 2.4 del Capítulo II del presente Informe)

[90] El Comité observa que la Comisión carece de herramientas tecnológicas para cumplir su labor. Por ejemplo recibe y registra las declaraciones en forma manual y no usa tales herramientas para ello. Como se señala en la presentación ofrecida durante la visita *in situ*:<sup>101</sup>

[91] *“La Comisión usa las siguientes máquinas para el cumplimiento de sus funciones: una sumadora, dos procesadoras de textos y un fax. La Comisión posee, sí, un sistema electrónico de recepción de declaraciones, por lo cual no se está usando una base de datos electrónica. Los datos se almacenan en nuestro sistema de archivo.”*

[92] Pese a que los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos fueron analizados en la Primera Ronda, y que se formularon recomendaciones, el Estado analizado debería considerar poner a disposición medios electrónicos para completar la declaración y entregarla a la Comisión, a

<sup>100</sup> El Estado analizado senala que se está considerando actualmente el establecimiento de un sitio web de la CDP para el presupuesto de julio de 2015. La necesidad del mismo fue identificada durante la visita in situ y ha pasado a ser un componente de las proyecciones presupuestarias.

<sup>101</sup> *Ídem.*, pág. 17. El Estado analizado señala que Las Bahamas ha mejorado recientemente el uso de moderna tecnología para cargar documentos en el Departamento de Registro General. En la misma matriz puede implementarse, análogamente, un medio electrónico de llenado y presentación de una declaración.

fin de facilitar la revisión de la información proporcionada. El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 2.4.7 en la sección 2.4 del capítulo II del presente informe).

[93] Durante la visita *in situ* se explicó la manera en que se examinan las declaraciones. Como éstas se reciben manualmente, el personal inserta la información recibida en una hoja de cálculo para que los Comisionados la examinan a fin de verificar su razonabilidad y considerar si se requiere información adicional. Se señaló que los Comisionados verifican la plenitud de la declaración y si la información proporcionada -- por ejemplo los estados bancarios-- está notariada. No obstante, el Comité toma nota de que no se hizo mención al acceso a bases de datos del Gobierno que la Comisión haya consultado para verificar el contenido de esas declaraciones. Otros Estados de la región, en el régimen vigente para verificar el contenido de las declaraciones, tienen acceso a diversas bases de datos, trátase de registros inmobiliarios o de compañías o de organismos tributarios. El Comité cree que para ello el Estado analizado puede considerar la posibilidad de implementar medidas que permitan a la Comisión inspeccionar y sacar copias de registros y documentos en poder de departamentos y organismos públicos. El Comité observa que conforme a la sección 7(b)(iv) de la Ley de Difusión Pública, la Comisión tiene la potestad de convocar testigos, requerir la producción de documentos y hacer todo aquello que considere necesario o conveniente para el cumplimiento de sus funciones. No obstante, la Comisión no parece estar dotada de todos los instrumentos necesarios para verificar la información contenida en las declaraciones, lo que puede dificultar su labor de verificar el contenido de las mismas. El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 2.4.8 en la sección 2.4 del capítulo II del presente informe).

[94] Otra dificultad mencionada durante la visita *in situ* se refiere al período para el que son designados los miembros de la Comisión de Difusión Pública. Conforme a la Ley, una persona puede ser designada para un período de hasta 5 años y puede ser reelegida. Durante la visita *in situ* se señaló que las designaciones se hacen generalmente para períodos de uno a tres años, y que esos términos en general son fijos.<sup>102</sup> No obstante, se señaló asimismo que en general los nombramientos se hacen por un período de un año, y en opinión de los miembros de la Comisión, ese plazo es demasiado corto y en general da lugar a demoras --en algunos casos de hasta 3 meses-- hasta que se recibe la nueva designación.<sup>103</sup> Sin esas designaciones la Comisión no puede actuar ni cumplir las funciones que se le han encomendado. El Comité considera que el Estado analizado debería considerar la posibilidad de establecer medidas y un marco cronológico para que esas designaciones puedan realizarse puntualmente, con el fin de garantizar la continuidad de la labor de la Comisión. El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 2.4.9 en la sección 2.4 del capítulo II del presente informe).

[95] El Comité observa que la Ley de Difusión Pública no contiene disposición alguna que indique en qué circunstancias quienes componen la Comisión pueden ser destituidos como Comisionados o descalificados para desempeñar ese cargo. El Primer Anexo de la Ley sólo dispone que su nombramiento puede ser revocado por el Gobernador General, previa recomendación del Primer Ministro una vez que éste mantenga consultas con el Jefe de la Oposición, teniendo en cuenta también toda manifestación que efectúe un Senador o Parlamentario, exponiendo las razones por las cuales esa persona no deba seguir siendo miembro de la Comisión. El Comité cree conveniente para el Estado analizado considerar la posibilidad de adoptar disposiciones que establezcan los parámetros de destitución del cargo; por ejemplo que un Comisionado quede inhabilitado para desempeñar las funciones del cargo por enfermedad corporal o mental o cualquier otra causa; irregularidades de comportamiento o conflicto de intereses. También deberían establecerse parámetros de descalificación para ocupar un puesto, tales

---

<sup>102</sup> *Ídem.*, pág. 8.

<sup>103</sup> *Ídem.*, pág. 12.

como quiebra no saneada o condena penal por un delito que implique deshonestidad o bajeza moral. Establecer parámetros puede ayudar a crear transparencia sobre las causales de destitución o remoción y descalificación e indicar a los miembros designados qué conductas pueden poner en entredicho su elegibilidad como Comisionados. El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 2.4.10 en la sección 2.4 del capítulo II del presente informe).

[96] El Comité señala asimismo que ese órgano de control no está obligado a presentar un informe de sus actividades. Conforme al Primer Anexo de la Ley de Difusión Pública la descripción de la sección 12 se refiere a informes anuales y estimaciones, pero la disposición misma sólo establece la obligación de la Comisión de presentar sus estimaciones de ingresos y gastos al Primer Ministro. Para promover transparencia y rendición de cuentas la Comisión debería tener la obligación de preparar y publicar un informe anual de sus actividades, lo que permitiría al público conocer la labor efectuada por ese órgano de control. Tal informe puede constituir también un mecanismo de rendición de cuentas y debería incluir información pertinente, tal como el número de declaraciones que deben recibirse en un año, la cifra de las realmente recibidas, los nombres de quienes no las hayan presentado, los nombres que hayan sido comunicados a las autoridades pertinentes y los resultados de esas comunicaciones, así como el número de investigaciones iniciadas y el resultado de las mismas. Otra información importante puede consistir en el número de investigaciones recibidas por la Comisión y el número de las que hayan sido verificadas. El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 2.4.11 en la sección 2.4 del capítulo II del presente informe).

[97] El Comité señala que la Comisión, durante la visita *in situ*, expresó que la capacitación se proporciona para asegurar que todos los funcionarios conozcan los procedimientos apropiados para el examen de una declaración, y que la capacitación se proporciona a través del Servicio Público.<sup>104</sup> No obstante, no se mencionó la formación de capacidad proporcionada a Parlamentarios, altos funcionarios públicos y titulares de cargos políticos, sobre su obligación de presentar declaraciones. Además, como la Comisión no tiene un sitio *web* no resulta claro cómo los Parlamentarios pueden recibir más información sobre sus responsabilidades conforme a la Ley. El Comité formulará recomendaciones. (Véase la recomendación 2.4.12 en la sección 2.4 del capítulo II del presente informe).

[98] El Comité observa asimismo que la Ley de Difusión Pública data de 1976, y que es una de las leyes que la Comisión ha considerado necesario revisar. A ese respecto, el Comité considera que al realizar una revisión también debería revisarse el formulario de declaración, para determinar si la información solicitada es adecuada para asegurar la probidad en la función pública. El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 2.4.13 en la sección 2.4 del capítulo II del presente informe).

[99] A ese respecto, el Comité observa que ni la legislación ni el formulario de declaración parecen contemplar la posibilidad de que los Parlamentarios y las personas sujetas a la Ley declaren sus intereses; por ejemplo los cargos de directores que ocupen en compañías u órganos institucionales; el contenido de los contratos que mantengan con el Estado, o el nombre o la descripción de las compañías, asociaciones o sociedades en que el Parlamentario sea inversionista. El Comité considera que el Estado analizado debería considerar la posibilidad de mantener un registro de intereses en virtud del cual quienes esté sujetos a la Ley deban proporcionar una lista de esos intereses, pecuniarios o no, que puedan plantear un conflicto entre el interés privado de un declarante y sus cometidos públicos. Un registro como el referido puede ayudar a identificar esos posibles conflictos de intereses, que la Comisión puede entonces estar en condiciones de atender mediante herramientas

---

<sup>104</sup> *Ídem.*, pág. 16.

adecuadas; por ejemplo exigiendo la creación fideicomisos ciegos. El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 2.4.14 en la sección 2.4 del capítulo II del presente informe).

### 2.3. Resultado del marco jurídico y/o de otras medidas

[100] Con respecto a resultados, la Comisión de Difusión Pública durante la visita *in situ* señaló lo siguiente:

[101] “La Comisión mantiene resultados sobre el número de declarantes que deben presentar una declaración, así como el número de declaraciones no recibidas. En la actualidad hay 38 Parlamentarios y 16 Senadores. Además, los Parlamentarios y Senadores electos y designados por primera vez, junto con los que cesan, también deben presentar declaraciones en las fechas de aniversarios de su elección, nombramiento y cese. Se mantiene un registro manual para esos datos.”

[102] La Comisión agregó también que aproximadamente 180 titulares de cargos políticos y autoridades públicas tienen la obligación de presentar sus declaraciones, y proporcionó una descripción del marco cronológico vigente para recibir esas declaraciones y el proceso de envío de cartas-recordatorio y señaló que esos documentos se sellan y registran manualmente en un registro. Además el registro entrante se revisa periódicamente y a quienes no hayan presentado declaraciones se les enviaría un segundo recordatorio.

[103] Tras la visita *in situ* el Estado analizado proporcionó la siguiente información:

MIEMBROS DE LA CÁMARA BAJA					
Información requerida	31 de diciembre de 2008	31 de diciembre de 2009	31 de diciembre de 2010	31 de diciembre de 2011	31 de diciembre de 2012
No. de declarantes obligados a revelar información	54 <sup>105</sup>	42	42	48	54
No. de declaraciones recibidas	22	23	23	24	21
No. de declaraciones publicadas	(18)	(12)	(20)	(23)	(20)
No. de declaraciones no publicadas	(5)	(11)	(3)	(1)	(1)
No. de declarantes comunicado al Primer Ministro y al	32	19	19	24	23

<sup>105</sup> La cifra incluye la de miembros de la Cámara Baja cesantes y nuevos miembros electos correspondientes a las Elecciones Generales de 2007 y 2013.

Jefe de la Oposición					
----------------------	--	--	--	--	--

SENADORES					
Información requerida	31 de diciembre de 2008	31 de diciembre de 2009	31 de diciembre de 2010	31 de diciembre de 2011	31 de diciembre de 2012
No. de declarantes obligados a revelar información	29 <sup>106</sup>	16	17	24	30
No. de declaraciones recibidas	8	8	5	14	9
No. de declaraciones publicadas	(6)	(5)	(5)	13	(9)
No. de declaraciones no publicadas	(2)	(3)	(0)	13	(0)
No. de declarantes comunicado al Primer Ministro y al Jefe de la Oposición	21	8	12	10	20

ALTOS FUNCIONARIOS Y TITULARES DE CARGOS POLÍTICOS					
Información requerida	31 de diciembre de 2008	31 de diciembre de 2009	31 de diciembre de 2010	31 de diciembre de 2011	31 de diciembre de 2012
No. de declarantes obligados a revelar información	112	127	114	123	138
No. de declaraciones recibidas	15	40	51	22	31

<sup>106</sup> La cifra incluye la de senadores cesantes y nuevos senadores electos correspondientes a las Elecciones Generales de 2007 y 2013.

No. de declaraciones publicadas	97 <sup>107</sup>	87	63	101	107
---------------------------------	-------------------	----	----	-----	-----

[104] El Comité toma nota del número relativamente bajo de situaciones de cumplimiento, por parte de aquellos sujetos a la Ley para presentar sus declaraciones en o antes del plazo mandato legislativo. Al respecto, el Comité señala que una de las dificultades mencionadas durante la visita *in situ* consiste en las demoras en la obtención de declaraciones de Parlamentarios, Senadores, altos funcionarios públicos y titulares de cargos políticos.<sup>108</sup> A ese respecto, el Comité señala que las personas sujetas a la Ley que no cumplan su obligación de presentar declaraciones deben ser denunciadas al Primer Ministro y al Jefe de la Oposición, si se trata de un Parlamentario o Senador, y al Primer Ministro y al Procurador General si se trata de altos funcionarios públicos o titulares de cargos políticos. Lo mismo sucede en los casos en que la Comisión realiza una investigación sobre una declaración. Es el único mecanismo establecido al que tiene acceso la Comisión, por lo cual ésta sólo tiene que limitarse a dar cuenta de un incumplimiento y el resultado de sus investigaciones, no estando en condiciones de imponer sanciones administrativas. El Comité considera que el Estado analizado puede considerar la posibilidad de conferir a la Comisión la potestad de imponer sanciones administrativas por presentación tardía o por incumplimiento de la obligación de presentar una declaración, lo que puede persuadir a las personas sujetas a la Ley a cumplir las disposiciones de la misma. (Véase la recomendación 2.4.15 en la sección 2.4 del capítulo II del presente informe).

[105] Otra medida que puede considerar el Estado analizado consiste en publicar los nombres de las personas que no hayan presentado sus declaraciones conforme a lo requerido por la Ley de Difusión Pública, además del informe que se remite al Primer Ministro y al Jefe de la Oposición, o al Procurador General, según sea un Parlamentario o un alto funcionario público o el titular de un cargo político. Como pueden existir dificultades para obtener esas declaraciones, puede ser útil publicar nombres para promover el cumplimiento de quienes estén en mora. El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 2.4.16 en la sección 2.4 del capítulo II del presente informe).

[106] El Comité también señala que conforme a la Ley de Difusión Pública, la Comisión, una vez que haya examinado una declaración y comprobado que es completa, deberá publicar un resumen de la misma en el Diario Oficial. Al respecto, los representantes de la Comisión señalaron durante la visita *in situ* que se esperan a reunir todas las declaraciones que deben presentarse en un año para poder publicarlas conjuntamente en el Diario Oficial, pero los representantes de la Comisión expresaron que si las declaraciones no se reciben los resúmenes no se publican. El Comité señala que la Comisión debería considerar la posibilidad de establecer un cronograma de publicación de todas las declaraciones que hayan sido examinadas y consideradas satisfactorias, independientemente de que todas las declaraciones preceptivas se hayan recibido. Informar a quienes no hayan presentado sus declaraciones que ese resumen se publicará y que sus nombres no figurarán en él puede ayudar a estimular el cumplimiento de la Ley. Además, los nombres no deberían ser publicados tan sólo en el Diario Oficial, sino también en línea, para lograr un más amplio acceso al público. El Comité formulará recomendaciones. (Véanse las recomendaciones 2.4.17 y 2.4.18 en la sección 2.4 del capítulo II del presente informe).

<sup>107</sup> No se encontraron registros, pero la cifra de 97 surgió del número de altos funcionarios que presentaron sus respectivas declaraciones.

<sup>108</sup> Presentación *in situ* de la Comisión de Difusión Pública, pág. 12, *supra* nota 76.



[107] El Comité observa asimismo que conforme a la Ley, cuando un Parlamentario falta a su obligación de proporcionar a la Comisión su declaración, o cuando algún aspecto de una declaración no es considerado satisfactorio por la Comisión, ella debe dar cuenta del asunto al Primer Ministro y al Jefe de la Oposición.<sup>109</sup> Tratándose de altos funcionarios públicos y titulares de cargos políticos, esas comunicaciones deben remitirse al Primer Ministro y al Procurador General. Esos parecen ser los únicos casos en que la Comisión realiza un trabajo en común con otros órganos gubernamentales para cumplir su mandato. A ese respecto, el Comité cree que mediante un régimen jurídico fortalecido para esa Comisión el Estado analizado considerará la posibilidad de promover mecanismos de coordinación adicionales, lo que le permitirá informar directamente al Procurador General o a la Real Fuerza Policial de Las Bahamas, según corresponda, cuando toma conocimiento de supuestos actos de corrupción cometidos por personas sujetas a la Ley de Difusión Pública. Además, debe mantener estadísticas sobre los resultados de tales reportes. El Comité formulará recomendaciones. (Véase las recomendaciones 2.4.19 y 2.4.20 en la sección 2.4 del capítulo II del presente informe).

[108] Finalmente, el Comité señala que la información proporcionada en los cuadros estadísticos no es de acceso público, y como se señala en la sección 2.2 del presente informe, la inexistencia de un sitio web hace difícil disponer de este tipo de información. En interés de la transparencia e integridad del sistema existente el Estado analizado debería hacer presentar y hacer públicos sin dilación esos informes, en especial teniendo en cuenta que se trata de la supervisión de parlamentarios y altos funcionarios que no han cumplido sus obligaciones legales de presentar declaraciones. El Comité formulará una recomendación. (ver recomendación 2.4.21 en la sección 2.4 del Capítulo II del presente informe).

## 2.4. Conclusiones y recomendaciones

[109] Con base en el análisis integral realizado con respecto a la Comisión de Difusión Pública en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

**[110] Las Bahamas no ha considerado y adoptado medidas encaminadas a mantener y fortalecer la Comisión de Difusión Pública como órgano de control, tal como se describe en la sección 2 del Capítulo II del presente Informe.**

[111] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere la siguientes recomendaciones:

- 2.4.1 Considerar la posibilidad de establecer disposiciones que estipulen que la Comisión de Difusión Pública es independiente en el ejercicio de las funciones que le encomienda la Ley de Difusión Pública. (Véase la sección 2.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 2.4.2 Asegurar que la Comisión de Difusión Pública disponga de independencia presupuestaria. (Véase la sección 2.2. del Capítulo II del presente Informe)
- 2.4.3 Dotar a la Comisión de Difusión Pública con los recursos presupuestarios, humanos y materiales necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos. (Véase la sección 2.2 del Capítulo II del presente Informe)

---

<sup>109</sup> Sección 8(1) de la Ley de Difusión Pública, *supra* nota 33.

- 2.4.4 Establecer y mantener actualizado un sitio *web* para la Comisión de Difusión Pública. (Véase la sección 2.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 2.4.5 Establecer una sección en línea para la recepción de quejas del público sobre la labor realizada por la Comisión de Difusión Pública. (Véase la sección 2.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 2.4.6 Implementar programas de divulgación para informar al público sobre la manera en que pueden presentar ante la Comisión de Difusión Pública denuncias relativas a las declaraciones resumidas de Parlamentarios y de altos funcionarios públicos y titulares de cargos políticos, y donde se pueden presentar tales denuncias. (Véase la sección 2.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 2.4.7 Implementar medios electrónicos para completar la declaración así como para entregarlas a la Comisión de Difusión Pública, por quienes estén obligados por la Ley de Difusión Pública. (Véase la sección 2.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 2.4.8 Considerar la posibilidad de dotar a la Comisión de Difusión Pública de la potestad de inspeccionar y hacer copias de todos los registros y documentos de departamentos y organismos públicos. (Véase la sección 2.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 2.4.9 Considerar la posibilidad de establecer marcos cronológicos para la designación de los Comisionados con el fin de garantizar la continuidad de las funciones de la Comisión de Difusión Pública. (Véase la sección 2.2 del Capítulo II del presente Informe).
- 2.4.10 Considerar la posibilidad de adoptar disposiciones adicionales que establezcan las circunstancias en virtud de las cuales puedan revocarse los nombramientos de los miembros de la Comisión de Difusión Pública. (Véase la sección 2.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 2.4.11 Considerar la posibilidad de establecer la obligación para la publicación de informes anuales por parte de la Comisión de Difusión Pública sobre las actividades por ella realizadas durante un año. (Véase la sección 2.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 2.4.12 Establecer un programa a cargo de la Comisión de Difusión Pública que asegure capacitación permanente y continua a todos aquellos que estén sujetos a la Ley de Difusión Pública, con respecto a sus cometidos y obligaciones. (Véase la sección 2.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 2.4.13 Revisar el formulario de declaración contenido en la Ley de Difusión Pública para determinar si la información solicitada es adecuada para

garantizar la probidad en la función pública. (Véase la Sección 2.2 del Capítulo II del presente Informe)

- 2.4.14 Implementar un registro de intereses declarados para ayudar a identificar potenciales conflictos entre los intereses privados de un declarante y sus cometidos públicos. (Véase la sección 2.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 2.4.15 Considerar la posibilidad de dotar a la Comisión de Difusión Pública de la potestad de imponer sanciones administrativas por omisión o presentación tardía de declaraciones por quienes estén obligados por la Ley de Difusión Pública. (Véase la sección 2.3 del Capítulo II del presente Informe)
- 2.4.16 Considerar la posibilidad de publicar los nombres de las personas que no hayan presentado sus declaraciones como lo requiere la Ley de Difusión Pública. (Véase la sección 2.3 del Capítulo II del presente Informe)
- 2.4.17 Considerar la posibilidad de establecer un plazo anual fijo para la publicación de las declaraciones resumidas. (Véase la sección 2.3 del Capítulo II del presente Informe)
- 2.4.18 Publicar en línea las declaraciones resumidas para asegurar un más amplio acceso a ellas por el público. (Véase la sección 2.3 del Capítulo II del presente Informe)
- 2.4.19 Establecer mecanismos adicionales de coordinación que permitan a la Comisión de Difusión Pública informar directamente al Procurador General o a la Real Fuerza Policial de Las Bahamas, según corresponda, cuando toma conocimiento de supuestos actos de corrupción cometidos por personas sujetas a la Ley de Difusión Pública. (Véase la sección 2.3 del Capítulo II del presente Informe)
- 2.4.20 Mantener estadísticas sobre los resultados de las comunicaciones enviado al Primer Ministro, Jefe de la Oposición y Procurador General, cuando corresponda, por falta de presentar una declaración, por quienes estén obligados por la Ley de Difusión Pública, o cuando algún aspecto de una declaración no es considerado satisfactorio por la Comisión de Difusión Pública, para identificar dificultades y recomendar medidas correctivas, en caso que corresponda. (Véase la sección 2.3 del Capítulo II del presente Informe)
- 2.4.21 Hacer pública la información estadística con respecto al número de declaraciones que se esperan en un año, el número de declaraciones pendientes de presentación y número de derivaciones efectuadas al Primer Ministro, Jefe de la Oposición y Procurador General. (Véase la sección 2.2 del Capítulo II del presente Informe)

### **3. DEPARTAMENTO DEL AUDITOR GENERAL**

### 3.1 Existencia de un marco jurídico y/o de otras medidas

[112] El Departamento del Auditor General cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[113] Con respecto a sus objetivos y funciones, el Artículo 136(1) de la Constitución de Las Bahamas establece que el Auditor General deberá auditar e informar anualmente sobre las cuentas de la Corte Suprema, el Senado, la Cámara Baja, todos los departamentos y oficinas del Gobierno, (excepto el Departamento del Auditor General), la Comisión del Servicio Público, la Comisión del Servicio Policial y todas las Cortes de la Magistratura.<sup>110</sup> Además, el Artículo 136(7) confiere al Auditor General la potestad de cumplir tales funciones en relación con las cuentas del Gobierno de Las Bahamas y las de otras autoridades públicas y otros órganos que administran fondos públicos en el Estado que estén preceptuadas por, o en virtud de, cualquier otra ley vigente en Las Bahamas, o cualesquiera otras funciones relacionadas con la supervisión y el control del gasto de tales entidades. Como se señaló en la respuesta al cuestionario, el Estado analizado sostiene que no existe ninguna disposición legal que limite el derecho del Auditor General de auditar los libros de todos los Ministerios, Departamentos y organismos gubernamentales.<sup>111</sup>

[114] Además, la sección 38 de la Ley de Administración Financiera y Auditoría, 2010, dispone que el Auditor General, en el cumplimiento de sus cometidos, debe verificar, entre otras cosas, a) que se hayan adoptado todas las precauciones razonables para salvaguardar la recaudación de dineros públicos y que se hayan observado debidamente todas las leyes, directrices e instrucciones relativas a los mismos, b) que todos los asuntos y pagos se efectúen conforme a las disposiciones apropiadas, que todos los pagos se imputen adecuadamente y estén respaldados por comprobantes o pruebas de pago suficientes, y c) que todos los dineros públicos gastados o imputados a una cuenta de apropiación se apliquen al propósito o a los propósitos para los que estén destinados los fondos autorizados por la Cámara Baja, y que el gasto sea congruente con la potestad que lo rija<sup>112</sup>. Además el Auditor General debe realizar exámenes sobre la economía, eficiencia y eficacia con que todo departamento, autoridad u otro órgano haya usado los recursos para cumplir sus funciones.<sup>113</sup>

[115] Al Auditor General le está prohibido, sin embargo, auditar sus cuentas departamentales, conforme a lo dispuesto por el Artículo 136(6) de la Constitución, pues ellas son auditadas por el Ministro de Finanzas.

[116] Conforme al Artículo 136(5) de la Constitución, el Auditor General, en el ejercicio de sus funciones, no está sujeto a la dirección o control de ninguna persona o autoridad.

[117] El Artículo 163(3) dispone además que el Auditor General, así como su personal subordinado, en el ejercicio de sus funciones, tendrá derecho en todo momento a obtener acceso a todos los libros, registros e informes relacionados con las cuentas. La Sección 34(1) de la Ley de Administración Financiera y Auditoría amplía aún más las potestades del Auditor General a ese respecto. Por ejemplo, a los efectos del examen de cualquier cuenta, está facultado para obtener acceso a todos los

<sup>110</sup> Constitución de Las Bahamas, *supra* nota 3.

<sup>111</sup> Respuesta al Cuestionario, pág. 15, *supra* nota 4.

<sup>112</sup> Ley de Administración Financiera y Auditoría, 2010, *supra* nota 62.

<sup>113</sup> Sección 36, *idem*. La Sección 37 dispone además que si el Auditor General tiene fundamentos razonables para creer que cualquier autoridad u órgano en alguno de sus ejercicios financieros ha recibido más de la mitad de sus ingresos de fondos públicos puede llevar a cabo un examen de la economía, eficiencia y eficacia con que haya usado sus recursos en ese ejercicio para cumplir sus funciones.

libros, registros, comprobantes, documentos, declaraciones, efectivo, sellos, valores, valor acumulado u otros comprobantes o documentos que estén bajo el control de cualquier funcionario o que estén relacionados del modo que fuere con las cuentas públicas, y convocará cualquier funcionario público para que proporcione cualquier explicación e información.

[118] El Artículo 136(2) dispone que el Auditor General debe ser designado por el Gobernador General previa recomendación de la Comisión del Servicio Público, una vez que ésta haya consultado al Primer Ministro. El Artículo 136(8) de la Constitución dispone además que el Auditor General sólo puede ser removido del cargo por incapacidad para cumplir las funciones del cargo provocada por enfermedad mental, corporal o cualquier otra causa, o por cometer irregularidades. Además el Artículo 136(9) dispone que el Auditor General sólo puede ser removido del cargo por el Gobernador General si las cuestiones referentes a la remoción del cargo han sido planteadas a un tribunal y éste ha recomendado al Gobernador General que el Auditor General sea removido por incapacidad, como más arriba se expresa, o por irregularidades.

[119] Con respecto a los funcionarios del Departamento, incluido el Subauditor General Principal y el Subauditor General, son contratados como funcionarios públicos.<sup>114</sup> Esas designaciones se efectúan previa recomendación del Auditor General y asesoramiento de la Comisión de Servicios Públicos.<sup>115</sup> El Auditor General entrevista al personal y, si lo considera útil, enviará la información necesaria al Servicio Público indicando el deseo de designarlos.<sup>116</sup> Como funcionarios públicos están sujetos a las disposiciones sobre designación, cesantía y régimen disciplinario contenidas en el Reglamento del Servicio Público, así como a las normas de prevención de la corrupción, conflictos de intereses y limitación de la participación política contenidas en las Órdenes Generales.

[120] Con respecto a la existencia de manuales o documentos sobre desempeño de sus tareas y descripción de sus funciones, el Estado analizado, en su respuesta al cuestionario, manifiesta que cumple tanto las Normas Internacionales de Auditoría como las Normas de Auditoría de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).<sup>117</sup> Durante la visita *in situ* manifestó asimismo que cuenta con procedimientos documentados en materia de Normas, Directrices y Procedimientos de Auditoría Gubernamental establecidos por el Reglamento Financiero de 1975 y la Ley de Administración Financiera y Auditoría de 2010, así como las Normas Internacionales de Administración Financiera.<sup>118</sup> Esos procedimientos y normas documentados incluyen métodos, prácticas, fórmulas, pasos y guías de trabajo de campo. A este respecto se proporcionó a la Secretaría Técnica del MESICIC una copia del Manual de Auditoría, una Lista de Comprobación sobre Políticas y Procedimientos sobre Controles de Calidad y una Hoja de Trabajo sobre el Programa de Auditoría basado en el Riesgo.<sup>119</sup>

[121] Con respecto a capacitación, durante la visita *in situ* el Auditor General señaló que había recibido información actualizada asistiendo a talleres organizados por la Iniciativa de Desarrollo de INTOSAI, talleres y seminarios patrocinados por el Instituto de Contadores Certificados de Las Bahamas y clases de maestría organizadas por las Entidades Fiscalizadoras Superiores del Caribe

<sup>114</sup> Respuesta al Cuestionario, pág. 12, *supra* nota 4.

<sup>115</sup> Presentación *in situ* del Auditor General, pág. 6, [http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4\\_bhs.htm](http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4_bhs.htm)

<sup>116</sup> Respuesta al Cuestionario, pág. 12, *supra* nota 4.

<sup>117</sup> *Ídem*.

<sup>118</sup> Presentación *in situ* del Auditor General, pág. 10, *supra* nota 4.

<sup>119</sup> Manual de Auditoría, Lista de comprobación sobre políticas y procedimientos sobre controles de calidad y hoja de trabajo sobre el Programa de Auditoría basado en el riesgo, disponible [http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4\\_bhs.htm](http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4_bhs.htm)

(CAROSAI).<sup>120</sup> Además tanto el capítulo local de CAROSAI como INTOSAI proporcionan capacitación para personal público de auditoría.<sup>121</sup> El Auditor General también señaló que en los últimos tres años la capacitación había versado sobre esferas tales como auditoría basada en el riesgo, capacitación en tecnología de la información, auditoría de desempeño y capacitación en optimización de recursos. Además, la capacitación se basa en necesidades del Departamento, teniendo en cuenta la disponibilidad de cursos de capacitación ofrecidos, como los de CAROSAI.

[122] El Auditor General también señaló que el Departamento usa el Análisis Interactivo de Extracción de Datos (IDEA), una herramienta de *software* de auditoría, como ejemplo de tecnologías modernas para facilitar su logro. También al personal se le proporciona capacitación sobre ese *software*.

[123] Con respecto a la manera en que se proporciona información al público en general con respecto a sus objetivos y funciones, el Departamento tiene una página web que se encuentra en <http://www.bahamas.gov.bs/auditorgeneral>. Esta página web ofrece una visión general de este órgano de control superior, su mandato, legislaciones pertinentes y copias de sus informes anuales, así como información de contacto. Además, los informes anuales del Departamento están disponibles para el público en general una vez que se presentan en la Cámara Baja. También se proporciona una copia del informe anual al Tesorero de Las Bahamas.<sup>122</sup>

[124] Con respecto a la manera en que se necesitan recursos presupuestarios para las operaciones, el Estado analizado, en su respuesta al cuestionario, manifiesta: *“se remite un proyecto de presupuesto para que reciba financiamiento, y se proporcionan fondos al comienzo de cada período presupuestado. La Oficina del Auditor General mantiene su propia cuenta. Cada mes se remite un informe al Ministerio de Finanzas; el mismo se refiere a la Oficina del Auditor General; se trata exclusivamente de un informe sobre el gasto, ya que la oficina no genera ingresos.”*<sup>123</sup>

[125] Con respecto al presupuesto para el Departamento, las cifras proporcionadas en línea sobre el presupuesto para Las Bahamas son las siguientes:<sup>124</sup>

Ejercicio	Presupuesto (en dólares de Las Bahamas)
2014/2015	2 205 159
2013/2014	1 773 899
2012/2013	2 015 628
2011/2012	2 029 969
2010/2011	1 981 793

[126] Con respecto a mecanismos de coordinación para armonizar funciones, el Estado analizado, en su respuesta al cuestionario, toma nota de que necesita la cooperación de todos los órganos gubernamentales.<sup>125</sup> A este respecto se está negociando un Memorándum de Entendimiento entre la Oficina del Auditor General y el Departamento de Auditoría Interna del Ministerio de

<sup>120</sup> Presentación *in situ* del Auditor General, pág. 9, *supra* nota 115.

<sup>121</sup> *Ídem*. Véase también Respuesta al Cuestionario, pág. 12, *supra* nota 4.

<sup>122</sup> Respuesta al Cuestionario, pág. 12, *supra* nota 4 y Presentación *in situ* del Auditor General, pág. 10, *ídem*.

<sup>123</sup> Respuesta al Cuestionario, *ídem*.

<sup>124</sup> Cifras halladas en el Resumen del Gasto Recurrente para cada ejercicio en el sitio *web* del Presupuesto Nacional ([National Budget](#).)

<sup>125</sup> Respuesta al Cuestionario, pág. 12, *supra* nota 4.

Finanzas; en él se expone un acuerdo para sus operaciones.<sup>126</sup> Durante la visita *in situ* se proporcionó una copia de ese proyecto de memorándum<sup>127</sup>

[127] Con respecto a mecanismos de control interno, el Estado analizado señaló que un Informe Confidencial Anual es una evaluación diseñada por el Servicio Público para registrar y el desempeño de cada uno de los empleados.<sup>128</sup> Esa evaluación también brinda a los empleados la oportunidad de dar a conocer sus preocupaciones, quejas y denuncias, y a sus supervisores la ocasión de hacer otro tanto.<sup>129</sup>

[128] Con respecto a mecanismos de rendición de cuentas, el Estado analizado señala que éstos incluyen la producción de informes al final de una auditoría, así como un marco cronológico para producir esos informes. También existe el requisito de documentar y dar cuenta adecuadamente del tiempo dedicado a todas las auditorías. Finalmente, el público puede obtener acceso al Informe Anual del Auditor General, una vez presentado a la Cámara Baja.<sup>130</sup>

### 3.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[129] El Departamento del Auditor General cuenta con un conjunto de disposiciones y de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 3.1 anterior de este informe. No obstante, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas.

[130] El Comité toma nota de que en la presentación efectuada por el Auditor General durante la visita *in situ* se mencionó la Ley de Administración Financiera y Auditoría, de 2010, como parte de los procedimientos documentados seguidos por la Oficina para cumplir sus tareas.<sup>131</sup> Además, el Auditor General estableció el marco cronológico que consta en esa ley para que se le remitan estados contables, y a su vez el plazo para que el Auditor General los examine, certifique y presente a la Cámara Baja.

[131] El Comité toma nota que la ley fue promulgada para modernizar la administración financiera pública y la auditoría en Las Bahamas.<sup>132</sup> Sin embargo, al parecer que el Reglamento Financiero correspondiente no ha sido sancionado. Este Reglamento es importante para dar más detalles sobre la administración, el control y la fiscalización de las finanzas públicas. Por ejemplo, como se señaló en la sección 3.1, el Departamento se basa en este Reglamento como un procedimiento documentado para la realización de sus tareas. El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 3.4.1 en la sección 3.4 del capítulo II del presente informe).

[132] Durante la visita *in situ* el Auditor General informó que necesita más personal para cumplir eficazmente sus funciones, observación que también figura en el Informe del Auditor General

<sup>126</sup> *Ídem*. Véase también Presentación *in situ* del Auditor General, pág. 13, *supra* nota 115.

<sup>127</sup> Memorándum de Entendimiento entre el Departamento del Auditor General y la Sección de Auditoría Interna del Ministerio de Finanzas, *supra* nota 62.

<sup>128</sup> Respuesta al Cuestionario, pág. 12, *supra* nota 4.

<sup>129</sup> *Ídem*.

<sup>130</sup> *Ídem*. Tras la visita *in situ* la Secretaría Técnica del MESICIC recibió una copia de los informes anuales correspondientes a los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, que están archivados en la Secretaría Técnica.

<sup>131</sup> Presentación *in situ* del Auditor General, pág. 10, *supra* nota 115.

<sup>132</sup> Véase [Ministerio de Finanzas: Enhancing Accountability and Transparency in Public Financial Administration](#), pág. 4.

correspondiente a 2012, en que se señala que “[l]a Oficina del Auditor General sigue operando con un número mínimo de funcionarios. Algunos se han jubilado y no han sido reemplazados.”<sup>133</sup>

[133] El Auditor General mencionó, sí, que se han dado ciertos pasos para atender ese problema. Por ejemplo, manifestó que el Departamento acababa de contratar a 9 nuevos funcionarios, 5 trabajadores a contrato y un pasante. Además señaló que se proporcionaron al Departamento \$500 000 para contratar funcionarios a contrato y que se está tratando de incrementar en 10 el número de funcionarios profesionales a los largo de los próximos 3 años.<sup>134</sup>

[134] El Comité también observa que al comparar la composición del personal que figuraba en los Informes del Auditor General correspondientes a 2011 y 2012 el plantel de funcionarios autorizados pasó de 61 a 78.<sup>135</sup> No obstante, el Comité constata con preocupación que el número de funcionarios empleados por el órgano de control en 2012 fue de 45, lo que implica que hay 33 cargos vacantes, cifra significativa que afecta a la labor de ese órgano de control. El Auditor General constató durante la visita *in situ* que desde la fecha de ese informe trabajan en el Departamento 39 personas, y que el Departamento perdió recientemente 4 contadores calificados, con lo cual quedan sólo 3 contadores calificados, incluido él mismo.

[135] El Comité toma nota de que la insuficiencia de personal puede limitar el alcance de las auditorías y agravar el riesgo de que en ellas no se detecten actividades fraudulentas, así como errores en las cuentas públicas. También puede dificultarse el cumplimiento, por el Departamento de Auditoría, de otros cometidos importantes, tales como exámenes de la economía, eficiencia y eficacia con que un departamento, autoridad u otro órgano haya usado recursos públicos para el cumplimiento de sus funciones.<sup>136</sup> El Comité constata además que el Departamento no está en condiciones de cumplir cometidos especiales de auditoría, ya que ellas las *tercerizan*, encomendándolas a empresas de contabilidad.<sup>137</sup>

[136] En virtud de lo que antecede, el Estado analizado debería considerar la posibilidad de asegurar que el Departamento del Auditor General disponga de suficientes recursos humanos para cumplir adecuadamente sus funciones. Al respecto, también debería considerar la posibilidad de adoptar las medidas que se requieran para asegurar que el Departamento disponga de los contadores calificados necesarios para el debido cumplimiento de su función. El Comité formulará las recomendaciones. (Véase las recomendaciones 3.4.2 y 3.4.3 en la sección 3.4 del capítulo II del presente informe).

[137] En relación con la cuestión de los recursos humanos, el Auditor General señaló que tenía dificultad para retener personal porque la remuneración del sector privado es más atractiva. Como ya se señaló, el Departamento está perdiendo personal y no está llenando oportunamente las vacantes.

[138] A ese respecto, el Auditor General prevé que se proporcione al Departamento financiamiento para llevar a cabo contrataciones aparte de la Comisión del Servicio Público. El Comité observa asimismo que en el Informe de 2013 de la Comisión Constitucional sobre Revisión de la Constitución

<sup>133</sup> Presentación *in situ* del Auditor General, pág. 15 *supra* nota 115 e Informe del Auditor General correspondiente a 2012, pág. 6, archivados en la Secretaría Técnica del MESICIC.

<sup>134</sup> Presentación *in situ* del Auditor General, pág. 16, *ídem*.

<sup>135</sup> Informe del Auditor General correspondiente a 2011, pág. 23, e Informe del Auditor General correspondiente a 2012, pág. 24, archivados en la Secretaría .

<sup>136</sup> Sección 29 de la Ley de Administración Financiera y Auditoría, 2010, *supra* nota 62.

<sup>137</sup> Véase la pág. 7 del Plan Estratégico Trienal de la Oficina del Auditor General para el período 2013 – 2015, [http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4\\_bhs.htm](http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4_bhs.htm)



de Las Bahamas se recomendó también que se faculte al Auditor General para designar y controlar a sus funcionarios, a fin de reforzar la independencia de ese órgano de control.<sup>138</sup>

[139] El Comité considera que si se amplía su autonomía con respecto a sus recursos humanos se puede dar un paso para que ese órgano de control esté en condiciones de brindar salarios más competitivos que permitan atraer y retener personal y así satisfacer las necesidades de recursos humanos de ese Departamento. El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 3.4.4 en la sección 3.4 del capítulo ii del presente informe).

[140] Sobre este tema, durante la visita *in situ* el Presidente del Comité de Contabilidad Pública observó que en deliberaciones entre el Comité de Contabilidad Pública y el Auditor General, se señaló que era difícil captar personal calificado, debido al financiamiento y a las remuneraciones ofrecidas.

[141] Con respecto al proceso presupuestario para el Departamento del Auditor General, se señaló que todos los proyectos de presupuesto han de tramitarse a través del Ministerio de Finanzas, siendo el Ministro además, el Primer Ministro, situación que según ha observado el Estado analizado puede afectar a la independencia del Auditor General. En el Informe de 2013 de la Comisión Constitucional para la Reforma de la Constitución de Las Bahamas se señala:<sup>139</sup>

[142] *“La Constitución intenta conferir al Auditor General plena independencia del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo asegurando sus plazos de prestación de servicios y haciéndolo inamovible a falta de un procedimiento judicial. El Artículo 136(5) dispone: “en el ejercicio de sus funciones...el Auditor General no estará sujeto a la dirección ni al control de ninguna otra persona o autoridad.” Ello bien puede ser así como principio constitucional, pero la realidad de la existencia de la Oficina del Auditor General es bastante diferente. Para comenzar, la Oficina depende del Ministerio de Finanzas para obtener un presupuesto operativo, y la Constitución deja la auditoría de la Oficina del Auditor General en manos del Ministro de Finanzas. Ambas situaciones suscitan significativas consecuencias en cuanto al grado de independencia que puede ejercer el Auditor General.”*

[143] El Auditor general, así como el Presidente del Comité de Contabilidad Pública, mencionaron durante la visita *in situ* que el proceso presupuestario plantea un problema al funcionamiento del Departamento, señalando que éste audita las cuentas del Ministerio de Finanzas y a la vez depende de esa entidad para obtener su presupuesto. Una propuesta formulada por el Auditor General consiste en remitir el presupuesto a una comisión de cuentas independiente o al Comité de Contabilidad Pública para que lo considere y luego se remita al Gabinete con miras a su aprobación, eliminándose así la necesidad de promover la aprobación por el Ministerio de Finanzas,<sup>140</sup> argumento del que hizo eco el Presidente del Comité de Contabilidad Pública durante la visita *in situ*. El Comité cree que el Estado analizado debería considerar la posibilidad de disponer que el Departamento del Auditor General presente su proyecto de presupuesto al Comité de Contabilidad Pública, y no a una entidad sujeta a una auditoría, con lo cual se reforzaría la independencia de ese órgano de control para el cumplimiento de su mandato. Para justificarlo el Auditor General mencionó una Resolución de las Naciones Unidas en que se hace hincapié en la importancia de una auditoría independiente para la

<sup>138</sup> Informe del Comité Constitucional de Revisión de la Constitución de Las Bahamas, págs. 198 y 200, *supra* nota 34.

<sup>139</sup> *Ídem.*, pág. 198.

<sup>140</sup> Presentación *in situ* del Auditor General, pág. 16, *supra* nota 115.

administración de su propio presupuesto, sin interferencia ni control del Poder Ejecutivo.<sup>141</sup> El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 3.4.5 en la sección 3.4 del capítulo ii del presente informe).

[144] Durante la visita *in situ* el Presidente del Comité de Contabilidad Pública señaló que el informe más reciente preparado y remitido al Presidente del Parlamento era el informe de 2011 y que aún no había sido dado a conocer el público, pues se requería la aprobación del Ministerio de Finanzas. En su reunión con los representantes del MESICIC el Auditor General señaló que el informe correspondiente a 2012 acababa de prepararse y presentarse. Se proporcionó a la Secretaría Técnica del MESICIC, tras la visita *in situ*, una copia de este informe.

[145] A este respecto, el Auditor General señaló que existe la obligación legal de que todos los estados de cuentas se presenten por el Tesorero dentro del término de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio, o sea el 30 de junio. Esas cuentas se transmiten luego al Auditor General, que las examina y certifica, y luego al Ministro de Finanzas para que pueda presentarlas a la Cámara Baja antes del 31 de diciembre siguiente al cierre del ejercicio financiero o bien, si dicha cámara no está en sesión, en cualquiera de los primeros 15 días siguientes al siguiente período de sesiones de la cámara.<sup>142</sup>

[146] El Comité observa, sin embargo, que aparece que los informes no son preparados por el Auditor General oportunamente cuando ha recibido los estados de cuentas. Por ejemplo, durante la visita *in situ* el Auditor General señaló que el último informe preparado y presentado por su oficina correspondía a 2012. En consecuencia al parecer el informe correspondiente al ejercicio de 2012/2013 aún no ha sido preparado y presentado, aunque el plazo para la entrega expiraba en diciembre de 2013, conforme al marco cronológico puesto de presente por el Auditor General durante la visita *in situ*.

[147] El Comité considera que el Auditor General debería cumplir con el plazo establecido por ley para la presentación de su informe antes del 31 de diciembre de un año determinado y también debería considerar asegurar que una vez que el informe se presenta a la Cámara Baja, debería estar disponible en su página web. Actualmente, el sitio tiene informes anuales hasta 2011, y no contiene del año 2012, una copia que se proporcionó a la Secretaría Técnica del MESICIC, tras la visita *in situ*. El Comité formulará recomendaciones. (Véanse las recomendaciones 3.4.6 y 3.4.7 en la sección 3.4 del capítulo ii del presente informe)

[148] En relación con los informes del estado de cuentas preparado y presentado por el Auditor General, durante la visita *in situ* se señaló que no todos los estados financieros son presentados puntualmente, como la requiere la ley, para que el Secretario Financiero pueda remitirlos al Auditor General para que los examine y certifique.<sup>143</sup> Tal situación puede retrasar el envío, por el Auditor General, del informe sobre el estado de cuentas del Gobierno. El Comité toma nota de que al parecer no se han establecido sanciones por omisión o demora en la presentación de un estado de cuentas, salvo quizá la convocatoria del Comité de Contabilidad Pública para el suministro de

<sup>141</sup> Resolución A/RES/66/209, “Promover la rendición de cuentas, la eficacia y la transparencia de la administración pública fortaleciendo las instituciones supremas de auditoría,” [http://www.un.org/en/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=A/RES/66/209](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/209). En esa resolución se reconoció la labor de la Organización Internacional de las Instituciones Supremas de Auditoría y su Declaración de México sobre Independencia de las Instituciones Supremas de Auditoría de 2007.

<sup>142</sup> Véase secciones 32 y 33 de la Ley de Administración Financiera y Auditoría, 2010, *supra* nota 62.

<sup>143</sup> *Ídem.*, sección 32.

explicaciones.<sup>144</sup> Ni la Constitución ni la Ley de Administración Financiera y Auditoría prevén sanción alguna por omisión de remitir al Tesorero un estado de cuentas dentro del plazo legal.

[149] El Estado analizado debería considerar la posibilidad de que el Tesorero o el Auditor General imponga las sanciones que se consideren apropiadas a las personas o entidades responsables del envío de esos estados, para alentar el cumplimiento. Además, el Auditor General debería también considerar la posibilidad de mencionar en los informes anuales a los ministerios, departamentos y órganos de Gobierno que no hayan presentado sus estados de cuentas. El Comité considera que hacer pública a los ministerios, departamentos o órganos de Gobierno la lista de los departamentos de Gobierno que no estén en situación de cumplimiento puede alentar a estos a cumplir su obligación. (Véanse las Recomendaciones 3.4.8 y 3.4.9 en la Sección 3.4 del Capítulo II del presente Informe)

[150] Se señala que durante la visita *in situ* un representante académico de *Civil Society Bahamas*, una organización de la sociedad civil, observó que la omisión de presentar el estado de cuentas no parece dar lugar a medida alguna.

[151] Además, un obstáculo a la labor del Departamento es la falta de acceso a documentos dentro de algunos departamentos de Gobierno y ministerios, lo que ha sido planteado en los Informes de Auditoría del Auditor General. Como se expresó en el Informe correspondiente a 2012:<sup>145</sup>

[152] “*Algunas autoridades públicas parecen no conocer la disposición de la Ley de Administración Financiera y Auditoría que faculta a la Oficina del Auditor General (OAG) a obtener acceso a todos los libros, registros, declaraciones e informes relacionados con cuentas públicas, lo que afecta a la labor de la OAG debido a la falta de colaboración de esas autoridades de diversos ministerios y departamentos.*”

[153] El Comité observa que ese requisito de brindar acceso a la información que mantienen departamentos y ministerios de Gobierno es además una competencia prevista en la Constitución de Las Bahamas, cuyo Artículo 136(3) establece que el Auditor General y el personal de su dependencia tienen derecho en todo momento a obtener acceso a todos los libros, registros, declaraciones e informes relacionados con las cuentas de los departamentos y ministerios.<sup>146</sup>

[154] El Comité toma nota, sin embargo, de que la Ley de Auditoría de la Administración Financiera no impone sanciones administrativas y/o penales a quienes no cumplan ese requisito constitucional y legal. El Comité considera que el Estado analizado debería considerar la posibilidad de imponer tales sanciones a quienes no brinden acceso a información y documentos de auditoría. El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 3.4.10 en la sección 3.4 del capítulo ii del presente informe).

---

<sup>144</sup> Durante la visita *in situ* el Auditor General señaló que los auditores visitan los departamentos pertinentes, recogen información y elaboran informes, que son examinados por el Comité de Contabilidad Pública y objeto de debate una vez presentados a la Cámara Baja. Además, el Comité de Contabilidad Pública puede luego formular preguntas a los órganos gubernamentales. Presentación *in situ* del Auditor General, pág. 5, *supra* nota 115. El Estado analizado señala, además, que el Auditor General accedió en 2015 a poner en marcha una campaña de información pública para dar a conocer a personas y organismos públicos las responsabilidades que les impone la Ley de Administración Financiera y Auditoría de 2010.

<sup>145</sup> Informe del Auditor General correspondiente a 2012, pág. 6, archivado en la Secretaría Técnica del MESICIC.

<sup>146</sup> Constitución de Las Bahamas, *supra* nota 3.

[155] El Comité observa que durante la visita *in situ* el Auditor General manifestó lo siguiente:<sup>147</sup>

[156] *“En caso de que se detecte una actividad fraudulenta la Oficina enviará un informe al Secretario Financiero y al Secretario Permanente del Ministerio o Departamento respectivo, junto con recomendaciones de que el asunto sea derivado a la Real Fuerza Policial de Las Bahamas o a la Oficina del Procurador General.”*

[157] No obstante, el Comité cree que la única base legal en virtud de la cual el Auditor General puede denunciar una irregularidad tal como una actividad fraudulenta es la que figura en la sección 36 de la Ley de Administración Financiera y Auditoría, que establece que si el Auditor General cree que se ha producido a) una irregularidad en la recaudación, custodia o gasto de dineros públicos o en la contabilidad de los mismos; b) una irregularidad en la recepción, custodia, emisión, venta, transferencia o entrega de depósitos de valor o en la contabilidad de los mismos, o c) cualesquiera pérdidas o daños infligidos a bienes públicos, y esa misma irregularidad, pérdida o daño no han sido denunciados al Ministro de Finanzas, el Auditor General debe hacerlo.

[158] A este respecto, el Estado analizado puede considerar la posibilidad de proporcionar al Auditor el fundamento legal para denunciar una irregularidad a otras autoridades competentes para la adopción de medidas ulteriores; por ejemplo a la Real Fuerza Policial de Las Bahamas o a la Oficina del Procurador General.<sup>148</sup> El Comité observa también que esto puede fortalecer aún más la independencia del Auditor General, ya que el marco jurídico actual dispone que el Auditor General debe poner en conocimiento del Ministro de Finanzas, que es además el Primer Ministro de Las Bahamas y determina el presupuesto de ese órgano de control, toda irregularidad detectada en las cuentas de ese mismo Ministerio. El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 3.4.11 en la sección 3.4 del capítulo ii del presente informe).

[159] El Comité toma nota de que el Comité de Contabilidad Pública es responsable de la supervisión de los asuntos financieros del Gobierno<sup>149</sup> y cumple un papel fundamental en el control de las finanzas públicas, como se expresa en el Informe de 2013 de la Comisión Constitucional para la Reforma de la Constitución de Las Bahamas:<sup>150</sup>

[160] *“El actual sistema de control de las finanzas públicas erigido por la Constitución y la legislación concibe un proceso que comience y finalice en el Parlamento, el cual puede describirse convenientemente en los siguientes términos: (i) el Parlamento debate y aprueba el proyecto de presupuesto anual; (ii) el Ministerio de Finanzas y el Tesorero supervisan el desembolso de fondos, junto con la Junta Central de Licitaciones; (iii) el Auditor General recibe estados financieros del Ministerio de Finanzas y realiza sus auditorías de diverso departamentos de Gobierno, y (iv) el Auditor General presenta sus informes al Parlamento (a través del Presidente de la Cámara Baja) para que sea examinado por el Comité de Contabilidad Pública y se debata en el Parlamento. No obstante, es evidente que la Constitución reconoce al Auditor General como el principal instrumento de control de las finanzas públicas y como el mecanismo a través del cual se ponen en conocimiento de la Cámara Baja eventuales irregularidades.”*

<sup>147</sup> Presentación *in situ* del Auditor General, pág. 14, *supra* nota 115. Véase también Respuesta al Cuestionario, pág. 27, *supra* nota 4.

<sup>148</sup> El Estado analizado señala que existen disposiciones pertinentes del Código Penal en esta materia, como el artículo 86 de la complicidad de un delito y el artículo 235 sobre la retención de los fondos públicos por un funcionario público, véase el Código Penal, [http://laws.bahamas.gov.bs/cms3/images/LEGISLATION/PRINCIPAL/1873/1873-0015/PenalCode\\_1.pdf](http://laws.bahamas.gov.bs/cms3/images/LEGISLATION/PRINCIPAL/1873/1873-0015/PenalCode_1.pdf)

<sup>149</sup> Véase [About the Parliament](#)

<sup>150</sup> Informe de 2013 de la Comisión Constitucional, pág. 197, *supra* nota 134.

[161] A este respecto, el Auditor General reiteró ese papel durante la visita *in situ*, señalando en su exposición que el Comité de Contabilidad Pública examina los informes presentados por el Departamento y que los mismos son objeto de debates adicionales una vez presentados a la Cámara Baja.<sup>151</sup>

[162] Pese al importante papel que cumple ese Comité, éste al parecer no se reúne regularmente. Durante la visita *in situ* se señaló que el Presidente del Comité de Contabilidad Pública observó que en el pasado se reunía en caso de crisis o cuando el público lo reclamaba, o antes de una elección. Sostuvo que quería que dicho Comité se reuniera semanalmente, pero que no había sido posible, por falta de *quórum*. El Comité toma nota de que conforme al Reglamento de la Cámara Baja el Comité de Contabilidad Pública está formado por cinco miembros, que el *quórum* requiere la presencia de la mayoría de los miembros, que en ese caso serían 3.<sup>152</sup>

[163] El Comité observa que el hecho de que el Comité de Contabilidad Pública no se reúna regularmente para examinar los informes del Departamento parece privar a Las Bahamas de un mecanismo de seguimiento de las recomendaciones formuladas por el Departamento sobre sus informes de auditoría y para convocar a las autoridades contables y otros funcionarios públicos pertinentes a explicar sus actividades de gestión de las finanzas y los recursos públicos que les han sido encomendadas. Como consecuencia, cabe la posibilidad de que sigan sin atenderse las recomendaciones del Departamento ni recaiga pronunciamiento alguno sobre las mismas, y que los autoridades públicos no sean llamados a rendir cuentas de sus actos, lo que el Auditor General deplora en sus informes:<sup>153</sup>

[164] *“Algunas autoridades públicos no son llamados a responsabilidad por sus actos, lo que da lugar al derroche de fondos públicos.*

[165] *El concepto de responsabilidad pública en general se interpreta como la obligación de dar cuenta del cumplimiento, por los autoridades/trabajadores públicos, de cometidos que se les hayan confiado. Cuando se hace efectiva la rendición de cuentas un organismo opera más eficiente, eficaz y económicamente, y el entorno es más apropiado para lograr un crecimiento positivo.”*

[166] El Comité ciertamente observa que durante la visita *in situ* el Auditor General manifestó que la Ley de Administración Financiera y Auditoría de 2010, así como el Reglamento Financiero,<sup>154</sup> establecen sanciones a los autoridades de servicios de contabilidad que no cumplan las recomendaciones contenidas en los informes del Departamento. El Comité constata, sin embargo, que la Ley de Administración Financiera y Auditoría de 2010 y el Reglamento Financiero, que fue derogada con la promulgación de la Ley, de parecen contener ninguna disposición que imponga a esos autoridades la obligación de cumplir las recomendaciones de los informes de auditoría ni establezcan sanción alguna por omisión de hacerlo.

<sup>151</sup> Presentación *in situ* del Auditor General, pág. 5, *supra* nota 115.

<sup>152</sup> Artículos 24 y 26 del Reglamento de la Cámara Baja, [http://laws.bahamas.gov.bs/cms36/images/LEGISLATION/SUBORDINATE/1962/1962-0012/RulesoftheHouseofAssembly\\_1.pdf](http://laws.bahamas.gov.bs/cms36/images/LEGISLATION/SUBORDINATE/1962/1962-0012/RulesoftheHouseofAssembly_1.pdf)

<sup>153</sup> Informe del Auditor General correspondiente a 2013, pág. 7. Esa observación aparece también, por ejemplo, en la pág. 6 del Informe del Auditor General correspondiente a 2012, y en la pág. 6 del Informe del Auditor General correspondiente a 2011. Esos informes están archivados en la Secretaría Técnica del MESICIC.

<sup>154</sup> Reglamento Financiero. [http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4\\_bhs.htm](http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4_bhs.htm)

[167] El Comité considera que dada la labor que lleva a cabo el Departamento es importante para el Estado analizado considerar la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para asegurar la implementación y aplicación de un mecanismo que asegure el adecuado seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Departamento. El Comité formulará recomendaciones. (Véanse las recomendaciones 3.4.12 y 3.4.13 en la sección 3.4 del capítulo ii del presente informe).

[168] El Comité observa que una de las funciones importantes del Departamento del Auditor General consiste en detectar irregularidades durante la realización de una auditoría, cuando informa al Ministro de Finanzas. A este respecto, la Ley de Administración Financiera y Auditoría, 2010, dispone que quien sea o haya sido autoridad pública<sup>155</sup> y al parecer a) haya faltado a su obligación de recaudar dineros adeudados al Gobierno, b) sea responsable de cualquier pago impropio de fondos públicos o de cualquier pago que no cuente con el debido respaldo documental, o c) sea responsable de cualquier falta o de la pérdida o destrucción de dineros públicos, sellos, títulos valores, instrumentos de depósito de valor u otros bienes públicos.<sup>156</sup> En ese caso el Secretario Financiero puede imponer a la autoridad la obligación de pagar ese recargo, o un monto menor, de la suma carente del debido respaldo, de la falta, la pérdida o el valor de los bienes destruidos, según corresponda, si dentro de determinado plazo no proporcione una explicación satisfactoria. La Ley dispone además que no puede aplicarse un recargo tras la expiración de un plazo de siete años a partir de la fecha del acto cuestionado y que el Secretario Financiero debe notificar al Auditor General y a la autoridad contable principal del departamento de que se trate todo recargo dispuesto conforme a la Ley. La autoridad contable principal, una vez notificado, debe intimar a la persona obligada el pago del recargo y cobrarle esa suma.

[169] El Comité toma nota de que no resulta claro sobre qué base el Tesorero emite ese informe dirigido al Secretario Financiero con respecto a la imposición de un recargo. Conforme al marco jurídico parecería que es el Auditor General, a través de sus informes, el que está facultado para formular una recomendación sobre imposición de recargos. En virtud de lo que antecede, el Estado analizado debería autorizar al Auditor General a formular recomendaciones de imposición de recargos, sobre la base de las auditorías que realice. El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 3.4.14 en la sección 3.4 del capítulo ii del presente informe).

[170] Además, si por cualquier razón el Secretario Financiero impone un recargo menor que el total de la pérdida, debería tener la obligación de que lo disponga por escrito, enunciando las razones respectivas. (Véanse las recomendaciones 3.4.15 en la sección 3.4 del capítulo ii del presente informe).

[171] El Comité observa que una de las razones por las que se introdujo la Ley de Administración Financiera y Auditoría de 2010 consistió en modernizar la administración financiera y el proceso de auditoría en Las Bahamas, haciendo posible la implementación de tecnología moderna de información en el sistema financiero público.<sup>157</sup> Como parte de ese proceso se señaló que se realizaría una cuidadosa evaluación de las necesidades de los usuarios, incluidas las del Departamento del Auditor General, lo que sería seguido por una decisión de seguimiento sobre la tecnología de

<sup>155</sup> Por definición, se trata de cualquier persona empleada en el servicio público, conforme a la sección 2(1) de la Ley de Administración Financiera y Auditoría, 2010 *supra* 57.

<sup>156</sup> *Ídem.*, sección 27.

<sup>157</sup> Véase Ministerio de Finanzas: Mejoras en cuanto a Rendición de Cuentas y Transparencia en la Administración Financiera Pública, pág. 5, *supra* nota 122.

información y el sistema de informática más adecuado para las necesidades de Las Bahamas.<sup>158</sup> A este respecto, el Comité toma nota de que en los Informes del Auditor General, una de las recomendaciones que éste ha efectuado consiste en la implementación del Sistema Internacional de Gestión Financiera (SIGF), que ayudaría al Departamento a atender su creciente carga de trabajo y mejorar las prácticas de registro de información, así como a producir reconciliaciones bancarias automáticas.<sup>159</sup> El Auditor General señala además:

[172] “Existe abundante prueba de respaldo del uso del SIGF, como principal componente de reformas financieras encaminadas a promover la eficiencia, la seguridad de la gestión de datos y una exhaustiva información financiera”.

[173] El Comité considera que el Estado analizado debería considerar la posibilidad de implementar tecnología moderna de información, tal como el SIGF, para ayudar a modernizar el proceso de administración y auditoría financiera en Las Bahamas. El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 3.4.16 en la sección 3.4 del capítulo ii del presente informe).

[174] Finalmente, el Comité toma nota que la sección 35 de la Ley de Administración Financiera y Auditoría, de 2010 establece una unidad de auditoría interna en el Ministerio de Finanzas, y que el Secretario Financiero podrá también establecer estas unidades dentro de los ministerios y departamentos del Estado. El Comité considera que el Estado analizado debería comenzar a establecer dichas unidades por regla general, en lugar de dejar a la discreción del Secretario Financiero, ya que ayudan en fortalecer la eficiencia, la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión de los recursos del gobierno y por lo tanto, el desempeño del Departamento del Auditor General.<sup>160</sup> El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 3.4.17 en la sección 3.4 del capítulo ii del presente informe).

### **3.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas**

[175] El Comité toma nota de que el resultado de las auditorías realizada por el Departamento figura en los informes a anuales del mismo.<sup>161</sup> En esos documentos se proporciona información detallada sobre las cuentas públicas del Estado analizado.

[176] El Comité observa, sin embargo, que durante la visita *in situ* el Auditor General manifestó que las auditorías del estado de cuentas se remiten también a los diferentes departamentos, que podrían destacar conclusiones sustanciales, tales como la eventual detección de potenciales actividades fraudulentas, tal como se señala en la respuesta al cuestionario, las cuales presumiblemente se remitirán a la Real Fuerza Policial de Las Bahamas o a la Oficina del Procurador General para que adopten medidas adicionales.<sup>162</sup> No obstante, no teniendo a su disposición otra información es difícil determinar qué resultados arroja ese proceso de derivación. En su respuesta al cuestionario el Estado analizado señaló que estaba compilando el número total de investigaciones en curso, pero no se ha

---

<sup>158</sup> *Ídem*.

<sup>159</sup> Véase, por ejemplo, el Informe del Auditor General correspondiente a 2012, págs. 7 – 8, archivado en la Secretaría Técnica del MESICIC.

<sup>160</sup> El Estado analizado señala que el Auditor General ha accedido a establecer sendos departamentos de auditoría interna para todos los ministerios y departamentos, para que auditen anualmente a los organismos pertinentes.

<sup>161</sup> Tras la visita *in situ* los Informes de Auditoría correspondientes a 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 fueron proporcionados a la Secretaría Técnica del MESICIC y están archivados.

<sup>162</sup> Respuesta al Cuestionario, pág. 27, *supra* nota 4.

suministrado esa información.<sup>163</sup> El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 3.4.18 en la sección 3.4 del capítulo ii del presente informe).

[177] Además, el Comité considera que el Estado analizado puede comenzar a proporcionar, en sus informes, estadísticas sobre irregularidades detectadas, tales como información sobre pagos impropios o no aprobados, o similares, clasificados por ministerio, departamento u organismo. Además, el Estado analizado debería considerar la posibilidad de mantener estadísticas de los montos cuya restitución al Estado se haya ordenado en esos casos y el monto realmente recibido. Como se señaló en la sección 3.3, se aplican recargos a una autoridad por omisión de cobrar cualquier suma adecuada al Gobierno; por pagos impropios o por fallas que den lugar a pérdidas o destrucción de bienes públicos. En esos casos el Auditor General debería considerar la posibilidad de identificar en los informes el ministerio, departamento u organismo al que se haya aplicado el recargo dispuesto por el Secretario Financiero, y el monto recibido. A través de la inclusión de esa información en sus informes anuales y por lo tanto el acceso público a la misma, se puede alentar a la entidad a la que se adeude un recargo a cumplir su obligación. El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 3.4.19 en la sección 3.4 del capítulo ii del presente informe).

[178] El Comité considera útil, asimismo, que el Auditor General dé cuenta del cumplimiento, por los departamentos y ministerios de Gobierno, de las recomendaciones emitidas por el Auditor General en sus informes de auditoría. El Comité formulará recomendaciones. (Véase la recomendación 3.4.20 en la sección 3.4 del capítulo ii del presente informe).

[179] El Comité observa también que el Auditor General puede ampliar la información proporcionada en la sección referente a administración y personal de los informes. Ésta consiste actualmente en designaciones, jubilaciones y traslados realizados durante el año, y en el suministro de una lista de actividades y reuniones de capacitación. También se proporciona información sobre sus gastos para el ejercicio, y sobre el número de funcionarios. El Comité considera que el Departamento del Auditor General debería también proporcionar información adicional sobre su desempeño y funcionamiento, lo que puede hacer las veces de un plan y programa de trabajo para un ejercicio, indicando cuestiones tales como los objetivos y las metas alcanzados durante el ejercicio por cada división del Departamento. El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 3.4.21 en la sección 3.4 del capítulo ii del presente informe)

[180] Finalmente, con fines de transparencia y rendición de cuentas, el Estado analizado debería también considerar la posibilidad de hacer públicos los resultados de las auditorías de sus propias cuentas, como lo prevé el Artículo 136(6) de la Constitución. Esta información debería estar disponible en sus informes anuales y en línea. El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 3.4.22 en la sección 3.4 del capítulo ii del presente informe)

### **3.4. Conclusiones y recomendaciones**

[181] Con base en el análisis integral realizado con respecto al Departamento del Auditor General en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

**[182] Las Bahamas ha considerado y adoptado medidas encaminadas a mantener y fortalecer el Departamento del Auditor General como órgano de control tal como se describe en la Sección 3 del Capítulo II del presente Informe.**

---

<sup>163</sup> *Ídem.*



[183] vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere la siguientes recomendaciones:

- 3.4.1 Cumplir con la Ley de Administración Financiera y Auditoría de 2010, al promulgar el Reglamento Financiero. (Véase la Sección 3.2. del Capítulo II del presente Informe)
- 3.4.2 Asegurar que el Departamento del Auditor General disponga de los recursos humanos necesarios para el cumplimiento de su función, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos. (Véase la Sección 3.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 3.4.3 Adoptar las medidas que se requieran para asegurar que el Departamento del Auditor General disponga de los contadores calificados necesarios para el debido cumplimiento de su función, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos. (Véase la Sección 3.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 3.4.4 Proporcionar al Departamento del Auditor General mayor autonomía en materia de contratación de personal. (Véase la Sección 3.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 3.4.5 Proporcionar al Departamento del Auditor General una mayor autonomía para la preparación y presentación de su presupuesto, para que ello pueda realizarse a través del Comité de Contabilidad Pública. (Véase la Sección 3.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 3.4.6 Cumplir con el plazo establecido por ley para la presentación de un informe anual por el Departamento del Auditor General. (Véase la Sección 3.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 3.4.7 Publicar en línea todos los informes preparados por el Departamento del Auditor General para que estén accesibles fácilmente para el público en general. (Véase la Sección 3.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 3.4.8 Otorgar al Auditor General o Tesorero, según se considere apropiado, la competencia necesaria para imponer sanciones a los organismos públicos que falten a su obligación de presentar sus estados de cuentas correspondientes al ejercicio, así como a los funcionarios de esas entidades y órganos que sean responsables de prepararlos y presentarlos en nombre de las mismas. (Véase la Sección 3.2. del Capítulo II del presente Informe)
- 3.4.9 Publicar la lista de los ministerios, departamentos y órganos de Gobierno que no presenten sus estados financieros correspondientes al ejercicio dentro del plazo del ley, en los informes anuales del Auditor General. (Véase la Sección 3.2 del Capítulo II del presente Informe)

- 3.4.10 Considerar la posibilidad de establecer sanciones administrativas y/o penales que se consideren apropiadas, aplicables a los organismos públicos que falten a su obligación de dar acceso al Departamento del Auditor General información pertinente, tal como sus libros, registros, declaraciones e informes, así como a los funcionarios de esos organismos y órganos que sean responsables de proporcionar esa información. (Véase la Sección 3.2. del Capítulo II del presente Informe)
- 3.4.11 Considerar la posibilidad de proporcionar al Auditor General la base legal para denunciar directamente una irregularidad, tal como una actividad fraudulenta, a autoridades competentes, tales como la Real Fuerza Policial de Las Bahamas y la Oficina del Procurador General. (Véase la Sección 3.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 3.4.12 Adoptar las medidas necesarias para asegurar que el Comité de Contabilidad Pública se reúna periódicamente, para que pueda realizarse el adecuado seguimiento de las recomendaciones formuladas por el Departamento del Auditor General. (Véase la Sección 3.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 3.4.13 Adoptar las medidas necesarias para asegurar el adecuado cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Departamento del Auditor General. (Véase la Sección 3.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 3.4.14 Autorizar al Auditor General a formular recomendaciones para la imposición de recargos basados en las auditorías que realice. (Véase la Sección 3.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 3.4.15 Disponer que el Secretario Financiero exponga por escrito el fundamento de una decisión de imponer un recargo menor que el recomendado por el Tesorero. (Véase la Sección 3.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 3.4.16 Implementar tecnología de información moderna, tal como un Sistema Integrado de Administración Financiera, para contribuir a modernizar el proceso de administración financiera y auditoría en Las Bahamas. (Véase la Sección 3.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 3.4.17 Establecer unidades de auditorías internas dentro de los ministerios y departamentos del Estado. (Véase la Sección 3.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 3.4.18 Establecer, cuando corresponda, un mecanismo de intercambio de información para el Departamento del Auditor General, para que éste reciba formalmente retroinformación sobre el resultado de las actuaciones referentes a irregularidades puestas en conocimiento de la Real Fuerza Policial de Las Bahamas y de la Oficina del Procurador General. (Véase la Sección 3.3 del Capítulo II del presente Informe)

- 3.4.19 Mantener, a través del Departamento del Auditor General, información estadística sobre los recargos recomendados por el Tesorero, el monto cuya devolución se haya dispuesto, el monto que el Secretario Financiero haya ordenado cobrar, así como las sumas realmente percibidas, para identificar problemas y recomendar medidas correctivas, en caso que corresponda. (Véase la Sección 3.3 del Capítulo II del presente Informe)
- 3.4.20 Informar sobre el nivel de cumplimiento, por los departamentos y ministerios de Gobierno, de las recomendaciones emitidas por el Auditor General en sus informes de auditoría. (Véase la Sección 3.3 del Capítulo II del presente Informe)
- 3.4.21 Publicar un informe anual sobre el desempeño y las operaciones del Departamento del Auditor General, que incluya los objetivos y metas alcanzados correspondientes al ejercicio. (Véase la Sección 3.3 del Capítulo II del presente Informe)
- 3.4.22 Dar a publicidad al resultado de las auditorías de sus propias cuentas que se hayan llevado a cabo. (Véase la Sección 3.3 del Capítulo II del presente Informe)

#### **4. UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA**

##### **4.1. Existencia de un marco jurídico y/o de otras medidas**

[184] La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[185] Con respecto a sus objetivos y funciones, la sección 4(1) de la Ley de la Unidad de Inteligencia Financiera dispone que éste es el organismo encargado de recibir, analizar, obtener y difundir información que guarde o pueda guardar relación con los procedimientos que han de seguirse en relación con las transgresiones especificadas en el Segundo Anexo de dicha ley, que son las previstas en la Ley sobre el Producto del Delito y la Ley de Lucha contra el Terrorismo.<sup>164</sup> A este respecto la Ley del Producto del Delito, que confiere a la Policía, el Servicio de Aduanas y los tribunales de justicia potestades relacionadas con lavado de dinero, búsqueda, incautación y confiscación del producto del delito, dispone que entre las conductas delictivas comprendidas en las disposiciones de esa ley figuran las previstas en la Ley de Prevención del Soborno.<sup>165</sup> A este respecto la sección 14 de la Ley de información sobre Transacciones Financieras<sup>166</sup> dispone que las instituciones que sepan, sospechen o tengan fundamentos razonables para sospechar que una transacción realizada o cuya realización se proponga involucra el producto de un acto delictivo definido en la Ley sobre el Producto del Delito, o la tentativa de eludir la aplicación de alguna disposición de esa ley, deben denunciarlo a la UIF.

[186] La Ley sobre la Unidad de Inteligencia Financiera también dispone que la UIF será competente, entre otras cosas, para recibir todas las denuncias o informaciones requeridas por la Ley sobre el Producto del Delito; cuando reciba, de una UIF o de un organismo de aplicación de leyes del

<sup>164</sup> Ley sobre la Unidad de Inteligencia Financiera, [http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4\\_bhs.htm](http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4_bhs.htm)

<sup>165</sup> Véase la sección 3 y el Anexo Único de la Ley sobre el Producto del Delito, [http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4\\_bhs.htm](http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4_bhs.htm)

<sup>166</sup> Ley de información sobre Transacciones Financieras, [http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3\\_bhs.htm](http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_bhs.htm)

extranjero, incluido el Comisionado de Policía de Las Bahamas, una orden de congelación de la cuenta bancaria de cualquier persona por un plazo de no más de cinco días debe exigir la presentación de información, con sujeción al privilegio profesional legal; retener por un mínimo de cinco años un registro de toda la información que reciba; proporcionar información a la Comisión de Policía cuando la información pueda estar relacionada con la perpetración de un delito previsto en el Segundo Anexo de la Ley; proporcionar información relacionada con la perpetración de un delito previsto en el Segundo Anexo a cualquier UIF del extranjero; informar al público y a las entidades financieras y comerciales sus obligaciones de detectar, prevenir y disuadir de cometer los delitos previstos en el Segundo Anexo de la Ley.<sup>167</sup>

[187] Con respecto a autonomía para el cumplimiento de sus funciones, en su presentación los representantes de la UIF mencionaron durante la visita *in situ* la sección 4(1) de la Ley de la Unidad de Inteligencia Financiera, que dispone que la UIF es la encargada de recibir, analizar, obtener y difundir información sobre el producto del delito.<sup>168</sup> También citaron la sección 3(1) de la Ley como mecanismo de salvaguardia de su independencia operativa, que establece que la UIF debe tener sucesión perpetua y un sello común con potestades para celebrar contratos y hacer todo aquello que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones. Además, en la presentación realizada por dicho órgano de control durante la visita *in situ* se expresó lo siguiente:<sup>169</sup>

[188] *“Corresponde señalar que ni el Ministro ni ninguna otra persona o entidad están facultados para obligar o exigir información de inteligencia, recibir, analizar o difundir ITS [Informes sobre Transacciones Sospechosas] o cualquier otra información recibida por la UIF como resultado de un mandato legal. Por otra parte, la UIF no tiene la obligación legal ni de otro género de proporcionar al Ministro o a cualquier otra persona o entidad ninguna información de inteligencia, información operativa o informes sobre transacciones sospechosas recibidas, analizadas o difundidas, ni ninguna otra información, en cualquier forma, obtenida como resultado de la labor de la . UIF.”*

[189] Con respecto a la manera en la que se adopta sus decisiones, el Estado analizado, en su respuesta al cuestionario, señala que las decisiones del Director de la UIF, dependen de la naturaleza del informe de transacciones sospechosas recibidos y el proceso analítico resultante, y no en cualquier individuo o entidad fuera de la UIF.<sup>170</sup>

[190] Con respecto al personal que integra la UIF, la sección 3(2) de la Ley de la Unidad de Inteligencia Financiera dispone que el Ministro de Finanzas designa al Director, que es el oficial ejecutivo jefe y es responsable de la administración y operación cotidianas de la UIF. El Primer Anexo de la referida Ley dispone además que el Director se mantiene y cesa en su cargo de acuerdo con las disposiciones de su nombramiento, y puede ser reelegido. Ese nombramiento no puede ser superar los cinco años. Dicho Anexo establece también que el Director no puede ocupar ningún otro cargo o empleo, sea o no remunerado, sin la previa aprobación del Ministro (véase el Anexo 2(1) y que con sujeción a lo dispuesto en el apartado (1) de este párrafo, su sucesor en el cargo de Director no puede ser un miembro de ninguna de las cámaras del Parlamento, una autoridad pública ni un director, autoridad o empleado de ninguna institución financiera ni tener un interés de control en la misma. Además, el Ministro de Finanzas puede declarar vacante el cargo de Director si ha

<sup>167</sup> Ley de la Unidad de Inteligencia Financiera, sección 4(2), *supra* nota 164.

<sup>168</sup> Presentación *in situ* de la Unidad de Inteligencia Financiera, pág. 8, [http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4\\_bhs.htm](http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4_bhs.htm)

<sup>169</sup> *Idem.*, pág. 10.

<sup>170</sup> Respuesta al Cuestionario, pág. 10, *supra* nota 4.

comprobado que el Director ha incurrido en quiebra o celebrado un concordato con sus acreedores, está incapacitado por enfermedad física o mental o por otro motivo no está en condiciones o está inhabilitado para desempeñar las funciones de Director.

[191] Con respecto a los altos funcionarios de la UIF, la sección 3(2) también dispone que la Unidad tendrá un asesor letrado, un contador público, consultores dotados de calificaciones y experiencia apropiadas, cierto número de oficiales de Policía designados por el Comisionado de Policía a recomendación del Director, y otros funcionarios que el Director considere necesarios. En cuanto al Director, los titulares de los cargos de asesor jurídico y abogado, contador público y consultores son provistos por el Ministro de Finanzas; si bien el Director está facultado para contratar, otros altos funcionarios en consulta con dicho Ministro.<sup>171</sup> Además, los altos oficiales de Policía son designados por el Comisionado de Policía a la UIF, previa recomendación del Director. Esos altos funcionarios son responsables ante el Director.

[192] Otros funcionarios, distintos a los antes mencionados, son designados a través de un proceso de anuncios, y su selección se lleva a cabo a través de la Real Fuerza Policial de Las Bahamas y de entrevistas.<sup>172</sup> Calificaciones académicas, experiencia anterior en el cargo y aptitud del candidato para desempeñarse en la posición anunciada son algunos de los requisitos necesarios.<sup>173</sup> Aparte del Director, todos los funcionarios están sujetos a las normas y los procedimientos disciplinarios contenidos en el Manual de Personal de la UIF.<sup>174</sup>

[193] Con respecto a la existencia de manuales o documentos para el desempeño de sus tareas y la descripción de sus funciones, el Estado analizado proporcionó un Reglamento de Personal de la UIF, que contiene disposiciones sobre reclutamiento, selección y designación, normas disciplinarias y normas de conducta.<sup>175</sup> Además, la UIF ha producido las Directrices sobre Transacciones Sospechosas relacionadas con Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo, que proporciona información sobre los procedimientos que han de seguirse para la labor de la UIF.<sup>176</sup> El Estado analizado deja constancia además, en su respuesta al cuestionario, que las medidas de fortalecimiento institucional o mejoras de calidad implementadas y la implementación de sistemas de tecnologías modernas para facilitar la labor de la UIF son delineadas en las agendas semanales de las reuniones del Director con la administración y el personal.<sup>177</sup>

[194] Con respecto a capacitación, en su respuesta al cuestionario el Estado analizado señaló lo siguiente:<sup>178</sup>

[195] *“Los altos funcionarios se ven beneficiados por cierto número de iniciativas de capacitación en la esfera local y en la internacional, en anti lavado de activos, lucha contra el financiamiento del terrorismo, anticorrupción y confidencialidad, tecnología de información, suficiencia en materia de*

<sup>171</sup> *Ídem.*, pág. 16.

<sup>172</sup> *Ídem.* Véase también Presentación *in situ* de la Unidad de Inteligencia Financiera, pág. 12, *supra* nota 168.

<sup>173</sup> *Ídem.* Véase también UIF Staff Regulations, Capítulo 3, Recruitment, Selection & Appointment, [http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4\\_bhs.htm](http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4_bhs.htm)

<sup>174</sup> Reglamento de Personal de la UIF, Capítulo 4, Normas Disciplinarias, *ídem.* Véase también Capítulo 8, Normas de Conducta.

<sup>175</sup> *Ídem.*

<sup>176</sup> [Suspicious Transactions Guidelines relating to the Prevention of Money Laundering and the Financing of Terrorism](#)

<sup>177</sup> Respuesta al Cuestionario, pág. 17, *supra* nota 4.

<sup>178</sup> *Ídem.*, pág. 16.

*contabilidad, análisis y otras esferas de experiencia técnica, que también están relacionadas con el funcionamiento de la UIF.”*

[196] Además, durante la visita *in situ* los representantes de la UIF manifestaron que existe un programa permanente de capacitación y que el personal participa en seminarios y talleres en las esferas local e internacional.<sup>179</sup> Entre las instituciones que proporcionaron capacitación figuran las Unidades de Inteligencia Financiera del Grupo Egmont, el Grupo de Acción Financiera del Caribe, *Offshore Alert*, el Grupo de Trabajo Multidisciplinario Antidrogas, *Money Laundering Alert*, la Reunión del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos, la Conferencia Anual del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos, la Conferencia Internacional Anual de ACAM sobre Lavado de Activos, la Conferencia Forense Nacional de la AICPA, una de las instituciones que proporcionaron capacitación. Entre las instituciones que proporcionaron capacitación figuran el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera del Caribe.<sup>180</sup>

[197] Además, durante la visita *in situ* los representantes de la UIF manifestaron que ésta proporciona también capacitación a instituciones financieras y otras entidades en todas partes de Las Bahamas en actividades anti lavado de dinero y lucha contra el financiamiento del terrorismo (AML/CTF) y capacitación y alerta para miembros de la Real Fuerza Policial de Las Bahamas a través de su colegio de capacitación.<sup>181</sup>

[198] Con respecto a la manera en que se proporciona información al público en general sobre sus objetivos y funciones, el Estado analizado, en su respuesta al cuestionario, señala:<sup>182</sup>

[199] “[El] sitio web de la UIF, [www.bahamas.gov.bs/fiu](http://www.bahamas.gov.bs/fiu), así como el Informe Anual y las directrices de 2007 sobre transacciones sospechas publicados por la UIF, sus anuncios públicos por medios impresos, las conferencias regularmente dictadas para el sector financiero y otros grupos, permiten a la UIF informar regularmente al público en general sobre su funcionamiento.”

[200] El sitio web dispone también de un vínculo en que se establece la manera en que puede formularse una denuncia sobre una transacción sospechosa, estableciendo el proceso y la manera de ponerse en contacto con la UIF.<sup>183</sup>

[201] Con respecto al mecanismo de control interno y manejo de quejas, reclamaciones o denuncias relacionadas con búsqueda de sus objetivos y el desempeño del personal, el Estado analizado señala en su respuesta al cuestionario que la sección 4(2)(c) de la Ley de la Unidad de Inteligencia Financiera dispone que la persona perjudicada puede impugnar a través de un juez en despacho una orden de la UIF de congelar la cuenta bancaria de una persona por un período de no más de cinco días.<sup>184</sup> Además, durante la visita *in situ* los representantes de la UIF manifestaron que el Subdirector y el equipo de la Administración de la Unidad utilizan la Ley de la Unidad de Inteligencia Financiera, el Manual de Empleados o cualquier otro medio disponible para asegurar el mantenimiento de los controles internos.<sup>185</sup> A este respecto, el Manual de Empleados dispone sanciones que van desde

<sup>179</sup> Presentación *in situ* de la Unidad de Inteligencia Financiera, pág. 29, *supra* nota 168.

<sup>180</sup> *Ídem*.

<sup>181</sup> *Ídem.*, pág. 30.

<sup>182</sup> Respuesta al Cuestionario, pág. 17, *supra* nota 4.

<sup>183</sup> [Reporting Suspicious Financial Transactions](#)

<sup>184</sup> Respuesta al Cuestionario, pág. 17, *supra* nota 4.

<sup>185</sup> Presentación *in situ* de la Unidad de Inteligencia Financiera, pág. 23, *supra* nota 168

apercibimiento o reprimenda por infracciones disciplinarias menores hasta destitución por infracciones graves.<sup>186</sup>

[202] Con respecto a la manera en que se aseguran los recursos presupuestarios necesarios para sus operaciones, la sección 11 de la Ley de la Unidad de Inteligencia Financiera dispone que los fondos y recursos de la UIF consistirán en las sumas que de cuando en cuando le proporcione el Parlamento. El proceso presupuestario fue descrito en estos términos durante la visita *in situ*:<sup>187</sup>

[203] “*Las estimaciones presupuestarias para la UIF son preparadas por el Director de la Unidad como Oficial Contable Jefe. Éste cuenta con la asistencia del Subdirector y del Oficial Financiero, quien es un Contador Público Certificado. También se obtiene información de gerentes y de funcionarios pertinentes. Al calcular el presupuesto anual y las necesidades esenciales de la UIF, los emolumentos del personal, incluidos los nuevos contratados, el gasto de capital propuesto, las tendencias anteriores, el costo fijo, como el correspondiente a renta y otras variables, las necesidades de capacitación propuestas, locales e internacionales, las promociones/la reclasificación propuestas, la adquisición de recursos humanos y otros recursos adicionales cuando se necesitan, junto con otras cuestiones importantes, son todos rubros que se tienen en cuenta. El Oficial Financiero es responsable de compilar los datos de la estimación presupuestaria para su examen final por el Director. Una vez aprobada, la estimación es presentada al Ministerio de Finanzas con miras a su aprobación.*”

[204] Además, durante la visita *in situ* los representantes de la UIF proporcionaron la siguiente información con respecto a su presupuesto:<sup>188</sup>

<b>Ejercicio</b>	<b>Presupuesto (en dólares de Las Bahamas)</b>
2014/2015	1 150 000
2013/2014	1 000 000
2012/2013	880 000
2011/2012	900 000
2010/2011	700 000
2009/2010	1 513 206

[205] En lo referente a mecanismos de coordinación, el Estado analizado, en su respuesta al cuestionario, señala que la UIF se reúne regularmente con el Grupo de Reguladores de Servicios Financieros (GRSF), que brinda asistencia a la UIF y a los reguladores en materia de coordinación de programas de AML/CFT para Las Bahamas.<sup>189</sup> Además, la UIF trabaja en estrecha relación con el Grupo de Trabajo de Las Bahamas, presidido por el Procurador General e integrado además por diversos interesados de organismos judiciales, de aplicación de leyes y reguladores. La UIF se encarga de examinar y recomendar enmiendas de leyes que permiten a Las Bahamas estar en situación de cumplimiento de las recomendaciones revisadas el Grupo de Acción Financiera.

<sup>186</sup> *Ídem.*, pág. 24. Véase también el Reglamento de Personal de la UIF, *supra* nota 173.

<sup>187</sup> *Ídem.*, pág. 15.

<sup>188</sup> *Ídem.*, pág. 16.

<sup>189</sup> Respuesta al Cuestionario, pág. 17, *supra* nota 4. Véase también Presentación *in situ* de la Unidad de Inteligencia Financiera, pág. 18, *supra* nota 168.

[206] Además, el Estado analizado señaló durante la visita *in situ* que la sección 4(2)(f) de la Ley de la Unidad de Inteligencia Financiera dispone que la UIF proporcione información, sujeta a las condiciones que determine el Director, al Comisionado de Policía cuando la información pueda estar relacionada con la comisión de un delito especificado en el Segundo Anexo de dicha Ley, incluidos los actos de corrupción.<sup>190</sup> Los representantes señalaron también lo siguiente en una presentación expuesta durante la visita *in situ*:<sup>191</sup>

[207] “La UIF puede también solicitar información a otros órganos de control, incluidos la Real Fuerza Policial de Las Bahamas, el Departamento de Aduana de Las Bahamas, el Departamento de Inmigración de Las Bahamas y otras entidades de aplicación de leyes, cuando sea necesario. La UIF puede también solicitar información y de coordinar sus labro con la de todos los organismos reguladores y otras entidades importantes en Las Bahamas, incluida la Comisión de Valores de Las Bahamas, la Comisión de Cumplimiento, la Comisión de Difusión Pública, el Departamento del Auditor General, la Comisión de Seguros de Las Bahamas, la Junta de Juegos de Azar, el Banco Central de Las Bahamas, la Oficina del Procurador General y otros importantes organismos públicos.”

[208] Con respecto a mecanismos de rendición de cuentas, el Estado analizado señala que la sección 4(2)(c) de la Ley de la Unidad de Inteligencia Financiera dispone que una persona perjudicada puede impugnar a través de un juez en despacho, una orden de la UIF de congelamiento de la cuenta bancaria de una persona por no más de cinco días.<sup>192</sup> Además, durante la visita *in situ* los representantes manifestaron que otro mecanismo de responsabilidad es el informe anual que debe prepararse conforme a la sección 10 de la Ley de la Unidad de Inteligencia Financiera. Dicho informe contiene información sobre las funciones de la UIF, una definición de lavado de dinero y otros actos delictivos, el número de transacciones sospechosas y otros informes recibidos, analizados y difundidos, asistencia internacional solicitada y recibida, capacitación recibida, capacitación proporcionada a instituciones financieras e informes sobre tipologías.<sup>193</sup>

[209] Además, la sección 13 de la Ley de la Unidad de Inteligencia Financiera dispone que la UIF debe mantener contabilidad adecuada y otros registros y preparar para cada ejercicio un estado de cuentas. Éstas deben ser auditadas por un auditor designado por el Director con aprobación del Ministro de Finanzas y, una vez auditadas, se debe remitir una copia al Ministro, al igual que cualquier informe confeccionado por el auditor. Debe presentarse una copia de esas cuentas auditadas a cada Cámara del Parlamento, al igual que cualquier informe elaborado por el auditor sobre las cuentas.

[210] Finalmente, la sección 10 también dispone que el Director debe informar ocasionalmente al Ministro de Finanzas sobre la labor de la UIF y en especial sobre cuestiones que puedan afectar a la política pública o a las prioridades que haya de establecer la UIF.

#### **4.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas**

[211] La UIF cuenta con un conjunto de disposiciones y de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección

<sup>190</sup> Presentación *in situ* de la Unidad de Inteligencia Financiera, pág. 20, *ídem*.

<sup>191</sup> *Ídem*, pág. 21.

<sup>192</sup> Respuesta al Cuestionario, pág. 17, *supra* nota 4.

<sup>193</sup> Presentación *in situ* de la Unidad de Inteligencia Financiera, pág. 25, *supra* nota 168.



4.1 anterior de este informe. No obstante, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[212] El Comité toma nota de que en la presentación que formularon durante su visita *in situ*, los representantes de la UIF hicieron hincapié en la autonomía de ese organismo para el cumplimiento de sus funciones.<sup>194</sup> Tal como se señala en la sección 4.1 de la Ley, mencionaron, por ejemplo, la sección 4(1) de la Ley de la Unidad de Inteligencia Financiera, que dispone que la UIF es un organismo responsable de recibir, analizar, obtener y difundir información con respecto al producto de un delito, y la sección 3(1), que establece que la UIF debe poseer una sucesión perpetua y un sello común con la potestad de celebrar contratos y hacer todo lo que sea necesario para sus funciones. Además se señaló que ni el Ministro ni ninguna otra persona o entidad tiene ninguna facultad de compeler o exigir información recibida por la UIF; y la ley impone a ésta la obligación de proporcionar al Ministro ni a ninguna otra persona o entidad ninguna información de inteligencia u operacional o informe sobre transacciones sospechosas como resultado de la labor de la UIF.<sup>195</sup>

[213] El Comité constata sin embargo que en ciertas circunstancias el Ministro Finanzas, que es también el Primer Ministro de Las Bahamas, tiene la facultad discrecional de impartir a la UIF instrucciones escritas de carácter general sobre la política que ha de seguir ese órgano de control en el cumplimiento de sus funciones, que a juicio del Ministro se requieran en interés público. Esa disposición establece además que la UIF debe cumplir esas directrices.<sup>196</sup>

[214] Además, el Comité constata que el Ministro de Finanzas cumple un papel significativo en la determinación de los recursos humanos y presupuestarios de la UIF. Prácticamente todos los cargos superiores de la UIF; incluido el del Director, son provistos por disposición escrita de ese Ministro, y todas los proyectos de presupuesto se ponen a consideración del Ministerio de Finanzas con miras a su aprobación.

[215] El Comité observa que durante la visita *in situ* no se indicó que la autonomía de ese órgano de control constituyera un problema, dado el importante papel que cumple el Ministro de Finanzas en sus operaciones. No obstante el Comité cree que para reforzar la importante tarea que cumple la UIF y contribuir a asegurar la integridad de su labor, el Estado analizado debería considerar la posibilidad de adoptar disposiciones que dejen claro que este órgano de control es independiente en el ejercicio de las funciones que le encomienda la Ley de la Unidad de Inteligencia Financiera. El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 4.4.1 en la Sección 4.4 del capítulo ii del presente informe).

[216] El Comité toma nota de que una dificultad identificada por los representantes de la UIF durante la visita *in situ* consiste en sus restricciones presupuestarias.<sup>197</sup> Como arriba se señaló, el Comité observa que el presupuesto, tal como se estableció en la visita *in situ* y consta en la sección 4.1 del presente informe, indica una significativa reducción en los últimos seis años, en especial desde el ejercicio 2009/2010 y el ejercicio 2010/2011, en que el presupuesto se redujo en más de la mitad. Durante la visita *in situ* los representantes de la UIF manifestaron que se les había hecho saber que en virtud de una recesión mundial el presupuesto se reduciría. También señalaron que por más que el

<sup>194</sup> *Ídem.*, págs. 7 – 10.

<sup>195</sup> *Ídem.*, pág. 10.

<sup>196</sup> El Estado analizado señala que la categoría de asuntos relacionada con las instrucciones es de alcance limitado, y no limita o inhibe a la UIF en el desempeño de sus funciones ni la somete al control o la dirección de persona o autoridad alguna en la gestión cotidiana de sus asuntos.

<sup>197</sup> *Ídem.*, pág. 33.

presupuesto había venido incrementándose sostenidamente, no había recibido la totalidad de las sumas solicitadas para los dos últimos años. Por lo tanto, un ejemplo que en ello ha afectado a su funcionamiento es el hecho de que la UIF ha tenido que actuar en forma selectiva con respecto a las oportunidades de capacitación ofrecidas a su personal.

[217] Los representantes también señalaron que la Unidad se propone contratar a 5 analistas en el futuro próximo y que necesitará más analistas para cumplir una recomendación formulada por el Grupo de Acción Financiera del Caribe, por la cual Las Bahamas han de establecer medidas referentes a las transferencias electrónicas nacionales, transfronterizas y que no sean de rutina, así como un marco jurídico que imponga la obligación de informar sobre transferencias electrónicas internacionales.<sup>198</sup> Además el Comité observa que la UIF no ha podido examinar todos los informes sobre transacciones sospechosas que recibe en un mismo año. Por ejemplo, en el Informe Anual de la UIF correspondiente a 2012 se señala que de 167 de esos informes recibidos, 16 fueron remitidos al Comisionado de Policía para su investigación, 20 fueron analizados y cerrados y 131 siguieron pendientes.<sup>199</sup> En el Informe Anual de la UIF correspondiente a 2013 se señala que hubo un incremento de aproximadamente 62% de esos informes recibidos, con lo cual de un total de 270 informes de transacciones sospechosas, 33 fueron remitidos al Comisionado de Policía, 41 fueron analizadas y cerradas y 196 siguen pendientes.<sup>200</sup> El Comité observa que el número de casos pendientes es, pues, significativo, lo que puede hacer que supuestos actos de corrupción sigan sin ser detectados. Un aumento del número de analistas puede ayudar a hacer frente a ese atraso.

[218] En virtud de lo que antecede, el Comité observa que el Estado analizado debería considerar la posibilidad de proporcionar a la UIF los recursos presupuestarios y humanos necesarios para el debido cumplimiento de su función, dentro de los límites de los recursos disponibles. El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 4.4.2 en la sección 4.4 del capítulo ii del presente informe)

[219] Como se mencionó en la sección 4.1, la UIF realiza diversas actividades de capacitación en AML/CFT para instituciones financieras y otros organismos. Durante la visita *in situ* los representantes de la UIF señalaron que en 2009 ese órgano de control capacitó a más de 400 personas, más de dos veces mayor que la de 2012, en que recibieron capacitación 892 personas.<sup>201</sup> En el Informe Anual de la UIF correspondiente a 2013 constan esas cifras y se expresa asimismo que en 2013 la cifra fue de 814.<sup>202</sup>

[220] No obstante, el Comité toma nota de que una de las dificultades mencionadas durante la visita *in situ* fue la falta de instituciones gubernamentales y privadas, instituciones financieras, y del público en general que identificaran y denunciaran actos de corrupción.<sup>203</sup> A este respecto, el Comité

<sup>198</sup> Véase, por ejemplo, el [Sexto Informe de Seguimiento del Grupo de Trabajo de Acción Financiera del Caribe, correspondiente a Las Bahamas](#). Además, el Estado analizado señala que se requieren, además, cinco (5) analistas practicantes, dos (2) empleados administrativos para ingreso de datos y un (1) preparador de imágenes de documentos, para que la unidad pueda atender adecuadamente los casos atrasados de transacciones sospechosas y otros informes recibidos para su examen por analistas. La UIF necesitará además obtener recursos presupuestarios adicionales para remunerar al personal, que habrá aumentado, y para adquirir computadoras y otros equipos para su labor.

<sup>199</sup> Informe Anual de la Unidad de Inteligencia Financiera correspondiente a 2012, pág. 16, [http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4\\_bhs.htm](http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4_bhs.htm)

<sup>200</sup> Informe Anual de la Unidad de Inteligencia Financiera correspondiente a 2013, pág. 20, [http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4\\_bhs.htm](http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4_bhs.htm)

<sup>201</sup> Presentación *in situ* de la Unidad de Inteligencia Financiera, pág. 30, *supra* nota 168.

<sup>202</sup> Informe Anual de la Unidad de Inteligencia Financiera correspondiente a 2013, pág. 18, *supra* nota 200.

<sup>203</sup> Presentación *in situ* de la Unidad de Inteligencia Financiera, pág. 33, *supra* nota 168.

cree que la UIF debería considerar la posibilidad de proporcionar capacitación a las instituciones antes mencionadas para ayudarlas a detectar actividades sospechosas en relación con el posible producto de actos de corrupción.<sup>204</sup> Para tal fin, además, debería considerar la posibilidad de coordinar su labor con otros organismos de supervisión en Las Bahamas –en especial la Real Fuerza Policial de Las Bahamas y la Oficina del Procurador General– sobre elaboración de un programa de capacitación sobre detección de actos de corrupción, lo que no sólo podría beneficiar al personal de la UIF, sino también al de esos otros órganos de control. El Comité señaló que durante la visita *in situ* se sostuvo que sería beneficioso establecer una capacitación conjunta, especialmente entre la Policía y los abogados, lo que redundaría en mejores investigaciones.<sup>205</sup> El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 4.4.3 en la sección 4.4 del capítulo ii del presente informe).

[221] En relación con lo expresado, los representantes también señalaron que el personal de la UIF carece de adecuada capacitación en la esfera de lucha contra la corrupción y que falta capacitación proporcionadas por entidades locales e internacionales en esa materia.<sup>206</sup> El Comité cree que el Estado analizado debería tratar de buscar en la esfera internacional entidades que se ocupen de temas AML/CFT para elaborar programas de capacitación para su personal en cuestiones anticorrupción en cuanto guarde relación con la labor de una UIF. El Comité toma nota de que el Grupo Egmont ha producido un libro blanco, titulado *Role of Financial Intelligence Units in Fighting Corruption and Recovering Stolen Assets*, que proporciona información sobre la manera en que la UIF puede ayudar en la lucha contra la corrupción, colaboración que puede ser útil.<sup>207</sup> El Comité formulará una recomendación. (Véanse la recomendación 4.4.4 en la sección 4.4 del capítulo ii del presente informe).

[222] El Comité toma nota de que el Estado analizado señaló durante la visita *in situ* que cuenta con un programa establecido de capacitación permanente. No obstante, como ya se señaló, debido a restricciones presupuestarias la UIF ha actuado selectivamente en cuanto a las oportunidades de capacitación que ofrece a su personal, lo que podría ir en detrimento de todo programa de capacitación que mantenga. A este respecto el Comité toma nota de que en los Informes Anuales correspondientes a 2012 y 2013 se establecieron las actividades de capacitación en que ha participado el personal. En 2012 hubo cuatro actividades de capacitación a las que asistieron siete funcionarios de la UIF, en tanto que en 2013 esa cifra fue de cinco eventos, en que participaron ocho funcionarios.<sup>208</sup> El Comité señala que en esos Informes Anuales no constan los eventos de capacitación llevados a

<sup>204</sup> Acerca de este punto, véase el Documento Blanco del Grupo Egmont: *The Role of Financial Intelligence Units in Fighting Corruption and Recovering Stolen Assets*, pág. 19, <http://www.egmontgroup.org/library/download/229>

<sup>205</sup> El Estado analizado señala que la Unidad de Inteligencia Financiera, en conjunción con la Real Fuerza Policial de las Bahamas y otros organismos competentes, y con entidades financieras y no financieras, intensificará la capacitación que actualmente se imparte a entidades públicas y a entidades privadas financieras y no financieras que operan en las Bahamas, para incluir capacitación sobre temas de lucha contra la corrupción. La unidad usará además su sitio web para dar a conocer al público en general la función que tiene a su cargo, de denunciar todo acto de corrupción del que tenga conocimiento.

<sup>206</sup> Presentación *in situ* de la Unidad de Inteligencia Financiera, pág. 33, *supra* nota 168.

<sup>207</sup> Documento Blanco del Grupo Egmont: *The Role of Financial Intelligence Units in Fighting Corruption and Recovering Stolen Assets*, *supra* nota 204. El Estado analizado señala que la Unidad de Inteligencia Financiera se reunirá con representantes regionales para las Américas del Grupo Egmont y con el experto en aplicación coercitiva de la ley del Grupo de Tarea de Acción Financiera del Caribe, y les solicitará que en los programas de capacitación de los respectivos organismos se incluya capacitación regular AML/CFT. Además la UIF seguirá trabajando con la Fuerza de Trabajo de las Bahamas y otras entidades pertinentes, incluida la Real Fuerza Policial de las Bahamas, en la elaboración de un programa de trabajo conjunto centrado en temas de lucha contra la corrupción.

<sup>208</sup> Véase la pág. 15 del Informe Anual de la Unidad de Inteligencia Financiera correspondiente a 2012, *supra* nota 199 y la pág. 19 de la versión de 2013 de ese informe, *supra* nota 198.

cabo localmente, por lo cual es difícil determinar qué capacitación ha sido ofrecida en el propio territorio de Las Bahamas al personal de la UIF.

[223] El Comité cree que el Estado analizado debería fortalecer el programa de capacitación establecido aumentando las oportunidades de capacitación ofrecidas al personal de la UIF tanto en la esfera interna como en la internacional. Además debería comenzar a establecer en sus Informes Anuales las actividades de capacitación locales en que haya participado personal de la UIF.<sup>209</sup> El Comité formulará recomendaciones. (Véanse las recomendaciones 4.4.5 y 4.4.6 en la sección 4.4 del capítulo ii del presente informe).

[224] Otra dificultad mencionada durante la visita *in situ* fue la falta de anuncios adecuados y sostenidos para sensibilizar al público en general sobre su obligación de reconocer y denunciar actos de corrupción.<sup>210</sup> El Comité observa que la UIF cuenta con un sitio *web* que proporciona información al público en general sobre sus funciones. Como se señaló en la sección 4.1 durante la visita *in situ* los representantes de la UIF señalaron en su presentación:<sup>211</sup>

[225] “[E]l sitio *web* de la UIF, [www.bahamas.gov.bs/fiu](http://www.bahamas.gov.bs/fiu), el Informe Anual de la UIF, sus Directrices sobre Transacciones Sospechosas de 2007, anuncios públicos a través de los medios periodísticos impresos, y conferencias regulares para el sector financiero y para otros sectores permiten a la Unidad informar regularmente al público en general sobre su funcionamiento.”

[226] El Comité observa que el Estado analizado debería usar su sitio *web* para difundir información para el público en general y también para las instituciones financieras, sobre la importancia de detectar y denunciar actos de corrupción en cuanto guarden relación con la labor de la UIF, y utilizar los medios periodísticos impresos y conferencias regularmente celebradas para el sector financiero y otros sectores sobre ese tema. Además, el Comité cree que el Estado analizado debería considerar la posibilidad de establecer programas de extensión para el público en general, para darle a conocer la importante labor realizada por la UIF.<sup>212</sup> El Comité formulará una recomendación. (Véanse la recomendación 4.4.7 en la sección 4.4 del capítulo ii del presente informe).

[227] Además, a fin de alentar la transparencia en las operaciones de la UIF el órgano de control debería considerar la posibilidad de publicar en su sitio *web* el estado de cuentas auditadas, así como los informes que haya emitido el auditor. El Comité formulará una recomendación. (Véanse la recomendación 4.4.8 en la sección 4.4 del capítulo ii del presente informe).

[228] Finalmente, el Comité toma nota de que una de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), que se refiere a las funciones que cumple la UIF en la lucha contra la

<sup>209</sup> El Estado analizado señala que en el futuro, los informes anuales contendrán una reseña de la capacitación local recibida por personal de la UIF, así como de la impartida por los Oficiales de Capacitación, en la UIF, a entidades gubernamentales, financieras y no financieras, en las Bahamas.

<sup>210</sup> Presentación *in situ* de la Unidad de Inteligencia Financiera, pág. 33, *supra* nota 168.

<sup>211</sup> Respuesta al Cuestionario, pág. 17, *supra* nota 4.

<sup>212</sup> El Estado analizado señala que la Unidad de Inteligencia Financiera ha iniciado deliberaciones con el Departamento de Tecnología de Información para asegurar una mayor utilización de su página *web* a fin de sensibilizar al público en general sobre cuestiones relacionadas con denuncia de actos de corrupción en las Bahamas. La unidad trabajará también junto con Bahamas Information Services y otras entidades con el fin de asegurar que se envíen anuncios apropiados al público en general. La UIF y otras entidades interesadas llevarán a cabo actividades de difusión adicionales, mencionadas.

corrupción, consiste en establecer disposiciones referentes a personas expuestas políticamente. Como se señala en la Guía del GAFI sobre Personas Expuestas Políticamente (PEP):<sup>213</sup>

[229] “El Grupo de Acción Financiera (GAFI) define a la persona expuesta políticamente (PPE) como una persona que cumple o a la que se ha encomendado una función pública destacada. Se reconoce el hecho de que debido a su posición e influencia, muchas PPE ocupan posiciones que pueden llegar a dar lugar a abusos encaminados a perpetrar delitos de lavado de dinero (LD) y delitos subyacentes conexos, como los de corrupción y soborno, y para realizar actividades relacionadas con financiamiento del terrorismo (FT).”

[230] A este respecto, el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC),<sup>214</sup> en su Informe de Evaluación Mutua para Las Bahamas y en seis informes de seguimiento subsiguientes recomendó que Las Bahamas amplíe las instituciones encargadas de adoptar medidas de diligencia debida ordinarias, ya que actualmente sólo los bancos, las compañías fiduciarias y las empresas no bancarias de transferencia de dinero tienen la obligación de establecer apropiados sistemas de gestión de riesgos para determinar si un cliente es una PPE y aplicar claras directrices, procedimientos y controles referentes a esas relaciones de negocios.<sup>215</sup> Por ejemplo, en el sexto Informe de Seguimiento del GAFIC correspondiente a Las Bahamas se señaló que los requisitos obligatorios aplicables a PPE sólo rigen para los bancos y las compañías fiduciarias y que no se requiere la aprobación de la administración superior para mantener una relación con un cliente que posteriormente se considere como PPE o que posteriormente se convierta en PPE.<sup>216</sup> El Comité cree que el Estado analizado debería atender esas inquietudes. En las Directrices del Banco Central de Las Bahamas sobre AML/CFT para licenciarios, sobre Prevención del Lavado de Dinero y Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo se señala:

[231] “Las relaciones con PEP y con partes relacionadas (p. ej. parientes próximos, asociados cercanos o compañías relacionadas) pueden exponer a licenciarios [bancos y compañías fiduciarias] a considerables riesgos de reputación y/o jurídicos. El riesgo ocurre cuando esas personas abusan de sus potestades públicas en beneficio personal y/o en beneficio de terceros a través de actividades ilícitas tales como recepción de sobornos o fraude”.

[232] El Comité cree que el Estado analizado debería considerar la posibilidad de ampliar el conjunto de instituciones financieras que deben establecer adecuados sistemas de gestión de riesgos en los casos en que un cliente sea una PEP e implementar requisitos de aprobación por la administración superior para proseguir una relación con un cliente que posteriormente se compruebe que es una PEP o que llegue a serlo. Además, el Comité cree que el Estado analizado debería considerar la posibilidad de destacar, en sus cursos de capacitación para instituciones financieras, la obligación de establecer

<sup>213</sup> Directriz del GAFI sobre Personas Políticamente Expuestas (Recomendaciones 12 y 22), pág. 3, <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recomendaciones/guidance-pep-rec12-22.pdf>

<sup>214</sup> El GAFIC es un organismo formado por veintisiete Estados de la Cuenca del Caribe que han acordado establecer contramedidas comunes para hacer frente al problema de los delitos de lavado de dinero y realizar el seguimiento de la implementación de las Recomendaciones del GAFIC; véase la reseña del GAFIC, <https://www.cfatf-gafic.org/index.php/cfatf-home/cfatf-overview>

<sup>215</sup> Véase, por ejemplo, la pág. 16 del Sexto Informe de Seguimiento del Grupo de Acción Financiera del Caribe para Las Bahamas *supra* nota 198.

<sup>216</sup> *Ídem*. Véanse también Directrices del Banco Central de Las Bahamas sobre AML/CFT para licenciarios, sobre Prevención del Lavado de Dinero y Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo, <http://www.centralbankbahamas.com/download/042373900.pdf>

esos controles con respecto a PPE.<sup>217</sup> El Comité formulará recomendaciones. (Véanse las recomendaciones 4.4.9 y 4.4.10 en la sección 4.4 del capítulo ii del presente informe).

### 4.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[233] Durante la visita *in situ* el Estado analizado proporcionó los siguientes resultados:<sup>218</sup>

<b>Estadísticas sobre informes de transacciones sospechosas (ITS) recibidas en los últimos cinco años</b>					
<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014 (hasta el 9/11/14)</b>
138	142	183	167	270	150
<b>Número de ITS recibidos relacionados con corrupción correspondientes al período 2009 – 2013</b>					
<b>Año</b>	<b>Número de casos recibidos</b>	<b>Derivados a la Policía para que sean investigados</b>	<b>Abiertos y pendientes</b>	<b>Cerrados</b>	<b>Total global de ITS recibidos</b>
2009	2	2	0	0	138
2010	0	0	0	0	142
2011	7	2	2	3	183
2012	1	0	1	0	167
2013	7	1	6	0	270
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>900</b>

[234] El Comité también toma nota de que en los Informes Anuales proporcionados por la UIF hay estadísticas que indican los casos de delitos que sospeche una institución financiera en los períodos en que se hayan presentado los informes, lo que incluye corrupción y los delitos que sospeche la UIF que se han cometido una vez completado el análisis de un informe. En el Informe Anual correspondiente a 2013, por ejemplo, se establece que la Unidad recibió de instituciones financieras 7 denuncias de presunta corrupción y concluyó, una vez culminado un análisis de las mismas o al recibir otra información de inteligencia o penal, que en dos casos se habían configurado presuntos casos de corrupción.<sup>219</sup> El Comité toma nota de que existe una discrepancia entre las cifras proporcionadas durante la visita *in situ* y el contenido del Informe Anual correspondiente al año 2013, pero cree que en la cifra contenida en el cuadro que antecede se actualizan las cantidades que aparecen en el Informe Anual.

<sup>217</sup> El Estado analizado señala que la Unidad de Inteligencia Financiera ampliará sus programas de capacitación para asegurar que todas las instituciones financieras y no financieras tengan conocimiento de los requisitos de las recomendaciones 12 y 22 del GAFIC en cuanto guarden relación con personas expuestas políticamente (PEP). La UIF asiste a todas las reuniones regionales del Grupo de Acción Financiera del Caribe, que es el órgano regional que complementa la labor del Grupo de Acción Financiera. El grupo de trabajo insta a los Estados miembros a cumplir todos los requisitos establecidos para hacer efectivo del cumplimiento de medidas anticorrupción.

<sup>218</sup> Presentación *in situ* de la Unidad de Inteligencia Financiera, págs. 31 – 32, *supra* nota 168.

<sup>219</sup> Véanse las págs. 27 y 28 del Informe Anual de la Unidad de Inteligencia Financiera correspondiente a 2013, *supra* nota 199.

[235] En virtud de lo que antecede, el Comité concluye que la información que antecede permite demostrar que se han detectado actos de corrupción en el Estado analizado y que esos actos fueron derivados a la Real Fuerza Policial de Las Bahamas para que fueran investigados.

[236] No obstante, el Comité observa que hay un alto número de ITS por casos de corrupción que aún no han sido analizados por la UIF, en comparación con el número de casos recibidos, que en algunos casos tienen tres años de antigüedad. El Comité señala que parece haber un significativo atraso de ITS de los que la UIF tendrá que ocuparse. Tan sólo para 2013 la cifra es de 196 ITS aún no analizados, en tanto que algunos casos tienen unos 3 años de antigüedad. En general, el Comité constata que en 2012 la cantidad fue de 131 informes. El Comité señala además que si bien los Informes Anuales contienen valiosas estadísticas sobre la labor de la UIF, ellos no proporcionan información sobre la cifra total de ITS de años anteriores que aún están pendientes de análisis, y parece haber un atraso significativo en los ITS que deben ser examinados por la UIF. Esa información puede resultar esclarecedora sobre la eficiencia global de la labor de la UIF.

[237] En virtud de lo que antecede, el Estado analizado debería considerar la posibilidad de ocuparse cuanto antes de ese atraso y proporcionar estadísticas sobre el total global de ITS aún pendientes, y no sólo de los de cierto año. El Comité formulará recomendaciones. (Véanse las recomendaciones 4.4.11 y 4.4.12 en la sección 4.4 del capítulo ii del presente informe).

[238] Además, el Comité toma nota de que ni esos resultados ni la información proporcionada en los informes anuales proporcionan ninguna información sobre el resultado de los ITS derivados a la Real Fuerza Policial de Las Bahamas para la realización de investigaciones ulteriores. El Comité considera que mantener esos resultados ayudaría a evaluar la eficacia, no sólo de la UIF, sino también de la Real Fuerza Policial de Las Bahamas. El Comité formulará una recomendación a ese respecto. (Véase la recomendación 4.4.13 en la sección 4.4 del capítulo ii del presente informe).

#### **4.4. Conclusiones y recomendaciones**

[239] Con base en el análisis integral realizado con respecto a la UIF en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

**[240] Las Bahamas ha considerado y adoptado medidas encaminadas a mantener y fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera como órgano de control, tal como se expone en la Sección 4 del Capítulo II del presente Informe.**

[241] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:

- 4.4.1. Considerar la posibilidad de adoptar disposiciones que dejen claro que la Unidad de Inteligencia Financiera es independiente en el ejercicio de las funciones que le encomienda la Ley de la Unidad de Inteligencia Financiera. (Véase la Sección 4.2 del Capítulo II del presente Informe).
- 4.4.2. Proporcionar a la Unidad de Inteligencia Financiera los recursos presupuestarios y humanos necesarios para el adecuado cumplimiento de su función, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos. (Véase la Sección 4.2 del Capítulo II del presente Informe)

- 4.4.3. Coordinar su actividad con otros órganos de control, como la Real Fuerza Policial de Las Bahamas y la Oficina del Procurador General, sobre elaboración de un programa de capacitación conjunto sobre detección de actos de corrupción, para ser impartido a instituciones gubernamentales y privadas, instituciones financieras, y al público en general. (Véase la Sección 4.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 4.4.4. Buscar oportunidades de capacitación proporcionada por asociados y organismos internacionales, para el personal de la Unidad de Inteligencia Financiera en materia de lucha contra la corrupción en cuanto esté relacionada con su labor. (Véase la Sección 4.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 4.4.5. Fortalecer y consolidar el programa de capacitación establecido, para incrementar las oportunidades de capacitación ofrecidas al personal de la Unidad de Inteligencia Financiera, tanto en la esfera local como en la internacional. (Véase la Sección 4.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 4.4.6. Dejar constancia, en sus informes anuales, de la capacitación local recibida por el personal de la Unidad de Inteligencia Financiera. (Véase la Sección 4.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 4.4.7. Utilizar el sitio web de la Unidad de Inteligencia Financiera y otras medidas para difundir información al público general sobre la importancia de detectar y denunciar los actos de corrupción en cuanto guarden relación con la labor de la Unidad. (Véase la Sección 4.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 4.4.8. Publicar en el sitio *web* de la Unidad de Inteligencia Financiera, los estados de cuentas auditados de la UIF, así como los informes que haya elaborado el auditor. (Véase la Sección 4.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 4.4.9. Tomar medidas encaminadas a asegurar que todas las instituciones financieras establezcan adecuados sistemas de gestión de riesgos para determinar si un cliente es una persona políticamente expuesta. (Véase la Sección 4.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 4.4.10. Establecer la obligación de aprobación por la administración superior para que pueda mantenerse la relación con un cliente que ulteriormente se concluya que es una persona políticamente expuesta o que ulteriormente llegue a serlo. (Véase la Sección 4.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 4.4.11. Atender el problema del atraso en la tramitación de denuncias sobre transacciones sospechosas que aún no hayan sido analizadas por la Unidad



de Inteligencia Financiera, lo que incluye actos sospechosos de corrupción. (Véase la Sección 4.3 del Capítulo II del presente Informe)

4.4.12. Proporcionar en los informes anuales estadísticas sobre la cifra total de informes sobre denuncias de transacciones sospechosas que aún no hayan sido analizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, y no sólo las de determinado año. (Véase la Sección 4.3 del Capítulo II del presente Informe)

4.4.13. Mantener resultados que indiquen el fruto de las derivaciones efectuadas por la Unidad de Inteligencia Financiera a la Real Fuerza Policial de Las Bahamas con respecto a supuestos actos de corrupción detectados por esa Unidad, para identificar problemas y recomendar medidas correctivas, en caso que corresponda. (Véase la Sección 4.3 del Capítulo II del presente Informe)

## 5. COMISIÓN DE CUMPLIMIENTO

### 5.1 Existencia de un marco jurídico y/o de otras medidas

[242] La Comisión de Cumplimiento cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[243] Con respecto a sus objetivos y funciones, la sección 39(1) de la Ley de Información sobre Transacciones Financieras establece que ella es el órgano responsable de asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley por parte de los abogados, contadores, agentes inmobiliarios, cooperativas de crédito designados, así como por el Banco de Desarrollo de Las Bahamas, la Corporación Hipotecaria de Las Bahamas y los Bancos de Ahorro Postal.<sup>220</sup> Para ello debe realizar continuamente un examen general de esas instituciones en lo referente a la realización de transacciones financieras y, cuando lo considere necesario, llevar a cabo exámenes *in situ* de sus operaciones para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley, designar un auditor para realizar esos exámenes e informar al respecto a la Comisión.<sup>221</sup>

[244] Durante la visita *in situ* los representantes de la Comisión manifestaron que la función básica de la misma consiste en cumplir su mandato sobre lucha contra el lavado de dinero a través de exámenes *in situ*,<sup>222</sup> que son de cuatro tipos: de rutina, de seguimiento, aleatorios y especiales (de investigación).<sup>223</sup> Esos exámenes están destinados a evaluar el nivel de cumplimiento de las normas locales, regionales y mundiales sobre lavado de dinero, abarcando esferas tales como procedimientos de verificación de clientes; procedimientos de información sobre transacciones sospechosas;

<sup>220</sup> Véase la sección 46 de la Ley de Información sobre Transacciones Financieras, [http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4\\_bhs.htm](http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4_bhs.htm), así como la Presentación *in situ* de la Comisión de Cumplimiento, pág. 3, [http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4\\_bhs.htm](http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4_bhs.htm). Véase también [Financial Institutions Supervised by the Commmission](#) (Instituciones financieras supervisadas por la Comisión).

<sup>221</sup> *Ídem.*, secciones 43(a) y 43(b).

<sup>222</sup> Presentación *in situ* de la Comisión de Cumplimiento, pág. 4, *supra* nota 220.

<sup>223</sup> *Ídem.*

procedimientos de capacitación de empleados en medidas anti lavado de dinero y designación de un oficial de información sobre lavado de dinero.<sup>224</sup>

[245] Para el cumplimiento de sus funciones la Comisión puede requerir en cualquier momento razonable a las instituciones comprendidas en su esfera de acción que presenten sus registros y proporcionen la información o explicación que la Comisión les requiera para cumplir sus funciones.<sup>225</sup>

[246] En su respuesta al cuestionario el Estado analizado señala que la Comisión es un órgano autónomo y que como todas las entidades de regulación de servicios financieros está comprendida en la esfera de competencia del Ministro de Finanzas.<sup>226</sup> Además, durante la visita *in situ* los representantes señalaron que si bien la Comisión en efecto está comprendida en la esfera de competencia del Ministro de Finanzas, puede cumplir sin interferencia sus cometidos legales y dicha cartera no toma parte en sus operaciones diarias.<sup>227</sup>

[247] Con respecto a la manera en que la Comisión adopta sus decisiones, el Estado analizado en su respuesta al cuestionario manifiesta lo siguiente:<sup>228</sup>

[248] *“Las decisiones relativas al adecuado funcionamiento de la Comisión están a cargo de tres Comisionados designados para disponer las operaciones de la Comisión. El órgano está encabezado por su Presidente. Sus operaciones diarias son supervisadas por el Inspector de la Comisión, que es el Jefe Administrativo de la misma. La mayor parte de las decisiones necesarias para el ordenado funcionamiento de la Comisión son adoptadas por el Inspector, que (si es necesario) la consulta sobre diversos temas”.*

[249] La Sección 40 de la Ley de Información sobre Transacciones Financieras establece que la Comisión de Cumplimiento está formada por tres miembros designados por escrito por el Gobernador General, debiendo ser personas ampliamente versadas en asuntos financieros y comerciales, jurídicos o de aplicación de leyes, con probada capacidad al respecto. Pueden ser designadas para cumplir un mandato de 3 años y pueden ser reelectas.<sup>229</sup> La Sección 42 de la Ley establece además que ninguna persona puede ser designada como miembro de la Comisión si es miembro de alguna de las Cámaras del Parlamento o es un director, autoridad o empleado de alguna institución financiera o posee un interés de control en la misma.

[250] Con respecto a la manera en que se identifican los recursos humanos necesarios para sus operaciones y a la manera en que se selecciona el personal, el Estado analizado manifiesta en su respuesta al cuestionario que la mayor parte de los funcionarios que trabajan actualmente en la Comisión de Cumplimiento son designados por el Ministerio de Finanzas y asignados a la Comisión. A ese respecto:<sup>230</sup>

[251] *“El Inspector toma parte en el reclutamiento de potenciales funcionarios y ayuda a determinar sus aptitudes. Los empleados son empleados permanentes del Gobierno de Las Bahamas y gozan de*

<sup>224</sup> *Ídem.*, pág. 5.

<sup>225</sup> Ley de Información sobre Transacciones Financieras, sección 44(1), *supra* nota 166.

<sup>226</sup> Respuesta al Cuestionario, pág. 13, *supra* nota 4.

<sup>227</sup> Presentación *in situ* de la Comisión de Cumplimiento, págs. 7 y 14, *supra* nota 220.

<sup>228</sup> Respuesta al Cuestionario, pág. 13, *supra* nota 4.

<sup>229</sup> Ley de Información sobre Transacciones Financieras, sección 41, *supra* nota 166.

<sup>230</sup> Respuesta al Cuestionario, pág. 13, *supra* nota...

*los derechos y privilegios propios de tales. Todas las medidas disciplinarias, incluidas las de suspensión y destitución se realizan previa recomendación del Inspector y/o de Comisionados.”*

[252] *El Inspector determina las necesidades de recursos humanos de la Comisión, y de los todos los demás recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de la misma.”*

[253] Además, el Estado analizado manifiesta que todos los empleados cuentan con una senda de carrera general, que se basa en el mérito y es transparente, y que cada posición en la Comisión requiere de su titular ciertos requisitos académicos mínimos, así como experiencia pertinente, que determina los salarios y beneficios ofrecidos.<sup>231</sup> Durante la visita *in situ* se declaró que la mayor parte de los funcionarios han obtenido certificación en anti lavado de dinero.<sup>232</sup> El Estado analizado señala también que cada empleado de la Comisión cuenta con una descripción del cargo específica que establece sus obligaciones, y que todos los empleados deben hacer uso de oportunidades de capacitación permanente anualmente para facilitar el cumplimiento de las tareas que les han sido asignadas.<sup>233</sup> Finalmente, los empleados de la Comisión, por ser funcionarios públicos, están sujetos a las disposiciones sobre designación, terminación de empleo y régimen disciplinario contenidas en el Reglamento del Servicio Público, así como a las normas de prevención de la corrupción, los conflictos de intereses y la limitación de la participación en actividades políticas previstas en las Órdenes Generales.

[254] Con respecto a la existencia de manuales o documentos para el cumplimiento de sus tareas y la descripción de sus funciones, el Estado analizado manifiesta que todos los aspectos del funcionamiento de la Comisión de Cumplimiento se rigen por un Manual de Políticas y Procedimientos Operativos, que establecen protocolos específicos para cada una de las tareas que la Comisión está llamada a cumplir; a saber: deber de confidencialidad y acceso a la información, comunicaciones, registro, exámenes *in situ*, procedimientos legales y relaciones con el cliente.<sup>234</sup> Tras la visita *in situ* se proporcionó una copia de dicho manual a la Secretaría Técnica de la MESICIC.<sup>235</sup>

[255] Con respecto a capacitación, durante la visita *in situ* los representantes de la Comisión de Cumplimiento manifestaron que se organizan cursos de capacitación para todos los interesados pertinentes, la mayor parte de los cuales para sectores específicos, aunque algunos son de alcance general.<sup>236</sup> También se señaló que el Inspector de la Comisión de Cumplimiento es invitado regularmente a disertar en diversos seminarios anti lavado de dinero seminarios en la esfera local y en el exterior, y ha facilitado la realización de talleres en Jamaica, las Islas Vírgenes Británicas y Barbados, sobre adecuada regulación de determinados negocios y profesiones no financieros.<sup>237</sup>

[256] Con respecto a la manera en que se proporciona información al público en general sobre sus objetivos y funciones, la Comisión de Cumplimiento tiene un sitio *web* en <http://www.bahamas.gov.bs/compliance>, que contiene información de contacto, antecedentes de su mandato, así como las instituciones comprendidas en su órbita, e información sobre los códigos de práctica del sector. También contiene información sobre cursos de capacitación que proporciona la Comisión a los agentes que realizan los exámenes *in situ*. También establece vínculos con directrices

<sup>231</sup> *Ídem*.

<sup>232</sup> Presentación *in situ* de la Comisión de Cumplimiento, pág. 11 *supra* nota 220.

<sup>233</sup> Respuesta al Cuestionario, pág. 14, *supra* nota 4 y Presentación *in situ* de la Comisión de Cumplimiento, pág. 12, *ídem*.

<sup>234</sup> Respuesta al Cuestionario, págs. 13 – 14, *supra* nota 220.

<sup>235</sup> Manual de Políticas y Procedimientos Operativos, archivado en la Secretaría Técnica de la MESICIC.

<sup>236</sup> Presentación *in situ* de la Comisión de Cumplimiento, pág. 13, *supra* nota 220.

<sup>237</sup> *Ídem*. Véase también la Respuesta al Cuestionario, pág. 14, *supra* nota 4.

y códigos de práctica que la Comisión de Cumplimiento ha elaborado para las instituciones financieras que supervisa, tales como Directrices para Cooperativas en materia de lavado de dinero y códigos de prácticas para abogados.<sup>238</sup>

[257] Además, durante la visita *in situ* los representantes también subrayaron que la Comisión inicia cada ejercicio con un programa de trabajo y una serie de reuniones consultivas con dirigentes de empresas.<sup>239</sup>

[258] Con respecto a la manera en que se aseguran los recursos presupuestarios necesarios para sus operaciones, durante la visita *in situ* los representantes de la Comisión proporcionaron la siguiente información sobre el presupuesto de la misma:

Año	Presupuesto (en dólares de Las Bahamas)
2014	0
2013	125 120
2012	227 324
2011	241 789

[259] Con respecto a mecanismos de coordinación, el Estado analizado manifiesta en su respuesta al cuestionario que la Comisión participa en el Grupo de Reguladores de Servicios Financieros (GRSF),<sup>240</sup> cuya finalidad consiste en establecer y mantener una estrecha colaboración y coordinación entre los reguladores de tales servicios en cuestiones tales como aptitud y honorabilidad para personas y empresas que participan en el sector. También considera asuntos que requieren un enfoque de colaboración mutua, tales como imposición conjunta de sanciones y medidas disciplinarias.

[260] Durante la visita *in situ* la Comisión declaró también que mantiene una estrecha colaboración con órganos rectores de sus entidades registradas, tales como el Colegio de Abogados de Las Bahamas, el Instituto de Contadores Públicos Certificados de Las Bahamas, la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Las Bahamas y *The Bahamas Cooperative Credit Union League Limited*.<sup>241</sup>

## 5.2 Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[261] La Comisión de Cumplimiento cuenta con un conjunto de disposiciones y de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 5.1 anterior de este informe. No obstante, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[262] El Comité toma nota de que durante la visita *in situ* los representantes de la Comisión explicaron que Las Bahamas está consolidando los órganos gubernamentales responsables de regular

<sup>238</sup> [Publications, Reports and other Resources](#) (Publicaciones, informes y otros recursos)

<sup>239</sup> Presentación *in situ* de la Comisión de Cumplimiento, pág. 13, *supra* nota 220.

<sup>240</sup> Respuesta al Cuestionario, pág. 13, *supra* nota 4. Véase también Presentación *in situ* de la Comisión de Cumplimiento, pág. 8, *supra* nota 220.

<sup>241</sup> Presentación *in situ* de la Comisión de Cumplimiento, pág. 16, *supra* nota 220.

el sector de los servicios financieros, y que al parecer ese proceso viene dándose desde hace más de 4 años. Por ejemplo, en el Estado de Ejecución Presupuestaria de Mitad de Ejercicio para 2009/2010, el entonces Primer Ministro de Las Bahamas declaró:<sup>242</sup>

[263] *“El Gobierno viene avanzando también en la racionalización de la regulación de los servicios financieros no bancarios. Específicamente, nos proponemos fusionar la Comisión de Valores, la Oficina del Registro de Compañías de Seguros y la Comisión de Cumplimiento, para crear una nueva Dirección de Servicios Financieros. La meta consiste en reducir las cargas que recaen sobre el sector financiero regulado simplificando los requisitos de autorización y los requisitos de suministro de datos. Asimismo se logrará mayor eficiencia asegurando operaciones conjuntas en materia de inspecciones in situ, autorizaciones, tecnología de información y recursos humanos.*

[264] *Se está elaborando un plan de implementación detallado con el fin de que la nueva Dirección comience a funcionar este año. Ya se ha logrado la consolidación física de esas entidades en Charlotte House y se le está dando mayor capacidad de colaborar mutuamente en algunos niveles administrativos y regulatorios.”*

[265] Es por esa razón que el presupuesto para la Comisión de Cumplimiento se ha reducido en forma sostenida hasta un nivel de inexistencia. Los representantes de la Comisión expresaron que el presupuesto global para todos los servicios financieros es de \$7,5 millones para 2014 y que actualmente las necesidades financieras que existan se atienden mediante pedidos a ese fondo común presupuestario.

[266] El Comité observa que si bien el Estado analizado manifiesta que está consolidando sus organismos reguladores de los servicios financieros, aún está funcionando la Comisión de Cumplimiento, la cual no ha sido fusionada en una misma dirección con la Comisión de Valores y la Oficina del Registro de Compañías de Seguros. Además, el Estado analizado manifiesta que aún no ha seleccionado a la Comisión de Cumplimiento como órgano de control competente para la prevención, detección, sanción y erradicación de actos de corrupción que den lugar a responsabilidades disciplinarias, administrativas, financieras o civiles y penales. En virtud de lo expuesto el Comité considera que debería proporcionarse a la Comisión su propio presupuesto, para el cumplimiento de su importante labor.

[267] El tema presupuestario guarda relación con el de los recursos humanos a disposición de la Comisión. Durante la visita *in situ* los representantes señalaron que la Comisión cuenta con 5 funcionarios que fueron transferidos de otras esferas del servicio público, 3 instructores y 2 examinadores. Además se manifestó que durante el año la Comisión había perdido 3 empleados, que fueron transferidos a otras esferas del servicio público. Se ha solicitado el reemplazo de los que han dejado el servicio, pues los representantes expresaron que se trata de una necesidad urgente, pero ello no ha sucedido. La explicación dada para explicar que el Gobierno se muestre reacio en disponerlo fue el plan de consolidación arriba referido.

[268] El Comité observa que el proceso de reducción del personal disponible puede afectar a la consecución del objetivo de asegurar que las instituciones financieras supervisadas tengan adecuados niveles de cumplimiento de las normas anti lavado de dinero. Con respecto a su función básica de cumplir su mandato de lucha contra el lavado de dinero a través de exámenes de rutina de esas

---

<sup>242</sup> 2009/2010 Estado de Ejecución Presupuestaria de Mitad de Ejercicio para el semestre finalizado el 31 de diciembre de 2009, pág. 4, [http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4\\_bhs.htm#u](http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4_bhs.htm#u)

instituciones, la Comisión recurre a auditores independientes que ella designa para que se desempeñen como agentes para realizarlos, en lugar de contar con el personal de la Comisión para ello.<sup>243</sup> Además, como la Comisión no otorga licencias a las instituciones financieras que supervisa, efectúa un proceso de registro anual para esas instituciones, que son más de 1200, cifra significativa para que las supervise el escaso número de funcionarios disponibles.<sup>244</sup>

[269] Además, una importante función de la Comisión es la capacitación que efectúa para las instituciones financieras que supervisa. Todas ellas deben elaborar políticas de capacitación en políticas y procedimientos anti lavado de dinero y asegurar que todos sus funcionarios la reciban por lo menos una vez por año. La capacitación proporcionada por la Comisión está destinada a asegurar que a todos los participantes se les enseñe a detectar y prevenir el lavado de dinero. El Comité toma nota, empero, de que aparentemente no todas esas entidades reciben o están en condiciones de recibir capacitación, pues ello depende de la disponibilidad de funcionarios.<sup>245</sup>

[270] En virtud de lo que antecede, el Comité cree que el Estado analizado debería considerar la posibilidad de disponer que se asigne un presupuesto adecuado a la Comisión de Cumplimiento, asegurando que disponga los recursos humanos y financieros necesarios para cumplir su importante labor. El Comité formulará una recomendación. (Véase la Recomendación 5.4.1 en la sección 5.4 del capítulo ii del presente informe).

[271] Otra dificultad relacionada con recursos humanos identificada por los representantes de la Comisión es la práctica de asignar funcionarios del Ministerio de Finanzas a ese órgano de control, en lugar de permitirle efectuar anuncios de vacantes externas y acudir al público en general en busca de candidatos apropiados. Los representantes señalaron que a veces es difícil hallar personas dotadas de antecedentes apropiados en el servicio público que puedan transferirse a la Comisión. El Comité cree que el Estado analizado debería considerar la posibilidad de permitir que la Comisión del Servicio Público lleve a cabo llamados para reclutamiento externo para contribuir a atender las necesidades de recursos externos que experimenta.<sup>246</sup> El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 5.4.2 en la sección 5.4 del capítulo ii del presente informe).

[272] El Comité observa asimismo que la Comisión es una entidad autónoma y que como todos los órganos de regulación de servicios financieros está comprendido en la esfera de competencia del Ministro de Finanzas. Además, puede cumplir sus cometidos legales sin interferencia y dicha cartera no se ocupa de las operaciones cotidianas de la Comisión. No obstante, tal como se señaló con respecto a sus recursos presupuestarios y humanos, el Ministerio de Finanzas cumple un papel importante en sus operaciones al determinar qué fondos se le pueden proporcionar, ya que no puede contar con presupuesto propio y transfiere funcionarios del Ministerio para que trabaje en la Comisión. otro aspecto del importante papel que cumple el Ministro en las operaciones de la

<sup>243</sup> Presentación *in situ* de la Comisión de Cumplimiento, pág. 4, *supra* nota 220.

<sup>244</sup> *Ídem.*, pág. 6.

<sup>245</sup> Véase [Compliance Commission: Anti-Money Laundering Training](#). (Comisión de Cumplimiento: Capacitación en Antilavado de Dinero).

<sup>246</sup> El Estado analizado señala que la Comisión está facultada para realizar contrataciones mediante reclutamiento externo de personal, acudiendo al sector privado, pero ese proceso es más lento que el de reclutamiento de personas que ya pertenezcan al servicio público. Quien sea reclutado a través de un llamado externo debe haber sido aprobado y designado como funcionario público asignado al Ministerio de Finanzas a través de una orden del Gobernador General antes de que pueda asumir sus cometidos en la Comisión., en tanto que una persona que ya se desempeñe como funcionario público sólo tendría que solicitar su traslado a la Comisión desde otro Ministerio de Gobierno. La Comisión ha constatado también que la identificación de personal calificado perteneciente al servicio público es asimismo más lenta, porque en el servicio público el número de personas con conocimientos sobre AML/CFT es menor que el existente en el sector privado.

Comisión aparece en la respuesta al cuestionario. El Estado analizado señala que la Comisión es responsable ante el Ministro de Finanzas del cumplimiento de sus cometidos legales y que todos los protocolos de información se encomiendan a dicho Ministro, quien dispone el volumen de información que ha de difundirse.<sup>247</sup>

[273] El Comité observa que durante la visita *in situ* no se señaló que la autonomía de ese órgano de control fuera un problema, dado el importante papel que cumple el Ministro de Finanzas en sus operaciones. No obstante, el Comité cree que para reforzar la importante labor que lleva a cabo la Comisión y ayudar a asegurar la integridad de esa labor, el Estado analizado debería considerar la posibilidad de adoptar disposiciones que dejen claro que este órgano de control es independiente en el ejercicio de sus funciones. El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 5.4.3 del capítulo ii del presente informe).

[274] El Comité observa asimismo que la Ley de Información sobre Transacciones Financieras no contiene disposiciones que indiquen en qué circunstancias las personas que integran la Comisión pueden ser removidas de sus cargos, y sólo establece que los miembros de cualquiera de las Cámaras del Parlamento o quienes tengan calidad de director, autoridad o empleado de una institución financiera o tengan un interés de control en la misma no pueden ser designados como miembros de la Comisión. El Comité cree que el Estado analizado podría considerar la posibilidad de adoptar disposiciones que establezcan los parámetros de destitución; por ejemplo la posibilidad de que un miembro de la Comisión sea destituido por inhabilitación para el cumplimiento de las funciones de su cargo debido a enfermedad corporal o mental o cualquier otra causa; mala conducta o un conflicto de intereses. Otros parámetros de descalificación para ocupar un cargo pueden incluir la quiebra no saneada o el haber sido declarado culpable de un delito que implique deshonestidad o torpeza moral. El establecimiento de parámetros puede ayudar a brindar transparencia sobre las causales de destitución o remoción y descalificación e indicar a los miembros designados qué actos pueden afectar a su elegibilidad como miembros de la Comisión.<sup>248</sup> El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 5.4.4 en la sección 2.4 del capítulo ii del presente informe).

[275] El Comité toma nota de que en la Ley de Información sobre Transacciones Financieras no parecen existir disposiciones que impongan a la Comisión la obligación de publicar un informe anual sobre sus actividades. Para promover la transparencia y la rendición de cuentas debería imponerse a la Comisión la obligación de preparar y publicar un informe anual de sus actividades, con lo cual el público puede tener conocimiento de la labor realizada por ese órgano de control. Ese informe puede además servir como mecanismo de rendición de cuentas y debería incluir información pertinente, tal como número de actividades de capacitación realizadas y recibidas, estadísticas sobre su labor, así como otra información importante, tal como su gasto presupuestario. Otra información importante puede consistir en un plan y programa de trabajo para un ejercicio financiero, en que se incluyan asuntos tales como los objetivos y metas alcanzados durante el ejercicio por la Comisión. El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 5.4.5 en la sección 5.4 del capítulo ii del presente informe).

<sup>247</sup> Respuesta al Cuestionario, pág. 14, *supra* nota 14.

<sup>248</sup> El Estado analizado señala que la destitución de un miembro de la Comisión por incapacidad para el cumplimiento de las funciones del cargo en virtud de enfermedad corporal o mental o cualquier otra causa; conducta indebida, o de conflicto de intereses, quiebra, o por haber sido declarado culpable de un delito que revele deshonestidad o torpeza moral constituye una estipulación estándar en todo contrato de empleo, conforme al régimen del Derecho Anglonorteamericano (es decir por imperio de la jurisprudencia como fuente formal de derecho) de las Bahamas. El incumplimiento de cualquiera de esas disposiciones contractuales implícitas constituiría causal de destitución. Esas disposiciones no tienen por qué enunciarse expresamente en un contrato de empleo, y la ausencia de las mismas no vicia dicho contrato.

[276] Finalmente, como se establece en la sección 5.1, una de las funciones importantes de la Comisión consiste en proporcionar capacitación sobre normas anti lavado de dinero a las instituciones financieras que supervisa. Aunque se declaró que se organizan cursos de capacitación para todos los interesados pertinentes, el Comité no pudo encontrar en el sitio *web* de la misma ni en el material presentado para la Cuarta Ronda ninguna descripción adicional de la capacitación proporcionada. Como ya se señaló, existen limitaciones de recursos humanos en cuanto al número de cursos de capacitación que la Comisión puede proporcionar a las instituciones financieras, debido a limitaciones de personal. Poner en línea ese material puede ayudar a orientar a esas instituciones en cuanto a la imple Véase la Recomendación de adecuadas medidas anti lavado de dinero.<sup>249</sup> El Comité formulará una recomendación. (véase la recomendación 5.4.6 en la sección 5.4 del capítulo ii del presente informe).

### 5.3 Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[277] El Estado analizado proporcionó durante la visita *in situ* los siguientes resultados con respecto al número de exámenes *in situ* realizados y visitas de seguimiento efectuadas para corregir fallas en las normas anti lavado de dinero detectadas a través de esos exámenes:

Exámenes <i>in situ</i>		
Año	De rutina	De seguimiento
2014 (hasta septiembre)	32 (1 a distancia) <sup>250</sup>	14
2013	26	0
2012	28	6
2011	37 (3 a distancia)	3

[278] El Comité toma nota de que a través del uso de agentes la Comisión ha venido realizando exámenes de rutina para evaluar el nivel de cumplimiento, por las instituciones financieras, de las normas anti lavado de dinero locales, regionales y mundiales, y que es la Comisión la que realiza los exámenes de seguimiento. También se explicó que el incremento de los exámenes de seguimiento registrado en 2014 obedece a la modificación de las normas del Grupo de Trabajo de Acción Financiera.

[279] A ese respecto, el Comité toma nota de que, tal como se señala en la sección 5.1, la Comisión también lleva a cabo otros dos tipos de exámenes: aleatorios y especiales (de investigación). En los

<sup>249</sup> El Estado analizado señala que la Comisión realiza anualmente actividades de capacitación en AML/CFT para diversos tipos de instituciones financieras. Dicha capacitación se expone en los Informes Anuales que se presentan al Ministro de Finanzas y al Gabinete de las Bahamas. La Comisión ha publicado también, de cuando en cuando, Códigos de Práctica para las instituciones financieras que supervisa, a fin de impartirles directrices sobre implementación de estándares AML. La Comisión se propone actualizar su sitio web para incluir directrices adicionales para instituciones financieras sobre aplicación de estándares AML.

<sup>250</sup> Se explicó durante la visita *in situ* que los exámenes a distancia en general se realizan para compañías unipersonales de las que en el pasado se había determinado a través de una visita *in situ* que habían cumplido las normas anti lavado de dinero y que la compañía no había incrementado sus clientes en más del 25% desde el último examen. En esos casos un alto funcionario de esa institución llena el formulario de examen en la empresa y lo remite a la oficina de la Comisión para que sea evaluado por el personal de la Comisión del mismo modo que una declaración correspondiente a un examen *in situ*. Toda inquietud que surja de ese examen se comunica luego a la empresa.



primeros se pone a prueba el proceso de examen de rutina. El proceso de evaluación es idéntico al de un examen *in situ* de rutina, aunque lo realiza la Comisión y no un Agente. El examen especial (de investigación) es aquel que, basado en una causa, conduce a una determinación acerca de si se ha cometido una infracción de normas anti lavado de dinero, y la magnitud de la infracción.<sup>251</sup>

[280] En esos casos sería importante mantener estadísticas sobre el número de exámenes de ese tipo realizados en un año, para identificar problemas y recomendar medidas correctivas, cuando corresponda. El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 5.4.7 en la sección 5.4 del capítulo ii del presente informe)

[281] Además, el Comité observa que la información proporcionada durante la visita *in situ* no está disponible en línea y por lo tanto no está a disposición del público en general. A ese respecto el Comité considera que el Estado analizado manifiesta que sería útil que esa información sea de fácil acceso para el público en general. El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 5.4.8 en la sección 5.4 del capítulo ii del presente informe).

[282] El Comité también observa que uno de los mandatos importantes de la Comisión consiste en publicar códigos de prácticas para las instituciones financieras que supervisa, lo que proporciona orientación sobre las obligaciones, requisitos y estándares que han de cumplirse y los procedimientos y prácticas óptimas que han de ser observadas por ellas, tales como verificación, mantenimiento de registros y denuncia de transacciones sospechosas.<sup>252</sup> A ese respecto cabe presumir que los exámenes especiales (de investigación) que realiza la Comisión detectarían esas infracciones y se aplicarían sanciones. En esos casos la Comisión también mantendría estadísticas sobre el número de infracciones detectadas en el curso de esas investigaciones, y el resultado; por ejemplo la sanción aplicada.<sup>253</sup> El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 5.4.9 en la sección 5.4 del capítulo ii del presente informe)

[283] Finalmente, el Comité observa que la Comisión supervisa a más de 1200 instituciones financieras, de las cuales 230 están obligados a someterse a exámenes de rutina. Sin embargo, según la información proporcionada al Comité, como se señala en el cuadro que antecede, la Comisión realiza entre 26 y 37 exámenes en un mismo año. El Estado analizado debería considerar la cuestión de si el número de exámenes realizados en un año es suficiente para asegurar que esas instituciones estén cumpliendo suficientemente las leyes y estándares anti lavado de dinero en vigor.<sup>254</sup> El Comité formulará una recomendación. (Véase la Recomendación 5.4.10 en la Sección 5.4 del Capítulo II del presente Informe).

## 5.4 Conclusiones y recomendaciones

<sup>251</sup> Véanse, por ejemplo, la pág. 20 y la Sección 9 del [Handbook and Code of Practice for Accountants](#) (Manual y Código de Práctica para Contadores)

<sup>252</sup> Ley de información sobre Transacciones Financieras, sección 47(1)(a), *supra* nota 166.

<sup>253</sup> El Estado analizado señala que la Comisión seguirá revisando sus políticas y procedimientos de examen para mantener estadísticas sobre número de infracciones, directrices (resultados) y sanciones impuestas en virtud de exámenes (indagatorias). En la actualidad los inspectores emiten informes escritos que se remiten al Inspector de la Comisión; en ellos relacionan las infracciones y recomendaciones de medidas correctivas o sanciones que sean necesarias para la realización de exámenes (indagatorios) especiales. El Inspector tiene entonces la obligación de emitir directrices a la institución de que se trate, basadas en el respectivo informe.

<sup>254</sup> El Estado analizado señala que la labor de la Comisión de Cumplimiento en la realización de los exámenes ha sido limitado debido a un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Información sobre Transacciones Financieras, que aún no ha sido resuelto. Véase *Ingraham & Ors v. Glinton & Anor* (The Bahamas) [2006] UKPC 40 (24 July 2006), <http://www.bailii.org/uk/cases/UKPC/2006/40.html>

[284] Con base en el análisis integral realizado con respecto a la Comisión de Cumplimiento en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

**[285] Las Bahamas ha considerado y adoptado medidas tendientes a mantener y reforzar la Comisión de Cumplimiento como órgano de control, conforme a lo descrito en la Sección 5 del Capítulo II del presente Informe.**

[286] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere la siguientes recomendaciones:

- 5.4.1 Dotar a la Comisión de Cumplimiento los recursos presupuestarios y humanos necesarios para el debido cumplimiento de su función, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos. (Véase la sección 5.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 5.4.2 Permitir a la Comisión de Cumplimiento la atención de sus necesidades de recursos humanos a través de procesos de reclutamiento externo realizados por la Comisión del Servicio Público. (Véase la sección 5.2 del Capítulo II del presente Informe).
- 5.4.3 Considerar la posibilidad de adoptar disposiciones que dejen claro que la Comisión de Cumplimiento es independiente en el ejercicio de las funciones que le encomienda la Ley de Información sobre Transacciones Financieras. (Véase la sección 5.2 del Capítulo II del presente Informe).
- 5.4.4 Considerar la posibilidad de adoptar disposiciones que establezcan las circunstancias en que los miembros designados de la Comisión de Cumplimiento pueden ser removidos o destituidos de sus cargos, así como los parámetros de descalificación. (Véase la sección 5.2 del Capítulo II del presente Informe).
- 5.4.5 Considerar la posibilidad de adoptar disposiciones legales que imponga la obligación a la Comisión de Cumplimiento de emitir y publicar un informe anual con los resultados de su gestión, que contenga información sobre temas tales como: número de exámenes y actividades de capacitación realizadas en el año, estadísticas sobre su labor, plan de trabajo y sus gastos presupuestarios. (Véase la sección 5.2 del Capítulo II del presente Informe).
- 5.4.6 Publicar en línea los materiales de capacitación que utiliza la Comisión de Cumplimiento para orientar a las instituciones financieras sobre la implementación de normas anti lavado de dinero. (Véase la sección 5.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 5.4.7 Mantener estadísticas sobre el número de exámenes de rutina *in situ*, de seguimiento, aleatorios y especiales (de investigación) realizados por la Comisión de Cumplimiento, para identificar problemas y recomendar las medidas correctivas que sean necesarias. (Véase la sección 5.3 del Capítulo II del presente Informe)

- 5.4.8 Poner a disposición del público información estadística con respecto al número de exámenes de rutina *in situ*, de seguimiento, aleatorios y especiales (de investigación) realizados por la Comisión de Cumplimiento, en forma que sea de más fácil acceso para el público en general. (Véase la sección 5.3 del Capítulo II del presente Informe)
- 5.4.9 Mantener estadísticas sobre el número de infracciones detectadas en el curso de un examen especial (de investigación) y el resultado de esos exámenes, tales como la imposición de una sanción, para identificar problemas y recomendar medidas correctivas, cuando corresponda. (Véase la sección 5.3 del Capítulo II del presente Informe)
- 5.4.10 Efectuar un análisis sobre el número de exámenes de rutina *in situ* realizados en un año para efectos de determinar si es suficiente para asegurar que las instituciones financieras estén cumpliendo con las leyes y estándares anti lavado de dinero vigentes, en orden a identificar retos y recomendar medidas correctivas, en caso que corresponda. (Véase la sección 5.3 del Capítulo II del presente Informe).

### III. BUENAS PRÁCTICAS

[287] De conformidad con la Sección V de la *Metodología para el Análisis de la Implementación de la Disposición de la Convención Interamericana Contra la Corrupción Seleccionada en la Cuarta Ronda* y con el *Formato* adoptado por el Comité para los informes de dicha ronda, se alude a las buenas prácticas identificadas por el Estado analizado, que ha expresado su deseo de compartir con los demás países integrantes del MESICIC y que podrían ser de beneficio para ellos:

[288] **Con respecto a la Oficina de la Procuraduría General:**

[289] La Iniciativa de Justicia SWIFT incorpora elementos de investigación, acusatorios y sancionatorios. A través de ella se procura facilitar la colaboración entre las instituciones y los órganos del sistema de justicia. En ella toman parte la Oficina de la Procuraduría General, la Real Fuerza Policial de Las Bahamas, la Oficina de Registro de la Corte Suprema, Representantes de la Prisión de Su Majestad, Representantes de Servicios Sociales, la Dirección de Hospitales Públicos y, ocasionalmente, representantes de familiares de víctimas.<sup>255</sup>

[290] Información adicional aparece en la página 30 de la Respuesta al Cuestionario.

### IV. SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES E INFORMACIÓN Y DESARROLLOS NUEVOS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME POR PAÍS DE LA PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS<sup>256</sup>

[291] El Comité se referirá a continuación a los avances e información y desarrollos nuevos dados por Las Bahamas en relación con las recomendaciones formuladas y las medidas sugeridas por el

<sup>255</sup> Presentación *in situ* de la Oficina de la Procuraduría General, pág. 17, *supra* nota 17.

<sup>256</sup> El listado de las recomendaciones que después de este análisis aún requieren atención adicional o han sido reformuladas se encuentra incluido en el Anexo I de este Informe.

Comité para su implementación en los informes de la Primera Ronda, sobre las que estimó que requerían atención adicional en los informes de la Segunda y Tercera Rondas<sup>257</sup>, y procederá, según corresponda, a tomar nota de aquellas que han sido consideradas satisfactoriamente y de aquellas que necesitan atención adicional por el Estado analizado, y si es el caso, se referirá a la vigencia de tales recomendaciones y medidas y a su replanteamiento o reformulación, de acuerdo con lo previsto en la sección VI de la metodología adoptada por el Comité para la Cuarta Ronda.

[292] El Comité también tomará nota en este apartado del informe de las dificultades que para la implementación de las aludidas recomendaciones y medidas haya puesto de presente el Estado analizado, y de la cooperación técnica que haya sido requerida por el mismo con tal fin.

## **1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN)**

### **1.1. Normas de conducta para prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento**

#### Recomendación:

*Asegurarse de que las leyes referentes a conflictos de intereses se apliquen plenamente, que respalden el cumplimiento de las recomendaciones del punto 7.1 cuando corresponda, y sean aplicables a todas las autoridades y empleados públicos, para hacer posible la eficaz observancia práctica del sistema de ética pública.*

#### Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Establecer o adaptar y luego implementar normas de conducta a las oficinas que actualmente no están sujetas a control alguno, en cuyo contexto deberían establecerse sanciones disuasivas por violaciones de esas normas. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.1.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)*

[293] Con respecto a la medida antes mencionada, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos. A ese respecto, el Comité señala, como paso que contribuye al avance en la implementación de la medida, lo siguiente:<sup>258</sup>

[294] – De las 27 personas contratadas por la Oficina del Gobernador General, nueve fueron reclasificadas como funcionarios permanentes y pensionables y por lo tanto se rigen por las Órdenes Generales. Otras 18 están siendo consideradas para adjudicarles la condición de funcionarios permanentes y pensionables.

[295] – La Judicatura se rige por los Principios de Bangalore sobre Conducta Judicial, de 2002, en virtud de los cuales todo juez debe observar estándares internacionales de independencia, imparcialidad, rectitud e igualdad, y ser competente y diligente. La inobservancia de tales estándares puede dar lugar a su remoción del cargo judicial.

<sup>257</sup> Disponibles en: <http://www.oas.org/juridico/spanish/bhs.htm>

<sup>258</sup> Véase Respuestas al Cuestionario Adicional, págs. 2 – 4, [http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4\\_bhs.htm](http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4_bhs.htm).

[296] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida a) de la recomendación que antecede, y de la necesidad de tener en cuenta que ciertos cargos no están sujetos a control alguno, como los de la mayoría de los funcionarios de la Oficina del Gobernador General y del Departamento de Turismo.

[297] Además, como se señala en el Informe para la Primera Ronda adoptado para Las Bahamas:<sup>259</sup>

[298] *“Esas no son las únicas oficinas que no forman parte del Servicio Público y por lo tanto que no se rigen por las Órdenes Generales. Todos los cargos políticos, los cargos de los miembros de la Comisión del Servicio Público y las comisiones permanentes, los miembros de juntas, comités u órganos similares establecidos por la ley y otras oficinas definidas como no consistentes en oficinas públicas a los efectos de las disposiciones constitucionales también están exentas de esos controles. Esas excepciones representan una vía por la que puede socavarse el sistema establecido para prevenir conflictos de intereses y la corrupción, por lo cual deberían establecerse mecanismos de control y regulación de las actividades de esas oficinas.”*

[299] Por último, el Comité señala que si bien los Principios de Bangalore sobre Conducta Judicial constituyen una práctica óptima a nivel internacional, no resulta clara la manera en que hayan sido adoptados por la Judicatura en el ámbito nacional. (Véase la medida a) de la sección 1.1 del Anexo 1 del presente Informe)

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Aplicar a senadores y diputados un código de ética en que se prevean mecanismos de sanciones por infracciones a sus disposiciones.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.1.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[300] Con respecto a la medida que antecede, en su respuesta el Estado analizado hace referencia a la Parte VIII sobre Potestades y Privilegios (Ley del Senado y la Cámara Baja), al Artículo 42 de la Constitución, así como el texto del Código de Ética para Ministros y Secretarios Parlamentarios:<sup>260</sup>

[301] A ese respecto el Comité señala que la información proporcionada fue considerada y analizada para el Informe de la Primera Ronda de Las Bahamas. El Comité toma nota de que durante la visita *in situ* se proporcionó un Manual de Procedimiento del Gabinete y Ministerial, que contiene disposiciones adicionales sobre la conducta que deben observar los Ministros y Secretarios Parlamentarios.<sup>261</sup> No obstante, ese Manual, así como el Código de Ética para Ministros y Secretarios Parlamentarios, no se aplica a los Senadores ni a los Miembros de la Cámara Baja, que no forman parte del Gabinete de Las Bahamas. En virtud de lo que antecede, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la implementación de tales disposiciones. (Véase la medida b) de la sección 1.1 del Anexo 1 del presente Informe)

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

<sup>259</sup> Informe de la Primera Ronda de Examen, pág. 10, [http://www.oas.org/juridico/english/mec\\_rep\\_bhs.pdf](http://www.oas.org/juridico/english/mec_rep_bhs.pdf)

<sup>260</sup> Véase Respuestas al Cuestionario Adicional, pág. 4, *Idem.*, y Respuestas al Cuestionario, pág. 35, *supra* nota 4.

<sup>261</sup> Manual de Procedimiento del Gabinete y Ministerial, [http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4\\_bhs.htm](http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4_bhs.htm).

*Aplicar restricciones sobre conflictos de intereses durante un periodo apropiado tras el cese en la función pública.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.1.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[302] Con respecto a la medida antes mencionada, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos. A ese respecto, el Comité señala, como paso que contribuye al avance en la implementación de la medida, lo siguiente:<sup>262</sup>

[303] - A los abogados y contadores empleados por el servicio público su código de ética profesional les prohíbe incurrir en conflictos de intereses no bien asumen una relación de empleo en el servicio gubernamental. Además los ingenieros y arquitectos empleados por el Ministerio de Obras Públicas les está prohibido ocuparse de asuntos que impliquen un conflicto de intereses después de dejar el servicio público.

[304] Se formulará una recomendación de enmienda del Manual de Procedimiento del Gabinete y Ministerial para incluir una prohibición de que las personas que dejen la vida pública se ocupen de asuntos que generen conflictos de intereses.

[305] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida c) de la recomendación que antecede, así como de la necesidad de que siga prestando atención a la misma, teniendo en cuenta que no se contempla la implementación de normas expresas, de aplicación general, para prevenir conflictos de intereses posteriores al cese en un cargo público; por ejemplo la prohibición de que ex funcionarios públicos tomen parte en asuntos oficiales en que hayan participado durante su período de prestación de servicios, o tengan tratos con instituciones con las que hayan estado relacionados recientemente, así como, en general, otras situaciones que puedan llevar al aprovechamiento impropio, por una persona, de su calidad de ex funcionario público. (Véase la medida c) de la sección 1.1 del Anexo 1 del presente Informe)

Medida d) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Asegurarse de que existan mecanismos de transparencia para los casos en que el Primer Ministro decide autorizar a un ministro a mantener cualquier relación contractual con compañías que mantengan relaciones contractuales con el Estado, ocupar cargos en su directorio o poseer acciones de las mismas.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.1.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[306] Con respecto a la medida antes mencionada, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos. A ese respecto, el Comité señala, como paso que contribuye a la implementación de la medida, lo siguiente:<sup>263</sup>

[307] – “El Código de Ética para Ministros y Secretarios Parlamentarios es ilustrativo a ese respecto. Los Ministros y Secretarios Parlamentarios deben evitar todo conflicto – real o percibido como tal-- entre sus intereses privados y sus obligaciones públicas. A un Ministro se le pidió la renuncia por falta de transparencia tras haber adjudicado contratos a una compañía cuyo directorio integraba.”

<sup>262</sup> Véase Respuestas al Cuestionario Adicional, págs. 4 – 5, *supra* nota 258.

<sup>263</sup> Véase Respuestas al Cuestionario Adicional, págs. 5 – 6, *Ídem.*, y Respuestas al Cuestionario, pág. 36, *supra* nota 4.

[308] – El Manual de Procedimiento del Gabinete y Ministerial prohíbe expresamente a los Senadores y a los miembros de la Cámara Baja mantener relaciones contractuales que los pongan en situaciones de conflicto de intereses. A ese respecto las secciones 37, 38, 39, 40(a), (b) y (c), 41 y 45 prohíben expresamente los conflictos de intereses de Ministros integrantes del Gabinete o sus cónyuges.

[309] El Comité toma nota de las disposiciones establecidas en el Manual de Procedimiento Ministerial y del Gabinete, así como en el Código de Ética para Ministros y Secretarios Parlamentarios para evitar conflictos de intereses. En especial, el Comité señala que el Código de Ética dispone que los Ministros deben desprenderse de sus acciones o participaciones de capital en compañías que mantengan relaciones contractuales con el Gobierno y, si ello no resulta práctico, que las coloquen en un fideicomiso ciego.

[310] El Comité toma nota, sin embargo, de que dicho código concede al Primer Ministro la facultad discrecional de poseer acciones en compañías públicas que mantengan relaciones contractuales con el Gobierno, sin que estén obligados a venderlas o colocarlas en un fideicomiso ciego, cuando a juicio del Primer Ministro tales acciones no tengan un valor significativo. No obstante, no parece haber disposiciones que regulen la manera en que el Primer Ministro haya de tomar esa determinación.

[311] En virtud de lo que antecede, el Comité considera la posibilidad de reformular la medida d) de la recomendación de la sección 1.1 del Capítulo IV del presente Informe, en los términos siguientes:

[312] Asegurar que existan mecanismos que brinden transparencia en los casos en que el Primer Ministro decida autorizar a un Ministro a mantener acciones en compañías públicas que mantengan relaciones contractuales con el Gobierno sin exigirle que las venda o coloque en un fideicomiso ciego. (Véase la medida d) de la sección 1.1 del Anexo 1 del presente Informe)

## **1.2. Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento**

Recomendación sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Reforzar los sistemas de control dentro de la gestión pública desarrollando normas susceptibles de aplicación coercitiva aplicables a todas las autoridades y funcionarios públicos, que establezcan la obligación de conservar y usar en forma apropiada los recursos que se les confían. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.2.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)*

[313] Con respecto a la recomendación que antecede, el Estado analizado hace referencia a disposiciones contenidas en la Constitución, las Órdenes Generales, la Ley de Administración Financiera y Auditoría, así como el Código Penal.<sup>264</sup>

[314] A ese respecto el Comité señala que la información proporcionada fue considerada y analizada para el Informe de la Primera Ronda de Las Bahamas. En virtud de lo que antecede, el Comité toma

---

<sup>264</sup> Respuestas al Cuestionario, pág. 40, *supra* nota 4.

nota de la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la implementación de dicha recomendación. (Véase la recomendación única de la sección 1.2 del Anexo 1 del presente Informe)

### **1.3. Medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento**

#### Recomendación:

*Desarrollar y fortalecer los mecanismos con que cuenta el país para imponer a los funcionarios públicos la obligación de denunciar a las autoridades competentes los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.*

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Establecer medidas y sistemas que exijan informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública para aquellos funcionarios y empleados públicos que actualmente no se encuentran obligados a hacerlo. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.3.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)*

[315] Con respecto a la medida antes mencionada, en su respuesta el Estado analizado hace referencia a disposiciones contenidas en las Órdenes Generales:<sup>265</sup>

[316] – “La Orden General 1111 dispone que es obligación de todo autoridad con potestades de supervisión, no bien observa cualquier error u omisión de un funcionario público bajo sus órdenes, poner oralmente en conocimiento de esas situaciones al Jefe del Departamento. La Orden General 1112 dispone además que una vez que el Jefe del Departamento es notificado del desempeño o el comportamiento insatisfactorios del funcionario, debe notificar por escrito al funcionario los detalles de su falta e intimarlo a subsanarla.”

[317] Además, el Estado analizado señala que la ley exhorta a todos los bahameños a ser ciudadanos cumplidores de la ley y dispone que existiendo pruebas de corrupción deben presentar una denuncia formal a la Real Fuerza Policial de Las Bahamas.

[318] Durante la visita *in situ* los representantes de la Oficina de la Procuraduría General proporcionaron información adicional relativa a la medida, mencionando diversas disposiciones del Código Penal que establecen sanciones por delitos relacionados con cargos públicos.<sup>266</sup>

[319] A ese respecto el Comité señala que las Órdenes Generales fueron analizadas durante el Informe de la Primera Ronda de Las Bahamas, y que las disposiciones citadas no establecen la obligación de denunciar a autoridades competentes actos de corrupción en el desempeño de funciones, sino que parecen referirse al desempeño laboral de un funcionario público. Además, las disposiciones mencionadas en el Código Penal no establecen ese requisito.

<sup>265</sup> *Ídem*, pág. 37 – 39.

<sup>266</sup> Respuestas al Cuestionario Adicional, págs. 7 – 11, *supra* nota 258.



[320] En virtud de lo que antecede, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la implementación de dicha recomendación. (Véase la recomendación a) de la sección 1.3 del Anexo 1 del presente Informe)

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Establecer mecanismos que protejan de represalias oficiales a quienes denuncien, de buena fe, actos de corrupción.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.3.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[321] Con respecto a la medida antes mencionada, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos. A ese respecto, el Comité señala, como pasos que contribuyen al progreso en la implementación de la medida, los siguientes:<sup>267</sup>

[322] – El establecimiento de mecanismos de denuncia anónima, así como de mecanismos de prevención de la revelación de la identidad de denunciantes/testigos. Se hace referencia también a las Órdenes sobre Investigación con Anonimato de Testigos y a las Órdenes sobre Anonimato de Testigos.

[323] – Se ha introducido el Programa de Protección de Testigos y Realización de Conferencias a través de la *web*, que incluye la posibilidad de presentar pruebas sin que se revele la identidad de quien las presenta.

[324] – Enmiendas legales que hacen posible seguridad de los testigos mientras prestan declaración.

[325] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida b) de la recomendación que antecede. No obstante, toma nota de que los temas de protección de funcionarios públicos que denuncien de buena fe actos de corrupción para protegerlos de las amenazas de represalias de las que puedan ser objeto como consecuencia del cumplimiento de esa obligación fueron examinados en forma más general en la Segunda Ronda, y que el Estado analizado recibió similares recomendaciones a ese respecto. En consecuencia en la etapa de seguimiento de esta Ronda Las Bahamas tendrá la oportunidad de proporcionar información más exhaustiva sobre la medida en que está cumpliendo esta recomendación. En virtud de lo que antecede, el Comité considera que la medida b) de la recomendación 1.3 ya no es válida.

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Capacitar adecuadamente a las autoridades y funcionarios en relación con la obligación de denunciar actos de corrupción, y establecer mecanismos de protección para los denunciantes.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.3.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[326] Con respecto a la medida antes referida, en su respuesta el Estado analizado toma nota de que dado el hecho de que la mayor parte del personal del servicio público proviene del público en general, en numerosos llamados realizados a través de los medios de prensa en que se exhorta al

---

<sup>267</sup> Respuestas al Cuestionario, págs. 37 – 39, *supra* nota 4.

público a denunciar actos de corrupción a los diversos organismos competentes. Además, los actos de corrupción que tengan que ver con Oficiales de Policía se denuncian a la Unidad Policial especializada la materia y existe un programa de proveedores de pistas de delitos.<sup>268</sup>

[327] Además, en un documento presentado durante la visita *in situ* el Estado analizado señala que a su juicio no se requiere capacitación, pero sí protección, la cual es proporcionada.<sup>269</sup>

[328] A ese respecto, a menos que se proporcione información adicional es difícil determinar por qué Las Bahamas opina que no se requiere capacitación para autoridades y empleados sobre la importancia de que se denuncien actos de corrupción.

[329] El Comité toma nota de que los temas de protección de funcionarios públicos que de buena fe denuncian actos de corrupción, para protegerlos de las represalias que puedan sufrir como consecuencia del cumplimiento de esa obligación se examinaron en mayor detalle en la Segunda Ronda, y que el Estado analizado recibió una recomendación general de proporcionar capacitación a ese respecto. Por lo tanto en esta Ronda Las Bahamas tendrá la oportunidad de proporcionar información más exhaustiva sobre la medida en que esté cumpliendo esa recomendación sobre el seguimiento.

[330] En virtud de lo que antecede, el Comité considera la reformulación, en los términos siguientes, de la medida d) de la recomendación de la sección 1.3 del Capítulo IV del presente Informe:

[331] Proporcionar capacitación apropiada a altos funcionarios y empleados con respecto a la obligación de denunciar actos de corrupción. (Véase la medida b) de la sección 1.3 del Anexo 1 del presente Informe)

## **2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4, DE LA CONVENCIÓN)**

### Recomendación:

*Reforzar los sistemas de declaración de ingresos, activos y pasivos.*

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Establecer un mecanismo por el cual, dentro de determinado período anterior o inmediato posterior a ser nombrado como Senador o titular de un cargo de alta jerarquía al que se aplique el requisito de la Notificación previsto en la Ley de Divulgación Pública (Aplicación a titulares de cargos públicos y autoridades públicas), las personas en cuestión deban efectuar una declaración de su activo, su pasivo y sus ingresos y los de su cónyuge y sus hijos. Esas declaraciones deberían luego utilizarse para detectar potenciales conflictos de intereses y recomendar las medidas que deba adoptar la persona para evitarlos, asimismo detectar otras violaciones a la ley. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 2.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)*

<sup>268</sup> Respuestas al Cuestionario, pág. 41, *ídem*.

<sup>269</sup> Respuestas al Cuestionario Adicional, pág. 11, *supra* nota 258.

[332] Con respecto a la medida antes mencionada, en su respuesta el Estado analizado señala que ha cumplido ese requisito conforme a lo previsto en la Ley de Difusión Pública.<sup>270</sup>

[333] El Comité toma nota de que si bien la Ley de Difusión Pública dispone que los Senadores deben presentar sus declaraciones dentro de los tres meses siguientes a su elección, no parecen haberse establecido disposiciones que requieran la presentación de tales documentos antes de su elección o cuando su designación esté siendo considerada. El Comité observa que en los casos de los Miembros de la Cámara Baja, conforme a la Ley de Elecciones Parlamentarias toda persona que se postule para una nominación como candidato por cualquier circunscripción debe presentar una declaración de activos, ingresos y pasivos, así como los de su cónyuge y sus hijos, si los tiene.<sup>271</sup> Es con ese espíritu que se formuló la recomendación de que se establezca un requisito similar para los Senadores y para los funcionarios comprendidos en la Notificación de la Aplicación a personas designadas para cargos públicos y altos funcionarios públicos, en virtud de la cual, antes de la designación se debe proporcionar una declaración de activos, ingresos y pasivos. Además, al parecer la sección 9 de la Ley de Difusión Pública permitiría a una autoridad público, cuando se le notifica el 2 de marzo de un año que su cargo está regido por la Ley, no presentar una declaración hasta el 1 de marzo del año siguiente. Por esas razones durante la Primera Ronda el Comité formuló la medida a) de la recomendación que antecede.

[334] En virtud de lo que antecede, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la implementación de ese requisito. (Véase la recomendación a) de la sección 2 del Anexo 1 del presente Informe)

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Considerar la posibilidad de dar acceso al público a las declaraciones formuladas por quienes hayan sido designados para cargos superiores, cuando sea apropiado.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 2.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[335] Con respecto a la medida antes mencionada, en su respuesta el Estado analizado señala que ha cumplido esa disposición, y hace referencia a la sección 9(1) de la Ley de Difusión Pública y a la Notificación de la Aplicación de la Ley de Difusión Pública a Personas Designadas para Cargos Públicos y Altos Funcionarios Públicos.<sup>272</sup>

[336] El Comité toma nota de que la sección 9(2) de la Ley de Difusión Pública prohíbe expresamente la aplicación de la sección 6(2) de la Ley de titulares de Cargos Públicos y Altos Funcionarios Públicos, que prevé al publicación en el Diario Oficial de un declaración, en el caso de Senadores o Parlamentarios. Como no existe ninguna otra disposición que permita poner a disposición del público un resumen de esos altos cargos, el Comité señala la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la implementación de la misma. (Véase la recomendación b) de la sección 2 del Anexo 1 del presente Informe)

<sup>270</sup> Respuestas al Cuestionario, págs. 43 – 44, *supra* nota 4.

<sup>271</sup> Ley de Elecciones Parlamentarias, sección 37,

[http://laws.bahamas.gov.bs/cms3/images/LEGISLATION/PRINCIPAL/1992/1992-0001/ParliamentaryElectionsAct\\_1.pdf](http://laws.bahamas.gov.bs/cms3/images/LEGISLATION/PRINCIPAL/1992/1992-0001/ParliamentaryElectionsAct_1.pdf)

<sup>272</sup> Respuestas al Cuestionario, pág. 44, *supra* nota 4.

### 3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA CONVENCION)

#### Recomendación 3.1:

*Reforzar el sistema de seguimiento de la aplicación de las disposiciones del Artículo III, párrafos 1, 2 y 4.*

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Establecer órganos de control superior para las oficinas que actualmente no están sujetas a control alguno.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 3.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[337] Con respecto a la medida antes mencionada, en su respuesta el Estado analizado señala que todos sus órganos de supervisión tienen controles, por lo cual están llamados a rendir cuentas.<sup>273</sup> Además, en un documento presentado durante la visita *in situ* el Estado analizado señala que el órgano de supervisión para la judicatura es la Corte, en tanto que los órganos correspondientes al personal dependiente del Gobernador General son la Comisión del Servicio Público y la Junta de Apelaciones del Servicio Público.<sup>274</sup>

[338] El Comité toma nota de que la recomendación se formuló por el hecho de que las Órdenes Generales no se aplican a la conducta del personal dependiente del Gobernador General, los Jueces de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones, ni del personal empleado en el Departamento de Turismo. Además, los titulares de cargos políticos, el cargo de los miembros de la Comisión del Servicio Público y de las comisiones permanentes, los miembros de juntas, comités u órganos similares establecidos por la ley y otros cargos especificados como ajenos a la condición de cargos públicos a los efectos de las disposiciones constitucionales tampoco están comprendidos en la esfera de competencia de un órgano de supervisión.<sup>275</sup> Además, si bien algunos funcionarios dependientes del Gobernador General son funcionarios públicos y están comprendidos en la esfera de competencia de la Comisión, son funcionarios públicos y están sujetos a la supervisión de la Comisión del Servicio Público y se rigen por las Órdenes Generales, como lo señala el Estado analizado en relación con la medida a) de la recomendación 1.1, no todos han sido convertidos en funcionarios públicos. Por otra parte, no resulta claro cómo se desempeña la Corte como órgano de supervisión si no existen disposiciones que regulan la conducta de la Judicatura.

[339] En virtud de lo que antecede, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la implementación de ese régimen. (Véase la recomendación 3.1 a) de la sección 3 del Anexo 1 del presente Informe)

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

---

<sup>273</sup> *Ídem*, pág. 45.

<sup>274</sup> Respuestas al Cuestionario Adicional, pág. 11, *supra* nota 258.

<sup>275</sup> Véase la pág. 17 del Informe de la Primera Ronda de Examen, *supra* nota 259.

*Considerar la posibilidad de disponer en el Código de Ética para Ministros y Secretarios Parlamentarios la creación de un órgano superior de control de la conducta de los mismos.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 3.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[340] Con respecto a la medida antes mencionada, en su respuesta el Estado analizado señala que salvo la Comisión de Difusión Pública no se prevé en el Código de Ética ningún órgano de supervisión para Ministros y Secretarios Parlamentarios.<sup>276</sup> No obstante, en un documento presentado durante la visita *in situ* el Estado analizado señaló que el Comité de Contabilidad Pública cumple esa función.<sup>277</sup>

[341] El Comité observa que la Comisión de Difusión Pública recibe las declaraciones de las personas sujetas a la Ley de Difusión Pública; ella, sin embargo, no se menciona en el Código de Ética para Ministros y Secretarios Parlamentarios como órgano de supervisión para ese Código. Tampoco el Comité de Contabilidad Pública se desempeña como órgano de supervisión de los Ministros y Secretarios Parlamentarios para asegurar que cumplan las disposiciones establecidas a su respecto por el Código de Ética.

[342] En virtud de lo que antecede, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la implementación de ese régimen. (Véase la recomendación 3.1 b) de la sección 3 del Anexo 1 del presente Informe)

Recomendación 3.2 sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Establecer órganos, o conceder facultades adicionales a un órgano u órganos existentes, para garantizar el apropiado seguimiento de los mecanismos que se recomiendan en la sección 4, siguiente (Artículo III, párrafo 11).*

[343] Con respecto a la recomendación que antecede, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos. A ese respecto, el Comité señala, como pasos que contribuyen a la implementación de la medida, los siguientes:<sup>278</sup>

[344] – Celebración de reuniones trimestrales entre miembros electos de *Civil Society Bahamas*, una sociedad civil global que representa al sector privado y a organizaciones no gubernamentales, y la Oficina de la Procuraduría General.

[345] – *Civil Society Bahamas* trabaja en la redacción de proyectos de leyes que han de presentarse a la Oficina de la Procuraduría General.

[346] El Comité señala que se reunió con representantes de *Civil Society Bahamas* durante la visita *in situ* y les proporcionó una copia del proyecto de Ley de Organizaciones de la Sociedad Civil de 2014.<sup>279</sup> Los representantes señalaron que la Oficina de la Procuraduría General goza de mucho

<sup>276</sup> Respuestas al Cuestionario, pág. 46, *supra* nota 4.

<sup>277</sup> Respuestas al Cuestionario Adicional, pág. 12, *supra* nota 258.

<sup>278</sup> Respuestas al Cuestionario, pág. 47, *supra* nota 4.

<sup>279</sup> Proyecto de ley elaborado por organizaciones de la sociedad civil, 2014, [http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4\\_bhs.htm](http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4_bhs.htm)

respeto y que ha trabajado con ella en la redacción del referido proyecto. Como se señaló en la sección de fundamentos del proyecto:<sup>280</sup>

[347] *“El Proyecto de Ley de Organizaciones de la Sociedad Civil de 2014 tiene como objeto disponer el establecimiento y registro de organizaciones de la sociedad civil, regular el funcionamiento de tales organizaciones a los efectos de generar transparencia y rendición de cuentas, establecer normas mínimas que hayan de observar todas las organizaciones de ese género, y servir objetivos conexos.”*

[348] El *proyecto*, conforme a la sección 15 del mismo, establecería una organización global u órgano supremo de las organizaciones de la sociedad civil, *Civil Society Bahamas*, que alentaría y respaldaría el desarrollo de organizaciones de la sociedad civil, mantendría una lista de todas las entidades de ese género existentes en el Estado, registradas o no, y sería un centro de intercambio de información proveniente del Gobierno de Las Bahamas. Conforme a su sección 17 se establecería dentro de la Oficina del Primer Ministro una Secretaría de la Sociedad Civil que entre otras cosas coordinaría la transferencia de información hacia y desde *Civil Society Bahamas* y el Gobierno de Las Bahamas y organizaría reuniones mensuales con *Civil Society Bahamas* y agentes del Gobierno de Las Bahamas. Además, la sección 8 de dicho proyecto prevé que los Ministerios deben coordinar las actividades de las organizaciones de la sociedad y civil y el Gobierno, y las relaciones mutuas, para establecer procedimientos de consulta y otros asuntos conexos que afecten al desarrollo humano, ambiental y económico sostenible en Las Bahamas.

[349] Además, en un documento presentado durante la visita *in situ* el Estado analizado señala lo siguiente con respecto al proyecto de Ley de Organizaciones de la Sociedad Civil de 2014:<sup>281</sup>

[350] *“Hemos redactado y hecho circular el Proyecto, que es un proyecto de ley de establecimiento y registro de organizaciones de la sociedad civil; promoción y estímulo del desarrollo de la sociedad civil para regular sus operaciones a fin de generar transparencia, rendición de cuentas, y establecimiento de un estándar mínimo que hayan de cumplir todas las organizaciones de la sociedad civil. En el lapso de los últimos dos años y tres meses hemos celebrado reuniones con el Bahamas Christian Council y otros interesados para obtener apoyo para una amplia gama de disposiciones legales. En esas reuniones hemos exhortado a los asistentes a deliberar sobre los problemas que enfrentan las diferentes comunidades, y nuestra actividad de extensión ha abarcado varias medida anticorrupción. Hemos procurado alentar la formación de una asociación público-privada.”*

[351] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la recomendación que antecede, así como de la necesidad de seguir prestando atención a la misma, teniendo en cuenta que el proyecto de Ley de Organizaciones de la Sociedad Civil de 2014 aún no ha sido sancionado. (Véase la recomendación 3.2 de la sección 3 del Anexo 1 del presente Informe)

#### **4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11 DE LA CONVENCIÓN)**

<sup>280</sup> *Ídem.*, pág. 17.

<sup>281</sup> Respuestas al Cuestionario Adicional, pág. 13, *supra* nota 258.

#### 4.1. Mecanismos de participación en general

Recomendación sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Crear sistemas de procedimientos transparentes adicionales, que permitan a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar con mayor eficacia en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 4.1.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[352] Con respecto a la recomendación que antecede, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos. A ese respecto, el Comité señala, como pasos que contribuyen a la implementación de la medida, los siguientes:<sup>282</sup>

[353] – Se mencionan los esfuerzos realizados por *Civil Society Bahamas* para lograr la sanción de normas legales que reconozcan, regulen y fortalezcan las organizaciones de la sociedad civil, y además, a través de su participación en comités nacionales, para que influyan en la política nacional y la rendición de cuentas por el Gobierno, *Civil Society Bahamas* podrá desempeñarse como portavoz central de una contribución nacional en todos los niveles de la sociedad, en el sector público, la educación, la industria y las relaciones internacionales. También se hace referencia a la participación de organizaciones de la sociedad civil en procesos nacionales de adhesión a tratados tales como la Convención, a través de consultas. El Estado analizado menciona también el establecimiento de un grupo de trabajo nacional como excelente idea para obtener retroinformación de la comunidad en relación con la Convención y con otros tratados.

[354] – El Estado analizado también menciona el hecho de que se está considerando el proyecto de Ley de Organizaciones de la Sociedad Civil de 2014.

[355] El Comité toma nota de que durante la Primera Ronda de Las Bahamas generó preocupación el que no se hubieran establecido mecanismos formales para dar acceso a información a la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales; realización de consultas con esas entidades, y participación activa de las mismas en la administración pública y en el seguimiento de la misma.<sup>283</sup> El Comité toma nota de que aún no se han establecido esos mecanismos formales y que si bien el proyecto de Ley de Organizaciones de la Sociedad Civil de 2014 representa un paso hacia esa meta, aún no ha sido sancionado.

[356] En virtud de lo que antecede, el Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la recomendación que antecede, así como de la necesidad de que siga prestando atención a ese objetivo. (Véase la recomendación 4.1 de la sección 4 del Anexo 1 del presente Informe)

#### 4.2. Mecanismos para el acceso a la información

Recomendación 4.2.1:

<sup>282</sup> Respuestas al Cuestionario, págs. 48 – 49, *supra* nota 4.

<sup>283</sup> Informe de la Primera Ronda de Examen, pág. 19, *supra* nota 259.

*Establecer un sistema de libertad de información o acceso al sistema de información pública susceptible de aplicación coercitiva.*

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Establecer claras normas escritas sobre los tipos de información que se proporcionarán en el marco del sistema.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 4.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[357] Con respecto a la medida antes mencionada, en su respuesta el Estado analizado señala que se presentó en el Parlamento un proyecto de Ley sobre Libertad de Información, cuyo texto fue distribuido entre diversos miembros de la sociedad civil para obtener comentarios y realizar consultas.<sup>284</sup> Subsiguientemente, en 2011, se sancionó una Ley de Libertad de Información, que, sin embargo, no ha entrado en vigencia.

[358] Durante la visita *in situ* los representantes de la Oficina de la Procuraduría General señalaron que existe insatisfacción con respecto a algunos aspectos de la ley, que fueron copiados de las normas legales imperantes en las Islas Caimán. Como consecuencia se está llevando a cabo un examen más amplio de otros modelos y se ha encomendado a la Comisión de Reforma Legal la tarea de examinar el régimen legal imperante en Nueva Zelanda, Singapur y Australia. Además, se ha establecido un grupo de trabajo interministerial integrado por representantes del Ministerio de Educación, Ministerio de Finanzas y la Oficina de la Procuraduría General para examinar la Ley sobre Libertad de Información para este fin.<sup>285</sup>

[359] El Comité observa también que el Estado analizado, en su respuesta, manifestó que la implementación de la Ley de Libertad de Información requerirá información adicional para altos funcionarios públicos y un enfoque de introducción por etapas para hacer efectivas todas sus diversas disposiciones.<sup>286</sup>

[360] El Comité toma nota de que en el Informe para la Primera Ronda adoptado para Las Bahamas, el Estado analizado había expresado que no se han establecido mecanismos de regulación y facilitación del acceso de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales a información en la esfera del control de las instituciones públicas. El Comité observa que esa situación persiste, no obstante la sanción de una ley, por el Parlamento, que aún no ha entrado en vigencia.

[361] A ese respecto, durante la visita *in situ* los representantes de la Cámara de Comercio de Las Bahamas, así como de *Civil Society Bahamas*, expresaron su preocupación de que la Ley de Libertad de Información, si bien sancionada, aún no ha entrado en vigencia. En especial, los representantes de *Civil Society Bahamas* señalaron que por ese motivo no se han establecido políticas y procedimientos sobre la cuestión ni se cuenta con un mecanismo de solicitud de información para recibir respuestas del Gobierno.

[362] En virtud de lo que antecede, el Comité considera la reformulación de la medida a) de la recomendación correspondiente a la sección 4.2 del Capítulo IV del presente Informe, en los términos siguientes:

<sup>284</sup> Respuestas al Cuestionario, pág. 50, *supra* nota 4.

<sup>285</sup> Véase la Presentación *in situ* de la Oficina de la Procuraduría General, pág. 19, *supra* nota 17.

<sup>286</sup> Respuestas al Cuestionario, pág. 50, *supra* nota 4.



[363] Sancionar una Ley de Libertad de Información que regule y facilite el acceso del público a información con fines de control de las instituciones públicas. (Véase la medida a) de la recomendación 4.2.1 de la sección 4 del Anexo 1 del presente Informe)

[364] Establecer claros estándares con respecto a los tipos de información que se proporcionarán en virtud de la Ley de Libertad de Información. (Véase la medida b) de la recomendación 4.2.1 de la sección 4 del presente Informe)

[365] Implementar programas de capacitación y difusión con respecto a la Ley de Libertad de Información, para facilitar la comprensión, por funcionarios públicos y ciudadanos, de los mecanismos previstos en dicha ley. (Véase la medida c) de la recomendación 4.2.1 de la sección 4 del presente Informe)

[366] Establecer un cronograma de implementación de las disposiciones de la Ley de Libertad de Información, estableciendo prioridades y medidas que hayan de llevarse a cabo, plazos para su ejecución y objetivos anuales que hayan de cumplirse, y difundir ese cronograma para que el público pueda valorar los esfuerzos llevados a cabo por Las Bahamas para avanzar en la implementación de la Ley. (Véase la medida d) de la recomendación 4.2.1 de la sección 4 del presente Informe)

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Establecer normas que reconozcan el derecho de toda persona de solicitar información o consultar u obtener copias de documentos referentes a actuaciones oficiales que estén en poder o bajo el control de instituciones públicas, a menos que se trate de documentos protegidos por la ley. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 4.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)*

[367] Con respecto a la medida antes mencionada, en su respuesta el Estado analizado señala que el Gobierno de Las Bahamas reconoce el derecho de todos los ciudadanos y el proceso de consulta con la sociedad civil, las empresas y las instituciones religiosas en la implementación de la Ley de Libertad de Información.<sup>287</sup> Además, el Estado analizado señala que la principal dificultad es que la Ley aún no ha entrado en vigor.

[368] En virtud de lo que antecede y también de las observaciones del Estado analizado con respecto a la medida a) de la recomendación, el Comité considera la reformulación de la medida b) de la recomendación correspondiente a la sección 4.2 del Capítulo IV del presente Informe, en los términos siguientes:

[369] Establecer en una Ley de Libertad de Información estándares que reconozcan el derecho de todas las personas de solicitar información o consultar u obtener copias de los documentos que estén en poder o bajo el control de instituciones públicas, relacionados con actividades oficiales, salvo en los casos en que ese material esté amparado por medidas de protección legal. (Véase la medida e) de la recomendación 4.2.1 de la sección 4 del presente Informe).

Recomendación 4.2.2 sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

---

<sup>287</sup> Ídem., pág. 51.

*Establecer el requisito de que todas las entidades públicas, en la medida en que sea factible, publiquen sus procedimientos y otra información pertinente mediante métodos de comunicaciones tales como publicaciones, centros de difusión, medios de comunicación de masas y sitios en Internet.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 4.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[370] Con respecto a la recomendación que antecede, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos. A ese respecto, el Comité señala, como pasos que contribuyen a la implementación de la medida, los siguientes:<sup>288</sup>

[371] - El Gobierno de Las Bahamas tiene un sitio web oficial en [www.bahamas.gov.bs](http://www.bahamas.gov.bs) y ha tratado de adoptar sistemas de tecnología introduciendo el sistema de gobierno electrónico, que permite realizar transacciones en línea; por ejemplo presentación de solicitudes de pasaportes, acceso a registros policiales, búsqueda de escrituras y documentos de la Oficina de Registro General, renovación de licencias de conducir.

[372] También se hace mención al establecimiento de un sitio *web* de la Oficina de la Procuraduría General, que contiene información sobre su labor, incluida la del Departamento Jurídico y de la Fiscalía. También registra la agenda legislativa, y en ella constan los proyectos de leyes presentados al Parlamento. El Estado analizado señala también que esa información es útil para los estudiantes de Derecho, quienes que pueden encontrar en el sitio las funciones de diferentes dependencias de la Oficina de la Procuraduría General, y los profesionales en ejercicio tienen allí un lugar conveniente para enterarse de los proyectos de leyes que se prevé que sean presentados al Parlamento, los ya presentados, y conectarse directamente con *Laws Online* para obtener acceso a la legislación escrita de Las Bahamas.

[373] – El Departamento de Tecnología de Información solicita a los organismos públicos que presenten información para el sitio *web* oficial del Gobierno de Las Bahamas.

[374] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la recomendación que antecede, así como de la necesidad de que siga prestando atención al asunto, teniendo en cuenta que los esfuerzos tendientes a dar a conocer los procedimientos y otra información pertinente de entidades gubernamentales a través del uso de mecanismos de comunicación, centros de difusión, medios de comunicación masiva y sitios de Internet al parecer se realizan *ad hoc*, en lugar de estar impuestos por políticas establecidas por el Gobierno. Por ejemplo, importantes órganos de supervisión tales como la Comisión de Difusión Pública y el Departamento del Auditor General, carecen de sitios *web*. (Véase la recomendación 4.2.2 de la sección 4 del Anexo 1 del presente Informe)

### **4.3. Mecanismos de consulta**

Recomendación 4.3.1 sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Establecer mecanismos de consulta que permitan a las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil para generar opiniones y propuestas para que se tengan en cuenta a los efectos de*

---

<sup>288</sup> Ídem., págs. 52 – 53.

*prevenir, detectar, investigar y castigar la corrupción.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 4.3 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[375] Con respecto a la medida antes mencionada, en su respuesta el Estado analizado señala que sólo se han establecidos mecanismos de consulta *ad hoc*; no así mecanismos de consulta formales.<sup>289</sup>

[376] Además, en un documento presentado durante la visita *in situ*, el Estado analizado señala lo siguiente con respecto al proyecto de Ley sobre Organizaciones de la Sociedad Civil, de 2014.<sup>290</sup>

[377] “*Hemos redactado y hecho circular el Proyecto, que es un proyecto de ley de establecimiento y registro de organizaciones de la sociedad civil, promoción y estímulo del desarrollo de la sociedad civil para regular sus operaciones a fin de generar transparencia, rendición de cuentas y establecimiento de un estándar mínimo que hayan de cumplir todas las organizaciones de la sociedad civil. En el lapso de los últimos dos años y tres meses hemos celebrado reuniones con el Bahamas Christian Council y otros interesados para obtener apoyo para una amplia gama de disposiciones legales. En esas reuniones hemos exhortado a los asistentes a deliberar sobre los problemas que enfrentan las diferentes comunidades, y nuestra actividad de extensión ha abarcado varias medida anticorrupción. Hemos procurado alentar la formación de una asociación público-privada.*”

[378] Además, durante la visita *in situ* los representantes de la Oficina de la Procuraduría General manifestaron que se han publicado en línea proyectos de leyes para recibir opiniones y puntos de vista de la sociedad civil.

[379] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la recomendación que antecede, así como de la necesidad de que siga prestando atención al respecto, teniendo en cuenta que el proyecto de Ley sobre Organizaciones de la Sociedad Civil, de 2014 aún no ha sido sancionado. (Véase la recomendación 4.3.1 de la sección 4 del Anexo 1 del presente Informe)

Recomendación 4.3.2 sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Diseñar e implementar programas que publiciten los mecanismos de consulta y, cuando corresponda, capacitar y proporcionar los instrumentos necesarios para la efectiva implementación de esos mecanismos.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 4.3 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[380] Con respecto a la medida antes mencionada, en su respuesta el Estado analizado señala que el Servicio de Información de Las Bahamas publica los resultados de las consultas, y que el trámite de las mismas es informal.<sup>291</sup>

[381] Además, en un documento presentado durante la visita *in situ*, el Estado analizado señala lo siguiente con respecto al proyecto de Ley sobre Organizaciones de la Sociedad Civil, de 2014.<sup>292</sup>

---

<sup>289</sup> *Ídem.*, pág. 53.

<sup>290</sup> Respuestas al Cuestionario Adicional, pág. 13, *supra* nota 258.

<sup>291</sup> Respuestas al Cuestionario, pág. 54, *supra* nota 4.

<sup>292</sup> Respuestas al Cuestionario Adicional, pág. 13, *supra* nota 258.

[382] *“Hemos redactado y hecho circular el Proyecto, que es un proyecto de ley de establecimiento y registro de organizaciones de la sociedad civil, promoción y estímulo del desarrollo de la sociedad civil para regular sus operaciones a fin de generar transparencia, rendición de cuentas y establecimiento de un estándar mínimo que hayan de cumplir todas las organizaciones de la sociedad civil. En el lapso de los últimos dos años y tres meses hemos celebrado reuniones con el Bahamas Christian Council y otros interesados para obtener apoyo para una amplia gama de disposiciones legales. En esas reuniones hemos exhortado a los asistentes a deliberar sobre los problemas que enfrentan las diferentes comunidades, y nuestra actividad de extensión ha abarcado varias medidas anticorrupción. Hemos procurado alentar la formación de una asociación público-privada.”*

[383] Además, durante la visita *in situ* los representantes de la Oficina de la Procuraduría General manifestaron que se han publicado en línea proyectos de leyes para recibir opiniones y puntos de vista de la sociedad civil.

[384] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la recomendación que antecede, así como de la necesidad de que siga prestando atención al respecto, teniendo en cuenta que el proyecto de Ley sobre Organizaciones de la Sociedad Civil, de 2014 aún no ha sido sancionado ni resulta claro qué pasos se hayan dado para dar a conocer los mecanismos de consulta disponibles, ni la capacitación que se proporcione a ese respecto. (Véase la recomendación 4.3.2 de la sección 4 del Anexo 1 del presente Informe)

#### **4.4. Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública**

##### Recomendación:

*Establecer mecanismos que alienten a las organizaciones no gubernamentales y a la sociedad civil a participar en la gestión pública.*

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Establecer mecanismos que promuevan la participación de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil en programas de prevención de la corrupción.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 4.4 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[385] Con respecto a la medida antes mencionada, en su respuesta el Estado analizado señala que consulta a la sociedad civil sobre temas de importancia nacional, en forma de reuniones abiertas, y que la retroinformación proporcionada se utiliza para redactar normas legales y políticas.<sup>293</sup> Además señala que esas consultas se realizan trimestralmente.

[386] Además, en un documento presentado durante la visita *in situ*, el Estado analizado señala lo siguiente con respecto al proyecto de Ley sobre Organizaciones de la Sociedad Civil, de 2014.<sup>294</sup>

[387] *“Hemos redactado y hecho circular el Proyecto, que es un proyecto de ley de establecimiento y registro de organizaciones de la sociedad civil, promoción y estímulo del desarrollo de la sociedad*

<sup>293</sup> Respuestas al Cuestionario, pág. 55, *supra* nota 4.

<sup>294</sup> Respuestas al Cuestionario Adicional, pág. 13, *supra* nota 258.

*civil para regular sus operaciones a fin de generar transparencia, rendición de cuentas y establecimiento de un estándar mínimo que hayan de cumplir todas las organizaciones de la sociedad civil. En el lapso de los últimos dos años y tres meses hemos celebrado reuniones con el Bahamas Christian Council y otros interesados para obtener apoyo para una amplia gama de disposiciones legales. En esas reuniones hemos exhortado a los asistentes a deliberar sobre los problemas que enfrentan las diferentes comunidades, y nuestra actividad de extensión ha abarcado varias medida anticorrupción. Hemos procurado alentar la formación de una asociación público-privada.”*

[388] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la recomendación que antecede, así como de la necesidad de que siga prestando atención al respecto, teniendo en cuenta que el proyecto de Ley sobre Organizaciones de la Sociedad Civil, de 2014 aún no ha sido sancionado ni resulta claro qué pasos se hayan dado para establecer mecanismos que alienten a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales a participar en programas de prevención de la corrupción, tales como el establecimiento de directrices o políticas gubernamentales con ese fin. (Véase la medida a) de la recomendación 4.4 de la sección 4 del Anexo I del presente Informe)

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas

*Dar a conocer al público los mecanismos de prevención de la corrupción existentes.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 4.4 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[389] Con respecto a la medida antes mencionada, en su respuesta el Estado analizado señala que publica anuncios, lleva a cabo reuniones abiertas y realiza cursos de capacitación, y utiliza medios de difusión, sitios *web* gubernamentales, periódicos, el sitio *The Bahamas Laws On-Line*, la radio y televisión y los medios sociales.<sup>295</sup> Además manifiesta que realiza trimestralmente las referidas consultas.

[390] Además, en un documento presentado durante la visita *in situ*, el Estado analizado señala lo siguiente con respecto al proyecto de Ley sobre Organizaciones de la Sociedad Civil, de 2014.<sup>296</sup>

[391] *“Hemos redactado y hecho circular el Proyecto, que es un proyecto de ley de establecimiento y registro de organizaciones de la sociedad civil, promoción y estímulo del desarrollo de la sociedad civil para regular sus operaciones a fin de generar transparencia, rendición de cuentas y establecimiento de un estándar mínimo que hayan de cumplir todas las organizaciones de la sociedad civil. En el lapso de los últimos dos años y tres meses hemos celebrado reuniones con el Bahamas Christian Council y otros interesados para obtener apoyo para una amplia gama de disposiciones legales. En esas reuniones hemos exhortado a los asistentes a deliberar sobre los problemas que enfrentan las diferentes comunidades, y nuestra actividad de extensión ha abarcado varias medida anticorrupción. Hemos procurado alentar la formación de una asociación público-privada.”*

<sup>295</sup> Respuestas al Cuestionario, pág. 56, *supra* nota 4.

<sup>296</sup> Respuestas al Cuestionario Adicional, pág. 13, *supra* nota 258.

[392] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la recomendación que antecede, teniendo en cuenta que el proyecto de Ley sobre Organizaciones de la Sociedad Civil, de 2014, aún no ha sido sancionado ni resulta claro qué pasos se hayan dado para promover la sensibilidad pública sobre los mecanismos de prevención de la corrupción disponibles, tales como el establecimiento de directrices o políticas públicas a esos efectos. (Véase la medida b) de la recomendación 4.4 de la sección 4 del Anexo 1 del presente Informe)

#### **4.5. Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública**

##### Recomendación:

*Establecer mecanismos que alienten a las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil a participar en el seguimiento de la gestión pública y generar opiniones y propuestas para que se tengan en cuenta para la prevención, detección, investigación y castigo de la corrupción.*

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Promover, cuando corresponda, métodos que permitan, faciliten y ayuden a las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil a desarrollar actividades de seguimiento de la gestión pública y en la prevención de la corrupción.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 4.5 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[393] Con respecto a la medida antes mencionada, en su respuesta el Estado analizado señala que en reuniones abiertas se insta a la sociedad civil a elaborar mecanismos de seguimiento de una adecuada administración pública y de prevención de la corrupción.<sup>297</sup>

[394] Además, en un documento presentado durante la visita *in situ*, el Estado analizado señala lo siguiente con respecto al proyecto de Ley sobre Organizaciones de la Sociedad Civil, de 2014.<sup>298</sup>

[395] “Hemos redactado y hecho circular el Proyecto, que es un proyecto de ley de establecimiento y registro de organizaciones de la sociedad civil, promoción y estímulo del desarrollo de la sociedad civil para regular sus operaciones a fin de generar transparencia, rendición de cuentas y establecimiento de un estándar mínimo que hayan de cumplir todas las organizaciones de la sociedad civil. En el lapso de los últimos dos años y tres meses hemos celebrado reuniones con el Bahamas Christian Council y otros interesados para obtener apoyo para una amplia gama de disposiciones legales. En esas reuniones hemos exhortado a los asistentes a deliberar sobre los problemas que enfrentan las diferentes comunidades, y nuestra actividad de extensión ha abarcado varias medida anticorrupción. Hemos procurado alentar la formación de una asociación público-privada.”

[396] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la recomendación que antecede, teniendo en cuenta que el proyecto de Ley sobre Organizaciones de la Sociedad Civil, de 2014, aún no ha sido sancionado ni resulta claro qué pasos se hayan dado para establecer mecanismos tendientes a promover, cuando corresponda, métodos que

<sup>297</sup> Respuestas al Cuestionario, pág. 57, *supra* nota 4.

<sup>298</sup> Respuestas al Cuestionario Adicional, pág. 13, *supra* nota 258.

permitan, faciliten y ayuden a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales a desarrollar actividades de seguimiento de la administración pública y de prevención de la corrupción, tales como el establecimiento de directrices o políticas públicas a esos efectos, tales como el establecimiento de directrices o políticas gubernamentales para ese fin. (Véase la medida a) de la recomendación 4.5 de la sección 4 del Anexo 1 del presente Informe)

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Diseñar y aplicar programas específicos tendientes a dar publicidad a los mecanismos de promoción de la participación en seguimiento de la gestión pública.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 4.5 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[397] Con respecto a la medida antes mencionada, en su respuesta el Estado analizado señala que celebra consultas con la sociedad civil, empresas e instituciones religiosas y el público en general en relación con un proyecto de *referéndum* constitucional.<sup>299</sup>

[398] Además, en un documento presentado durante la visita *in situ*, el Estado analizado señala lo siguiente con respecto al proyecto de Ley sobre Organizaciones de la Sociedad Civil, de 2014.<sup>300</sup>

[399] *“Hemos redactado y hecho circular el Proyecto, que es un proyecto de ley de establecimiento y registro de organizaciones de la sociedad civil, promoción y estímulo del desarrollo de la sociedad civil para regular sus operaciones a fin de generar transparencia, rendición de cuentas y establecimiento de un estándar mínimo que hayan de cumplir todas las organizaciones de la sociedad civil. En el lapso de los últimos dos años y tres meses hemos celebrado reuniones con el Bahamas Christian Council y otros interesados para obtener apoyo para una amplia gama de disposiciones legales. En esas reuniones hemos exhortado a los asistentes a deliberar sobre los problemas que enfrentan las diferentes comunidades, y nuestra actividad de extensión ha abarcado varias medidas anticorrupción. Hemos procurado alentar la formación de una asociación público-privada.”*

[400] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la recomendación que antecede, así como de la necesidad de que siga prestando atención al respecto, teniendo en cuenta que el proyecto de Ley sobre Organizaciones de la Sociedad Civil, de 2014, aún no ha sido sancionado ni resulta claro qué pasos se hayan dado para diseñar e implementar programas específicos encaminados a hacer conocer los mecanismos tendientes a alentar la participación en el proceso de seguimiento de la administración pública, tales como el establecimiento de directrices o políticas públicas a esos efectos. (Véase la medida b) de la recomendación 4.5 de la sección 4 del Anexo 1 del presente Informe)

## **5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV)**

Recomendación 5.1.1 sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

<sup>299</sup> Respuestas al Cuestionario, pág. 58, *supra* nota 4.

<sup>300</sup> Respuestas al Cuestionario Adicional, pág. 13, *supra* nota 258.

*Diseñar y aplicar un programa general de información y capacitación de las autoridades competentes y a los funcionarios públicos con respecto a las disposiciones relacionadas con la asistencia judicial mutua prevista en la Convención Interamericana contra la Corrupción y en otros tratados suscritos por Bahamas.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 5.1.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[401] Con respecto a la recomendación que antecede, en su respuesta el Estado analizado proporciona información sobre el proceso de asistencia jurídica mutua seguido en Las Bahamas.<sup>301</sup> A ese respecto el Comité señala que la información fue considerada y analizada para el Informe de la Primera Ronda de Las Bahamas.<sup>302</sup> El Estado analizado también menciona la sanción de la Ley (de Enmienda) de Lucha contra el Terrorismo y de la Ley (de Enmienda) de Prevención del Soborno. En virtud de lo que antecede, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la implementación de esas normas. (Véase la recomendación 5.1.1 de la sección 5 del Anexo 1 del presente Informe).

Recomendación 5.1.2 sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Dar a conocer a las autoridades competentes de los países con los que Bahamas mantiene estrechas o continuas relaciones de cooperación mutua los requisitos que deben cumplirse para preparar peticiones, así como la documentación que debe adjuntarse.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 5.1.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[402] Con respecto a la recomendación que antecede, en su respuesta el Estado analizado señala que Las Bahamas ha publicado en el sitio *web* de la OEA y en el sitio web del Gobierno de Las Bahamas un manual de procedimiento en relación con los procedimientos internacionales de asistencia. Además, se ha establecido una Unidad de Cooperación Jurídica Internacional para manejar todas las solicitudes internacionales.<sup>303</sup>

[403] A ese respecto el Comité señala que la información proporcionada fue considerada y analizada para el Informe de la Segunda Ronda adoptado para Las Bahamas.<sup>304</sup> Además, el Comité no pudo encontrar en línea en el sitio *web* del Gobierno los procedimientos internacionales de asistencia. En virtud de lo que antecede, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la implementación de la referida recomendación. (Véase la recomendación 5.1.2 de la sección 5 del Anexo 1 del presente Informe)

Recomendación 5.2.1 sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Realizar un examen general de los ámbitos específicos en que Bahamas podría necesitar o recibir en forma útil cooperación técnica mutua para prevenir, detectar, investigar y castigar actos de corrupción y, sobre la base de ese examen, diseñar y aplicar una estrategia general que permita a Bahamas acudir a otros Estados partes o no partes de la Convención y a instituciones financieras que participen en la cooperación internacional, para determinar la cooperación técnica necesaria.*

<sup>301</sup> Respuestas al Cuestionario, págs. 59 – 60, *supra* nota 4.

<sup>302</sup> Informe de la Primera Ronda, págs. 20 – 21, *supra* nota 259.

<sup>303</sup> Respuestas al Cuestionario, pág. 61, *supra* nota 4.

<sup>304</sup> Informe de la Segunda Ronda de Examen, pág. 34, [http://www.oas.org/juridico/english/mesicic\\_II\\_inf\\_bhs\\_en.pdf](http://www.oas.org/juridico/english/mesicic_II_inf_bhs_en.pdf)



(La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 5.2.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[404] Con respecto a la recomendación que antecede, en su respuesta el Estado analizado señala que Las Bahamas mantiene varios acuerdos con partes con las que no está vinculada con tratados, medio a través del cual mantiene un continuo proceso de examen para determinar mejoras necesarias.<sup>305</sup> En virtud de lo que antecede, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la implementación de la referida recomendación. (Véase la recomendación 5.2.1 de la sección 5 del Anexo 1 del presente Informe)

Recomendación 5.2.2 sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Promover programas de intercambio de cooperación técnica con otros Estados partes con respecto a mecanismos y métodos eficaces de prevención, detección, investigación y castigo de actos de corrupción.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 5.2.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[405] Con respecto a la recomendación que antecede, en su respuesta el Estado analizado señala que Las Bahamas ha asistido a diversas reuniones, foros y seminarios y participado en los mismos; por ejemplo los de las MESICIC, el Grupo de Trabajo de Acción Financiera del Caribe y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.<sup>306</sup> En virtud de lo que antecede, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la implementación de dicha recomendación. (Véase la recomendación 5.2.2 de la sección 5 del Anexo 1 del presente Informe)

## **6. AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN)**

Recomendación 6.1 sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Notificar formalmente a la Secretaría General de la OEA la designación de la autoridad central, conforme a las formalidades preceptivas.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 6.1 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[406] Con respecto a la recomendación que antecede, en su respuesta el Estado analizado proporciona información que fue examinada en el Informe para la Primera Ronda adoptado para Las Bahamas.<sup>307</sup> En virtud de lo que antecede, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la implementación de dicha recomendación, pues la Secretaría General de la OEA no ha recibido la designación de la Oficina de la Procuraduría General como autoridad central de Las Bahamas para la canalización de solicitudes de asistencia para cooperación técnica mutua a los efectos de la Convención. (Véase la recomendación 6.1 de la sección 6 del Anexo 1 del presente Informe)

Recomendación 6.2 sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

<sup>305</sup> Respuestas al Cuestionario, pág. 62, *supra* nota 4.

<sup>306</sup> Respuestas al Cuestionario, págs. 62 – 63, *supra* nota 4.

<sup>307</sup> *Ídem.*, págs. 63 – 64. Véase también el Informe de la Primera Ronda, pág. 22, *supra* nota 259.

*Aplicar un mecanismo de canalización de solicitudes de cooperación sobre asistencia judicial mutua, según lo previsto en la Convención.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 6.1 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[407] Con respecto a la recomendación que antecede, en su respuesta el Estado analizado señala que Las Bahamas canaliza las solicitudes de cooperación sobre asistencia jurídica mutua a través de notas diplomáticas.<sup>308</sup>

[408] Además, el Comité señala que se ha establecido un procedimiento de recepción de solicitudes de asistencia y cooperación jurídica mutua, como se establece en la respuesta al cuestionario formulada por Las Bahamas.<sup>309</sup>

[409] El Comité toma nota de la satisfactoria consideración, por el Estado analizado, de la recomendación 6.2.

## **7. RECOMENDACIONES GENERALES**

Recomendación 7.1 sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Promover el examen y el mejoramiento continuos, de las disposiciones que rigen a las autoridades y los funcionarios públicos y adaptarlas, en la medida que corresponda, para actualmente al servicio civil, para prevenir y castigar comportamientos impropios de los mismos, a todo nivel, y establecer claras obligaciones relativas al cumplimiento de funciones públicas.*

[410] Con respecto a la recomendación que antecede, en su respuesta el Estado analizado señala que el Departamento del Servicio Público es el órgano que emite disposiciones, denominadas Órdenes Generales y Reglamentos del Servicio Público, que son objeto de continuo examen y que se utilizan para regular la conducta de los altos funcionarios y empleados públicos y para establecer claramente las obligaciones que deben cumplir en el desempeño de sus cometidos.<sup>310</sup>

[411] El Comité toma nota de que si bien las Órdenes y los Reglamentos son objeto de análisis, no se proporciona otra información acerca de si algo similar ocurre con otras normas, como las del Código de Ética para Ministros y Secretarios Parlamentarios y el Manual de Procedimiento del Gabinete y Ministerial. Tampoco existe información acerca de si las disposiciones en vigor han sido mejoradas y adaptadas para ayudar a prevenir y sancionar actos impropios de autoridades y empleados públicos de todo nivel.

[412] En virtud de lo que antecede, el Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la recomendación que antecede, así como de la necesidad de que siga prestando atención a la misma. (Véase la recomendación 7.1 de la sección 7 del Anexo 1 del presente Informe)

Recomendación 7.2 sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

---

<sup>308</sup> Respuestas al Cuestionario, pág. 64, *supra* nota 4.

<sup>309</sup> *Ídem.*, págs. 59 – 60.

<sup>310</sup> *Ídem.*, págs. 65 – 66.

*Elaborar procedimientos que garanticen que las autoridades y los empleados públicos reciban la capacitación que necesitan para desempeñar eficazmente sus cometidos.*

[413] Con respecto a la recomendación que antecede, en su respuesta el Estado analizado señala que el Departamento del Servicio Público publica oportunidades de capacitación e invita a participar en esas actividades. Además el Estado analizado señala que los anuncios se realizan continuamente, mediante circulares, medios de prensa, anuncios en periódicos y a través del sitio web del Gobierno, y que el público tiene acceso a los servicios de la Agencia Nacional de Capacitación.<sup>311</sup>

[414] En virtud de lo que antecede, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la implementación de dicha recomendación, teniendo en cuenta que no se ha proporcionado información sobre el contenido de la capacitación proporcionada, para determinar en qué medida guarda relación con temas referentes a la lucha contra la corrupción. (Véase la recomendación 7.2 de la sección 7 del Anexo 1 del presente Informe)

Recomendación 7.3 sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Seleccionar, elaborar y dar a conocer a la Secretaría Técnica del Comité procedimientos e indicadores que permitan realizar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe.*

[415] Con respecto a la recomendación que antecede, en su respuesta el Estado analizado señala que responde a solicitudes regulares de información sobre la aplicación de la Convención, y que responde a cuestionarios.<sup>312</sup>

[416] En virtud de lo que antecede, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la implementación de dicha recomendación. (Véase la recomendación 7.3 de la sección 7 del Anexo 1 del presente Informe)

---

<sup>311</sup> *Ídem.*, págs. 66 – 67.

<sup>312</sup> *Ídem.*, pág. 67.

## **ANEXO I**

### **RECOMENDACIONES VIGENTES Y REFORMULADAS SOBRE LOS TEMAS ANALIZADOS EN LA PRIMERA RONDA**

#### **1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 y 2 DE LA CONVENCIÓN)**

##### **1.1 Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento**

###### **Recomendación:**

Asegurarse de que las leyes referentes a conflictos de intereses se apliquen plenamente, que respalden el cumplimiento de las recomendaciones del punto 7.1 cuando corresponda, y sean aplicables a todas las autoridades y empleados públicos, para hacer posible la eficaz observancia práctica del sistema de ética pública.

###### **Medidas sugeridas:**

- a) Establecer o adaptar y luego implementar normas de conducta a las oficinas que actualmente no están sujetas a control alguno, en cuyo contexto deberían establecerse sanciones disuasivas por violaciones de esas normas.
- b) Aplicar a senadores y diputados un código de ética en que se prevean mecanismos de sanciones por infracciones a sus disposiciones.
- c) Aplicar restricciones sobre conflictos de intereses durante un periodo apropiado tras el cese en la función pública.
- d) Aplicar restricciones sobre conflictos de intereses durante un periodo apropiado tras el cese en la función pública.

##### **1.2 Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos**

###### **Recomendación:**

Reforzar los sistemas de control dentro de la gestión pública desarrollando normas susceptibles de aplicación coercitiva aplicables a todas las autoridades y funcionarios públicos, que establezcan la obligación de conservar y usar en forma apropiada los recursos que se les confían.

##### **1.3 Medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento**

###### **Recomendación:**

Desarrollar y fortalecer los mecanismos con que cuenta el país para imponer a los funcionarios públicos la obligación de denunciar a las autoridades competentes los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.

Medidas sugeridas:

- a) Establecer medidas y sistemas que exijan informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública para aquellos funcionarios y empleados públicos que actualmente no se encuentran obligados a hacerlo.
- b) Capacitar adecuadamente a las autoridades y funcionarios en relación con la obligación de denunciar actos de corrupción, y establecer mecanismos de protección para los denunciantes.

**2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS  
(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN)**

Recomendación:

Reforzar los sistemas de declaración de ingresos, activos y pasivos.

Medidas sugeridas:

- a) Establecer un mecanismo por el cual, dentro de determinado período anterior o inmediato posterior a ser nombrado como Senador o titular de un cargo de alta jerarquía al que se aplique el requisito de la Notificación previsto en la Ley de Divulgación Pública (Aplicación a titulares de cargos públicos y autoridades públicas), las personas en cuestión deban efectuar una declaración de su activo, su pasivo y sus ingresos y los de su cónyuge y sus hijos. Esas declaraciones deberían luego utilizarse para detectar potenciales conflictos de intereses y recomendar las medidas que deba adoptar la persona para evitarlos, asimismo detectar otras violaciones a la ley.
- b) Considerar la posibilidad de dar acceso al público a las declaraciones formuladas por quienes hayan sido designados para cargos superiores, cuando sea apropiado.

**3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES  
SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA CONVENCIÓN)**

Recomendación 3.1:

Reforzar el sistema de seguimiento de la aplicación de las disposiciones del Artículo III, párrafos 1, 2 y 4.

Medidas sugeridas:

- a) Establecer órganos de control superior para las oficinas que actualmente no están sujetas a control alguno.
- b) Considerar la posibilidad de disponer en el Código de Ética para Ministros y Secretarios Parlamentarios la creación de un órgano superior de control de la conducta de los mismos.

Recomendación 3.2:

Establecer órganos, o conceder facultades adicionales a un órgano u órganos existentes, para garantizar el apropiado seguimiento de los mecanismos que se recomiendan en la sección 4, siguiente (Artículo III, párrafo 11).

#### **4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11 DE LA CONVENCIÓN)**

##### **4.1. Mecanismos de participación en general**

Recomendación:

Crear sistemas de procedimientos transparentes adicionales, que permitan a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar con mayor eficacia en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción

##### **4.2 Mecanismos para el acceso a la información**

Recomendación 4.2.1:

Establecer un sistema de libertad de información o acceso al sistema de información pública susceptible de aplicación coercitiva.

Medidas sugeridas:

- a) Sancionar una Ley de Libertad de Información que regule y facilite el acceso del público a información con fines de control de las instituciones públicas.
- b) Establecer claros estándares con respecto a los tipos de información que se proporcionarán en virtud de la Ley de Libertad de Información.
- c) Implementar programas de capacitación y difusión con respecto a la Ley de Libertad de Información, para facilitar la comprensión, por funcionarios públicos y ciudadanos, de los mecanismos previstos en dicha ley.
- d) Establecer un cronograma de implementación de las disposiciones de la Ley de Libertad de Información, estableciendo prioridades y medidas que hayan de llevarse a cabo, plazos para su ejecución y objetivos anuales que hayan de cumplirse, y difundir ese cronograma para que el público pueda valorar los esfuerzos llevados a cabo por Las Bahamas para avanzar en la implementación de la Ley.
- e) Establecer normas que reconozcan el derecho de toda persona de solicitar información o consultar u obtener copias de documentos referentes a actuaciones oficiales que estén en poder o bajo el control de instituciones públicas, a menos que se trate de documentos protegidos por la ley.

Recomendación 4.2.2:

Establecer el requisito de que todas las entidades públicas, en la medida en que sea factible, publiquen sus procedimientos y otra información pertinente mediante métodos de comunicaciones tales como publicaciones, centros de difusión, medios de comunicación de masas y sitios en Internet

**4.3. Mecanismos de consulta**Recomendación 4.3.1:

Establecer mecanismos de consulta que permitan a las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil para generar opiniones y propuestas para que se tengan en cuenta a los efectos de prevenir, detectar, investigar y castigar la corrupción.

Recomendación 4.3.2:

Diseñar e implementar programas que publiciten los mecanismos de consulta y, cuando corresponda, capacitar y proporcionar los instrumentos necesarios para la efectiva implementación de esos mecanismos.

**4.4. Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública**Recomendación:

Establecer mecanismos que alienten a las organizaciones no gubernamentales y a la sociedad civil a participar en la gestión pública.

Medidas sugeridas:

- a) Establecer mecanismos que promuevan la participación de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil en programas de prevención de la corrupción.
- b) Dar a conocer al público los mecanismos de prevención de la corrupción existentes.

**4.5. Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública**Recomendación:

Establecer mecanismos que alienten a las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil a participar en el seguimiento de la gestión pública y generar opiniones y propuestas para que se tengan en cuenta para la prevención, detección, investigación y castigo de la corrupción.

Medidas sugeridas:

- a) Promover, cuando corresponda, métodos que permitan, faciliten y ayuden a las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil a desarrollar actividades de seguimiento de la gestión pública y en la prevención de la corrupción.

- b) Diseñar y aplicar programas específicos tendientes a dar publicidad a los mecanismos de promoción de la participación en seguimiento de la gestión pública.

## **5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN)**

### Recomendación 5.1.1:

Diseñar y aplicar un programa general de información y capacitación de las autoridades competentes y a los funcionarios públicos con respecto a las disposiciones relacionadas con la asistencia judicial mutua prevista en la Convención Interamericana contra la Corrupción y en otros tratados suscritos por Bahamas.

### Recomendación 5.1.2:

Dar a conocer a las autoridades competentes de los países con los que Bahamas mantiene estrechas o continuas relaciones de cooperación mutua los requisitos que deben cumplirse para preparar peticiones, así como la documentación que debe adjuntarse.

### Recomendación 5.2.1:

Realizar un examen general de los ámbitos específicos en que Bahamas podría necesitar o recibir en forma útil cooperación técnica mutua para prevenir, detectar, investigar y castigar actos de corrupción y, sobre la base de ese examen, diseñar y aplicar una estrategia general que permita a Bahamas acudir a otros Estados partes o no partes de la Convención y a instituciones financieras que participen en la cooperación internacional, para determinar la cooperación técnica necesaria.

### Recomendación 5.2.2:

Promover programas de intercambio de cooperación técnica con otros Estados partes con respecto a mecanismos y métodos eficaces de prevención, detección, investigación y castigo de actos de corrupción.

## **6. AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN)**

### Recomendación:

Notificar formalmente a la Secretaría General de la OEA la designación de la autoridad central, conforme a las formalidades preceptivas.

## **7. RECOMENDACIONES GENERALES**

### Recomendación 7.1:

Promover el examen y el mejoramiento continuos, de las disposiciones que rigen a las autoridades y los funcionarios públicos y adaptarlas, en la medida que corresponda, para actualmente al servicio civil, para prevenir y castigar comportamientos impropios de los mismos, a todo nivel, y establecer claras obligaciones relativas al cumplimiento de funciones públicas.

### Recomendación 7.2:



Elaborar procedimientos que garanticen que las autoridades y los empleados públicos reciban la capacitación que necesitan para desempeñar eficazmente sus cometidos

Recomendación 7.3:

Seleccionar, elaborar y dar a conocer a la Secretaría Técnica del Comité procedimientos e indicadores que permitan realizar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe.

**ANEXO II****AGENDA DE LA VISITA *IN SITU* A LAS BAHAMAS**

<b><u>Lunes, 22 de septiembre de 2014</u></b>	
15:00 hrs. – 16:00 hrs. <i>Oficina de la Procuraduría General</i>	<b>Reunión de coordinación entre los representantes del Estado analizado y la Secretaría Técnica.</b>
19:30 hrs. – 20:00 hrs. <i>British Colonial Hilton Hotel</i>	<b>Reunión de coordinación entre los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.</b>
<b><u>Martes, 23 de septiembre de 2014</u></b>	
9:00 hrs. – 11:00 hrs. <i>Oficina de la Procuraduría General</i>	<b>Reuniones con organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, con organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, académicos o investigadores.</b>
	<b>Tema:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Participación del sector privado en las iniciativas de lucha contra la corrupción</b></li> </ul>
	<u>Participantes:</u> <i>Colegio de Abogados de Las Bahamas</i> Elsworth Johnson, Presidente <i>Instituto de Contadores Certificados de Las Bahamas</i> <b>Mr. Darnell Osbourne, Presidente</b> <i>Cámara de Comercio de Las Bahamas</i> Gowan Bowe, Vice Presidente
11:00 hrs. – 11:45 hrs.	<b>Reuniones con organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, con organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, académicos o investigadores. (Continuación)</b>
	<b>Temas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Perspectivas de la sociedad civil sobre los órganos de control superior para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción</b></li> <li>• <b>Los esfuerzos para abordar recomendaciones de la Primera Ronda</b></li> </ul>
	<u>Participante:</u> <i>La Sociedad Civil de Las Bahamas</i> Olivia Saunders, Profesora, Colegio de Las Bahamas
11:45 hrs. – 12:30 hrs.	<b>Comité de Cuentas Públicas</b>
	<b>Temas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Perspectivas sobre los órganos de control superior para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción</b></li> </ul>

	<u>Participante:</u> Hubert Chipman, M. P., Presidente
12:30 hrs. – 14:00 hrs.	<b>Almuerzo</b>
14:00 hrs. – 18:00 hrs.	<b>Oficina de la Procuraduría General</b>
14:00 hrs. – 15:00 hrs.	<b>Panel 1:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Introducción institucional (10 minutos)</b></li> <li>• <b>Autonomía de las funciones</b></li> <li>• <b>Determinación de los recursos presupuestarios y humanos</b></li> </ul>
	<u>Participantes:</u> Damian Gomez, Ministro del Estado, Asuntos Jurídicos Deborah Fraser, Directora de Asuntos Jurídicos Garvin Gaskin, Director Interino del Departamento de Fiscalía Cheryl Bethell, Comisionada Adjunta, Comisión de la Reforma Jurídica Franklyn Williams, Director Adjunto del Departamento de Fiscalía
15:00 hrs. – 16:00 hrs.	<b>Panel 2:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Coordinación con otros organismos gubernamentales en el cumplimiento de sus mandatos</b></li> <li>• <b>Controles internos y mecanismos de rendición de cuentas</b></li> <li>• <b>Selección de altos funcionarios y recursos humanos</b></li> </ul>
	<u>Participantes:</u> Damian Gomez, Ministro del Estado, Asuntos Jurídicos Deborah Fraser, Directora de Asuntos Jurídicos Garvin Gaskin, Director Interino del Departamento de Fiscalía Cheryl Bethell, Comisionada Adjunta, Comisión de la Reforma Jurídica Franklyn Williams, Director Adjunto del Departamento de Fiscalía
16:00 hrs. – 17:00 hrs.	<b>Panel 3:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Capacitación</b></li> <li>• <b>Resultados y buenas prácticas</b></li> <li>• <b>Dificultades</b></li> </ul>
	<u>Participantes:</u> Damian Gomez, Ministro del Estado, Asuntos Jurídicos Deborah Fraser, Directora de Asuntos Jurídicos Garvin Gaskin, Director Interino del Departamento de Fiscalía Cheryl Bethell, Comisionada Adjunta, Comisión de la Reforma Jurídica Franklyn Williams, Director Adjunto del Departamento de Fiscalía

17:00 hrs. – 18:00 hrs.	<p><b>Panel 4:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Seguimiento de recomendaciones de la Primera Ronda</b></li> <li>- Norma de conducta destinado a prevenir conflictos de intereses</li> <li>- Normas que imponen a los funcionarios públicos la obligación de denunciar actos de corrupción</li> <li>- Órganos de control superior</li> <li>- Mecanismos destinados a alentar la participación en la administración pública</li> <li>- Acceso a la información</li> <li>- Asistencia y cooperación</li> </ul> <p><u>Participantes:</u>  Damian Gomez, Ministro del Estado, Asuntos Jurídicos  Deborah Fraser, Directora de Asuntos Jurídicos  Garvin Gaskin, Director Interino del Departamento de Fiscalía  Cheryl Bethell, Comisionada Adjunta, Comision de la Reforma Juridica  Franklyn Williams, Director Adjunto del Departamento de Fiscalía</p>
18:00 hrs.	<p><b>Reunión informal</b> con los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.</p>
<b><u>Miércoles, 24 de septiembre de 2014</u></b>	
9:00 hrs. – 11:30 hrs.	<b>Comisión de Divulgación Pública</b>
9:00 hrs. – 10:00 hrs.	<p><b>Panel 5:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Introducción institucional (10 minutos)</b></li> <li>• <b>Autonomía de funciones y coordinación con otros órganos gubernamentales</b></li> <li>• <b>Recursos presupuestarios y humanos</b></li> </ul> <p><u>Participantes:</u>  Garnet Knowles, Secretario  Philip B. Stubbs, Miembro  Paulamae Rusell, Oficial Financiero, Oficina del Gabinete  Katherina Smith, Secretaria Asistente Principal, Oficina del Gabinete  Lorraine P. Taylor, Secretaria Asistente, Oficina del Gabinete</p>
10:00 hrs. – 11:00 hrs.	<p><b>Panel 6:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Manuales y capacitación</b></li> <li>• <b>Uso de tecnología</b></li> <li>• <b>Controles internos y mecanismos de rendición de cuentas</b></li> </ul> <p><u>Participantes:</u>  Garnet Knowles, Secretario  Philip B. Stubbs, Miembro  Paulamae Rusell, Oficial Financiero, Oficina del Gabinete  Katherina Smith, Secretaria Asistente Principal, Oficina del Gabinete  Lorraine P. Taylor, Secretaria Asistente, Oficina del Gabinete</p>

11:00 hrs. – 11:30 hrs.	<p><b>Panel 7:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dificultades</b></li> <li>• <b>Resultados y sistematización de datos</b></li> <li>• <b>Seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema de registro de ingresos, activos y pasivos</li> </ul> </li> </ul> <p><u>Participantes:</u>  Garnet Knowles, Secretario  Philip B. Stubbs, Miembro  Paulamae Rusell, Oficial Financiero, Oficina del Gabinete  Katherina Smith, Secretaria Asistente Principal, Oficina del Gabinete  Lorraine P. Taylor, Secretaria Asistente, Oficina del Gabinete</p>
11:30 hrs. – 12:30 hrs.	<p><b>Reuniones con organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, con organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, académicos o investigadores. (Continuación)</b></p>
	<p><b>Temas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Perspectivas de la sociedad civil sobre los órganos de control superior para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción</b></li> <li>• <b>Los esfuerzos para abordar recomendaciones de la Primera Ronda</b></li> </ul> <p><u>Participantes:</u>  <i>La Sociedad Civil de Las Bahamas</i>  Anthony Hamilton, Presidente  A.L. Archer, Vicepresidente  Sharmaine Adderley, Secretaria Asistente</p>
12:30 hrs. – 14:00 hrs.	<p><b>Almuerzo</b></p>
14:00 hrs. – 16:00 hrs.	<p><b>Departamento del Auditor General</b></p>
14:00 hrs. – 15:00 hrs.	<p><b>Panel 8:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Introducción institucional (10 minutos)</b></li> <li>• <b>Alcance de las funciones, coordinación con otros organismos públicos, Recuperación de bienes públicos</b></li> </ul> <p><u>Participante:</u>  Terrance Bastian, Auditor General</p>
15:00 hrs. – 16:00 hrs.	<p><b>Panel 9:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Manuales y otros documentos, Capacitación y Tecnología</b></li> <li>• <b>Mecanismos de rendición de cuentas para el manejo de las reclamaciones de los ciudadanos</b></li> <li>• <b>Recursos presupuestarios y humanos</b></li> </ul>

	<u>Participante:</u> Terrance Bastian, Auditor General
16:00 hrs. – 17:30 hrs.	<b>Seguimiento de las Recomendaciones de la Primera Ronda</b>
	<b>Panel 10:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones pública</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Restricciones posteriores al empleo</li> <li>- Potestades discrecionales del Primer Ministro</li> <li>- Obligación de conservación y uso adecuados de recursos públicos</li> </ul> </li> <li>• <b>Órganos de control superior</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Establecimiento de órganos de control superior</li> </ul> </li> <li>• <b>Mecanismos de consulta; mecanismos para estimular la participación y mecanismos de participación en el seguimiento de la Administración Pública</b></li> </ul>
	<u>Participantes sugeridos:</u> Damian Gomez, Ministro del Estado, Asuntos Jurídicos Deborah Fraser, Directora de Asuntos Jurídicos Cheryl Bethell, Comisionada Adjunta, Comision de la Reforma Juridica Franklyn Williams, Director Adjunto del Departamento de Fiscalía
17:30 hrs	<b>Reunión informal</b> con los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.
<b>Jueves, 25 de septiembre de 2014</b>	
9:30 hrs. – 12:30 hrs.	<b>Unidad de Inteligencia Financiera</b>
9:30 hrs. – 10:30 hrs.	<b>Panel 11:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Introducción institucional (10 minutos)</b></li> <li>• <b>Autonomía de sus funciones</b></li> <li>• <b>Determinación de los recursos presupuestarios y humanos</b></li> </ul>
	<u>Participantes:</u> Inspector Basil Collie, Director Adjunto Joann Creary, Oficial Juridica Superintendente Clement Lightbourne, Real Fuerza de Policía de Las Bahamas
10:30 hrs. – 11:30 hrs.	<b>Panel 12:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Coordinación con otros organismos gubernamentales en cumplimiento de sus mandatos</b></li> <li>• <b>Controles y mecanismos de rendición de cuentas internos</b></li> </ul>
	<u>Participantes:</u> Inspector Basil Collie, Director Adjunto Joann Creary, Oficial Juridica Superintendente Clement Lightbourne, Real Fuerza de Policía de Las Bahamas

11:30 hrs. – 12:30 hrs.	<b>Panel 13:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Capacitación</b></li> <li>• <b>Resultados</b></li> <li>• <b>Dificultades</b></li> </ul>
	<u>Participantes:</u> Inspector Basil Collie, Director Adjunto Joann Creary, Oficial Juridica Superintendente Clement Lightbourne, Real Fuerza de Policía de Las Bahamas
12:30 hrs. – 14:00 hrs.	<b>Almuerzo</b>
14:00 hrs. – 16:30 hrs.	<b>Comisión de Cumplimiento</b>
14:00 – 15:00 hrs.	<b>Panel 14:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Introducción institucional (10 minutos)</b></li> <li>• <b>Autonomía de sus funciones</b></li> <li>• <b>Determinación de los recursos presupuestarios y humanos</b></li> </ul>
	<u>Participantes:</u> Stephen Thomas, Inspector Dominique Toote, Examinadora Principal
15:00 – 16:00 hrs.	<b>Panel 15:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Coordinación con otros organismos gubernamentales en el cumplimiento de sus mandatos</b></li> <li>• <b>Controles y mecanismos de rendición de cuentas internos</b></li> <li>• <b>Recursos humanos</b></li> </ul>
	<u>Participantes:</u> Stephen Thomas, Inspector Dominique Toote, Examinadora Principal
16:00 – 16:30 hrs.	<b>Panel 16:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Capacitación</b></li> <li>• <b>Resultados</b></li> </ul>
	<u>Participantes:</u> Stephen Thomas, Inspector Dominique Toote, Examinadora Principal
16:30 hrs. – 17:00 hrs.	<b>Reunión informal</b> con los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.
17:00 hrs.	<b>Reunión final</b> con los representantes del Estado analizado, los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.

**AUTORIDAD DE CONTACTO DEL ESTADO ANALIZADO PARA LA COORDINACIÓN  
DE LA VISITA *IN SITU*, Y REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DEL  
SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR Y DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
MESICIC**

**ESTADO ANALIZADO:**

**LAS BAHAMAS**

Franklyn Williams

Experto Titular ante del Comité de Expertos del MESICIC  
Director Adjunto del Departamento de Fiscalía

**ESTADOS MIEMBROS DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR:**

**COSTA RICA**

Tatiana Gutiérrez Delgado

Experta Titular de Costa Rica en el Comité de Expertos del MESICIC  
Procuradora de la Ética Pública  
Procuraduría General de la República

**GUYANA<sup>313</sup>**

Gail Teixeira

Experta Titular ante el Comité de Expertos del MESICIC  
Asesora Presidencial sobre Gobernanza

**SECRETARÍA TÉCNICA DEL MESICIC**

Rodrigo Silva

Oficial Jurídico del Departamento de Cooperación Jurídica  
Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA

---

<sup>313</sup> Previo a la visita *in situ*, el representante de Guyana informó a la Secretaría Técnica que, debido a circunstancias imprevistas, ella no podría participar en la visita.